

19ª REUNION — Continuación de la 10ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) — JUNIO 3 DE 1964

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig y Miguel P. Del Pero

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
ACHIARY, Juan C.
ALFONSIÑ, Raúl R.
ALMADA, Jorge Mariano
AMURA, Luis
ARANA, Tomás P.
ARRASCAETA, Félix de
AVILA, Eduardo Miguel
BACCAY, Rodolfo D.
BACHINI, José A.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALBOA, Hernán A.
BALESTRA (h.), Juan
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BELNICOFF, Manuel
BERHONGARAY, Pedro J.
BERRINI, Emilio
BILBAO, Saturnino
BO, Angel
BOBILLO, Luis Ignacio
BOFFI, Luis L.
BRAVO, Héctor F.
CACERES, Roberto M.
CAGGIANO, Angel R.
CALABRESE, Pablo
CALVO, Carlos Alberto
CANTONI, Angel Serafin
CARDENAS, Juan Carlos
CARO, José Armando
CARREIRA, Emilio
CATALAN, Guillermo
CENTENO, José Isaac
COGGIOLA, Luis S.
COLELLO, Clemente Juan
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTINI, Juan Carlos
CORAL, Juan Carlos
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
COSTANTINO, Adolfo I.
CHEBLE, Francisco A.
DAMIANI, Salvador
DE CARA, José Eduardo
DEL PERO, Miguel P.
DÍAZ, Diógenes C.
DÍAZ O'KELLY, Felipe F.
DI LEO, Amadeo
DOMINGORENA, Horacio O.
DOMÍNGUEZ, Luis C.
ELENA, Reinaldo
FABRIZIO, Luis N.
FERNÁNDEZ, José M.

FERNÁNDEZ, Raúl
FERNÁNDEZ MENDY, Julio O.
FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Isidro
FERRARI, Luis
FERREIRA, Jorge W.
FIOL, Juan Antonio
FISCHER, Mauricio
FRAGA, Jorge Horacio
FREGA, José
GALEANO, Roberto A.
GARAY, Fermín J.
GARCÍA, Horacio
GARCÍA LEYENDA, F. Rodolfo
GARIBALDI, Alberto
GARÓFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Américo
GODOY, Ruperto Honorio
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GONZÁLEZ BERGEZ, Pablo
GRAU, Mario A.
GUALCO, Jorge Nelson
GUTIÉRREZ, Eduardo O.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
IGLESIAS, Israel
JOFRÉ, Emilio
LEJARRAGA, Pablo
LEÓN, Luis Agustín
LESCANO, Edmundo A.
LOZANO, Martín
LUCO, Juan A.
LLAVER, Santiago Felipe
MAGGI, José M.
MAGLIETTI, Alberto R.
MALDONADO, Carlos A.
MANSILLA, José E.
MARSICO, Adalberto O.
MARTÍNEZ, Ramón S.
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael J.
MASSOLO, Eduardo A.
MÉNDEZ DOYLE, Abel Víctor
MERCADO, José Ignacio
MIGANNE, Carlos J.
MINSK, Hugo E.
MOLINAS, Ricardo F.
MONTE, Ricardo Álvaro
MORE ROIG, Arturo
MOSSET ITURRASPE, Mario
MUNIAGURRIA, Camilo
MUNIZ, Ramón A.
MURATORI, Eduardo D.
MURMIS, Oscar
MUSACCHIO, Vicente M.
MUSITANI, Héctor Francisco
OBREGÓN, Pedro A.

OCAMPO, Carlos E.
OREJA, Pablo Fermín
ORTIZ HERNÁNDEZ, Angel H.
PALACIOS, Alfredo L.
PATLIS, León
PEDRINI, Ferdinando
PENA, Roberto M.
PEÑA Y LILLO, Silvestre
PEREIRA, Antonio
PÉREZ, Raúl
PÉREZ GALLART, Alcides B.
PERNASSETTI, Horacio
PESSINO, Felipe
PICADO, Estanislao
PIRAGINE NIVEYRO, Fernaudo
PIZARRO, Teodosio F.
POSSE, Melchor S.
PUGLIESE, Juan C.
RASINES, Osvaldo Gregorio
RENÉ, José María
REQUENA, Raúl María
RIAL, Oscar
RITACCO, Araldo A.
RODRÍGUEZ, Rogelio Ramón
RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRÍGUEZ VAGARÍA, Eduardo
ROIS, Roberto
ROMEU VERDIER, Gabriel
ROSITO, M. Oscar
ROUZAUT, Adolfo R.
ROZAS, José E.
SAGO, Fayiz
SALADO, Francisco A.
SANDLER, Héctor R.
SANTA MARÍA, Oscar Hipólito
SARRULLE, Oscar E.
SCALITER, Juan
SCARPELLO, Cayetano
SCHAPIRA, David
SCHAPOSNIK, Eduardo C.
SERÚ GARCÍA, Alberto
SOLANA, Jorge D.
SOLARI, Juan Antonio
TACHELLA, Eliberto S. J.
TARULLI, Pascual
TORREIRO, Raúl
TORRIGLIA, Enrique F.
TORTONESE, Dante Oscar
TRÓCCOLI, Antonio A.
VACA LOBO, Juan Manuel
VACCAREZZA, Eduardo H.
VALENTE DE PÉREZ TORT, Lidia
VÁZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de

VENTEMIGLIA, Rogelio A.
VINALS, Fernando J.
ZANONI, Juan Claudio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, EN COMISION:

BUSACCA, Salvador F.
CHRISTE, Jorge J.
ROBERTO, Mario
RUIZ, José Oscar

AUSENTES, CON LICENCIA:

ANTÓN, Luis
CUERDO, Ramón
NOUGUÉS, Isaías J.

AUSENTES, CON AVISO:

AGUIRRE CAMARA, José
ARIAS, Luis Osvaldo
ARROYO, Ramón F.
AVETA, Francisco O.

BERINI, Carlos J.
BOGLIANO, Palmiro B.
BRAVO, Carlos A.
CASAS, David Jorge
CASTELLAR, Miguel A.
FIGUEROA, Jaime Hernán
LILJESTROM, Eduardo R.
LONGHI, Julio P.
LORENS, Héctor
MUJICA, Manuel Martín
SOLARI, Eduardo A.
VILLANUEVA, Julio A.

SUMARIO

- 1.—**Salario vital, mínimo y móvil.** Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de **Legislación del Trabajo** (especializada) y de **Presupuesto y Hacienda** en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo y de varios señores diputados sobre dicho asunto. (Pág. 870.)
- 2.—**Cuestión de privilegio** planteada por el señor diputado **Cornejo Linares**. Queda pendiente. (Página 871.)
- 3.—**Salario vital, mínimo y móvil.** Continúa la consideración del asunto que se registra en el número 1 de este sumario. (Pág. 872.)
- 4.—**Cuestión de privilegio** registrada en el número 2 de este sumario. Pasa a la **Comisión de Asuntos Constitucionales**. (Pág. 904.)
- 5.—**Salario vital, mínimo y móvil.** Continúa la consideración del asunto que se registra en los números 1 y 3 de este sumario. (Pág. 904.)
- 6.—**Apéndice:**

Inserciones. (Pág. 92%.)

—En Buenos Aires, a los tres días del mes de junio de 1964, a la hora 15 y 40:

1

SALARIO VITAL, MINIMO Y MOVIL

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se reanuda la sesión.

Prosigue la consideración, en particular, de los dictámenes de las comisiones de **Legislación del Trabajo** (especializada) y de **Presupuesto y Hacienda** sobre salario vital, mínimo y móvil.

Tiene la palabra el señor diputado **Pugliese**.

Sr. Pugliese. — A pesar de tratarse de un cuarto intermedio, como se está debatiendo en particular el proyecto de ley y habrá necesidad de votar seguramente casi de inmediato, propongo que se continúe llamando hasta obtener quórum.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia informa que en la casa hay 98 señores diputados y 50 en el recinto.

Si hay asentimiento, se continuará llamando hasta obtener quórum.

—Asentimiento.

—Se continúa llamando.

—A la hora 15 y 50:

Sr. Gómez Machado. — Señor presidente: ¿por qué estamos esperando para continuar la sesión?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se hizo indicación de continuar llamando hasta que hubiera quórum, en razón de que debe continuar la discusión en particular y se presume una inmediata votación.

Sr. Gómez Machado. — Se trata de un cuarto intermedio, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sí, señor diputado. No sé si el señor diputado estaba en el recinto en el momento en que el señor diputado **Pugliese** hizo la indicación, que contó con el asentimiento de los presentes.

Sr. Gómez Machado. — Si estamos en minoría, no puede haber asentimiento para esperar. Lo que corresponde es continuar la sesión, pues se trata de un cuarto intermedio.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La práctica parlamentaria, señor diputado, es que en minoría se continúe llamando hasta obtener número en el recinto.

Sr. Gómez Machado. — En el caso de que la sesión aún no haya comenzado, sí, señor presidente; pero tratándose de un cuarto intermedio, si no se debe votar inmediatamente, lo que corresponde es que la sesión continúe. Y aclaro que de ninguna manera quisiera obstruir la prosecución de esta sesión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Prosigue la sesión y la consideración del artículo 7º.

Sr. Gómez Machado. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado **Gómez Machado**.

Sr. Gómez Machado. — Ruego que se me indique el término de que dispongo para hablar, porque he intervenido ya en este debate.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por tratarse de una segunda intervención, le corresponden cinco minutos. ¿El señor diputado se va a referir al artículo 7º?

Sr. Gómez Machado. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia advierte al señor diputado que hay otros orado-

res anotados con prelación al pase a cuarto intermedio.

Sr. Gómez Machado. — No tengo inconveniente de que hablen primero.

2

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Cornejo Linares. — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Cornejo Linares.

Sr. Cornejo Linares. — Fundo la cuestión de privilegio que paso a plantear en lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución, que dispone que ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.

Como consta en esta Honorable Cámara, estuve ausente de la Capital las últimas dos semanas. A mi regreso me enteré de una publicación en el diario «La Nación», del 16 de mayo, donde se reproduce una carta que supuestamente el general en retiro efectivo Francisco Reynolds me habría dirigido, pero que declaro no ha llegado nunca a mis manos. He requerido, tanto del bloque como de las comisiones de que formo parte, si había llegado esa correspondencia y el resultado fue negativo.

En esa carta se me hacen severos cargos en razón de una expresión que tuve en oportunidad de fundamentar mi proyecto de resolución por el cual pedía que la Honorable Cámara expresara al Poder Ejecutivo su deseo de que se declarara persona no grata al ex embajador McClintock.

El señor Reynolds dice en esta carta que mi único propósito ha sido desprestigiar a las fuerzas armadas e incluso a los gloriosos soldados que dieron su sangre en la revolución del 30, por cuanto yo expresé que dicha revolución tenía las manos sucias de petróleo. Creo que el general Reynolds, como buen soldado, tenía impregnadas o saturadas sus glándulas pituitarias de olor a pólvora, y por eso no pudo percibir el acre perfume del petróleo.

Cuando expresé esa metáfora no quise decir, indudablemente, en ninguna forma, que el general Reynolds y el general Uriburu —por quien tengo gran respeto por ser mi comprovinciano y, además, por ser pariente muy cercano, a quien tuve ocasión de conocer personalmente y con el que tuve discrepancias políticas desde niño— hayan sido instrumento de las empresas petroleras. Pero es evidente que a lo largo de nuestra historia nuestras fuerzas armadas se han movido en revoluciones y conatos revolucionarios, y si bien por las órdenes impartidas por sus jefes, éstas actuaron como instrumentos a veces ciegos e inconscientes de intereses internos y externos. Si no se reconoce esta verdad, no hay interpretación posible de nuestra historia.

En el caso particular de la revolución de septiembre, está bien marcado el poderoso interés petrolero que movió esa revolución. La ley de nacionalización y monopolio del petróleo había sido ya sancionada por la Cámara de Diputados, y se encontraban intervenidas las provincias de San Juan y Mendoza, que habían sido convocadas a elecciones para el 7 de septiembre de 1930; un día antes se produjo el hecho revolucionario. Con esas elecciones se iba a completar la mayoría, la necesaria mayoría en el Senado de la Nación, para que la ley del petróleo fuese sancionada.

Por lo demás, no voy a caer en la ingenuidad de que hace gala el señor general Reynolds cuando dice que fue la enfermedad del señor Yrigoyen lo único que motivó la intervención del Colegio Militar y que evitó el total fracaso de la revolución. Si las fuerzas armadas tienen derecho a sublevarse porque el presidente de la Nación está enfermo, ¿qué legalidad, qué estabilidad institucional puede haber en la Nación?

Sr. Jofré. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Cornejo Linares. — No tengo tiempo, señor diputado. En otro momento se la voy a conceder, pero ahora me lo impide la tiranía del tiempo.

Sr. Jofré. — Es para contestar esas expresiones inaceptables del señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvase no interrumpir el señor diputado. En las cuestiones de privilegio no procede entablar un debate por vía tangencial.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Cornejo Linares.

Sr. Cornejo Linares. — Me estoy refiriendo expresamente a las acusaciones, porque de allí se saca que al hacer la crítica a la revolución del 6 de septiembre mediante mi metáfora, el suscrito habría hecho imputaciones lesivas al prestigio del Ejército Argentino, imputaciones que no he querido hacer en ningún momento. Por el contrario, me honro en ser subteniente de la reserva del Ejército Argentino, graduado en el glorioso Regimiento 5 de Caballería General Güemes. Tengo gran amor por las instituciones armadas, por el ejército de Belgrano y de San Martín, por el ejército de Napoleón Uriburu, por el de Levalle y, más recientemente, por el ejército de Riccheri, de Savio y de Mosconi. Y también, señor presidente, por el ejército que dio tantos dignos soldados que, como el general Valle, los coroneles Cogorno, Ibazeta y otros valientes, supieron morir de frente gritando «viva la patria».

Nosotros, los justicialistas, a lo único a que aspiramos respecto de las fuerzas armadas, es que sean la garantía fiel de la defensa de nuestras instituciones, del pueblo y de la soberanía de la Nación.

Creo, señor presidente, que con estas pocas palabras he dejado bien precisado mi pensa-

miento respecto a la metáfora que empleé al fundamentar el proyecto relativo al embajador McClintock. Igualmente, creo que he dejado bien claro cuál es mi concepto de las fuerzas armadas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar si la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Cornejo Linares tiene carácter preferente.

Sr. Jofré. — Pido la palabra para formular una aclaración personal.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Entiende la Presidencia que el señor diputado no ha sido aludido.

Sr. Jofré. — Sin embargo, señor presidente, necesito hacer una aclaración muy importante para rebatir inexactitudes dichas por el señor diputado Cornejo Linares.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Reglamentariamente, y el señor diputado lo sabe, no corresponde que se le conceda el uso de la palabra.

Se va a llamar para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Cornejo Linares. — Señor presidente: a fin de evitar dilaciones en la consideración del proyecto de ley que está tratando la Honorable Cámara, que considero de fundamental importancia, solicito que la cuestión de privilegio que he planteado pase directamente a comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a postergar la votación si así lo admite el señor diputado que planteó la cuestión de privilegio.

Sr. Cornejo Linares. — De acuerdo, señor presidente.

3

SALARIO VITAL, MINIMO Y MOVIL

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la consideración del artículo 7º del proyecto de ley sobre salario vital, mínimo y móvil.

Tiene la palabra el señor diputado Salado.

Sr. Salado. — Señor presidente: en nombre del bloque de la democracia cristiana voy a insistir en la propuesta hecha oportunamente a fin de que en el texto de la ley, en su artículo 7º, se nomine expresamente a la Confederación General del Trabajo como organismo integrante del Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil.

Las razones en que había abundado anteriormente, y que no pudimos continuar expresando debido a que el debate derivó hacia cuestiones ajenas al tema en consideración, hacen necesario que yo reitere el pedido. Al mismo tiempo lo hago extensivo para el tratamiento del agregado propuesto, y que oportunamente hiciera llegar a la mesa de la Presidencia.

Por otro lado, nosotros, los demócratas cristianos, tenemos interés en el pasado, porque como argentinos nos pertenece. Cualquiera sea el campo político del cual hayan provenido los

errores o las grandes afirmaciones de la vida política argentina, entendemos que ese pasado nos pertenece como parte del pueblo que integramos.

En nombre de todo ello, pensamos en la continuidad jurídica que hace falta mantener en el país. También tenemos en cuenta lo que hemos sancionado en oportunidad de tratarse la ley nacional de abastecimiento, y más que nada pensamos en el elemento moral de la propuesta que se refiere a que la defensa del salario, a que la defensa de la clase trabajadora sea ejercida por sus propios organismos. Esta identidad de la clase trabajadora con sus organismos laborales centrales es lo que a nosotros nos permite insistir en la propuesta que he mencionado.

Por todo ello, y para abreviar el tratamiento de esta cuestión, reitero la posición de la democracia cristiana relacionada con ese tema.

Sabemos, y esto nos consta por lo observado a lo largo de muchos años, que la CGT es el organismo representativo de los trabajadores argentinos, y esta constancia que tenemos, que nos da la historia del país, nos lleva a insistir con plena conciencia en la propuesta planteada.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Massolo.

Sr. Massolo. — Declino hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Cantoni.

Sr. Cantoni. — También declino de hacer uso de ella.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Del Pero.

Sr. Del Pero. — Tampoco voy a hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — El señor diputado Murmis no se encuentra en el recinto.

Tiene la palabra el señor diputado Luco, para una segunda intervención, por el lapso reglamentario de cinco minutos.

Sr. Luco. — Para insistir en los fundamentos que motivan nuestra disidencia parcial respecto de la redacción del artículo 7º, en el que al determinar la forma de integración del Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil y al referirse a las organizaciones de trabajadores, se emplea en el dictamen de la mayoría una fórmula que consideramos imprecisa, ambigua y, como se ha dicho aquí en la sesión pasada, favorece, consciente o inconscientemente, la división del movimiento trabajador en la Argentina.

Los términos originarios del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo —con el que no coincidimos tampoco— contienen en alguna medida una expresión más adecuada, porque establecen que ese consejo lo integrarán por el sector trabajador los representantes de la central obrera con personería gremial más representativa. Sin embargo, por razones que todavía no alcanzamos a comprender, ese proyecto del Poder Ejecutivo fue modificado en la parte pertinente

que estamos examinando, incluyéndose las palabras «la o las entidades más representativas».

Sr. Pena. — ¿Me permite una interrupción, para aclarar el debate?

Sr. Luco. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: no obstante que la comisión entendía y entiende que la redacción del artículo, tal cual fue elaborado, se ajusta a una mejor técnica legislativa, pues solamente incurriendo en una desviación el Poder Ejecutivo podría designar a otros representantes que no fueran los de la CGT, que es la única central con personería gremial, tesis que además concuerda con la posición tradicional de la mayoría de los integrantes de la comisión que firman el dictamen, representantes de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que siempre ha estado por la central única, desde luego querida y aceptada por los trabajadores.

En consecuencia, la mayoría de los integrantes de la comisión han reformado el texto del artículo en esa parte, el que diría «de la central de trabajadores con personería gremial más representativa».

He querido formular esta aclaración a fin de encauzar un poco el debate, porque se estaba realizando sobre la base del dictamen de comisión y ésta ha modificado su criterio en ese aspecto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — De tal manera que, según el señor diputado Pena, la comisión estaría de acuerdo en atribuir la representación a la central obrera con personería gremial más representativa.

Sr. Pena. — Exacto.

Sr. Luco. — He anticipado que aunque la redacción originaria del Poder Ejecutivo —que si no me equivoco es la misma que ha expresado el señor diputado Pena— fuera la del dictamen, no estábamos tampoco de acuerdo, aunque evidentemente era mucho más deficiente la del dictamen de la mayoría. Y voy a explicar por qué.

Tenemos que vivir en términos de realidad, tanto jurídicos, como políticos. Como dijo bien el señor diputado Pena, nadie puede desconocer —no lo desconoce la mayoría de la comisión, ni lo puede desconocer el país— que la CGT es el único organismo central con personería gremial y jurídica reconocida para el nucleamiento de los trabajadores. De todas maneras, y aunque así no fuese, no creo que el proyecto que debatimos sea el que debe determinar la representatividad mayor o menor de una o más centrales para integrar un Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil, porque ello es del ámbito preciso y exclusivo de la ley de asociaciones profesionales, que es la destinada a regular, reconocer y determinar la forma en que

deben otorgarse las personerías jurídicas a las entidades de primero, segundo y tercer grado.

La realidad es que hay una única central de obreros reconocida en la Argentina: la Confederación General del Trabajo. Jurídicamente no veo la necesidad de que en esta ley se coloque una disposición que permita maniobras de tipo político en materia sindical, pues como ya lo hemos expresado reiteradas veces nuestro bloque se opone a la posibilidad jurídica de cualquier maniobra que lleve a ese resultado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia hace presente al señor diputado que ha expirado el término de que reglamentariamente dispone para hacer uso de la palabra.

Sr. Luco. — Concluyo, señor presidente.

La palabra «representatividad», en cierto modo, abre la posibilidad de que se desaten ambiciones sindicales de división y de que por vía de esta ley se cree una segunda central sindical, lo que, como ya he dicho, no es admitido por el justicialismo.

En nombre de mi bloque, declaro categóricamente que la palabra «representatividad» encierra un peligro jurídico y real, por lo que nos oponemos a su inclusión.

Sr. Vedia. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Oportunamente la Presidencia concederá la palabra al señor diputado. Hay varios oradores anotados.

Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

Sr. Gómez Machado. — Señor presidente: me ha llamado la atención el comunicado que dio hace un par de días la Unión Cívica Radical del Pueblo, queriendo dar una explicación, que yo considero capciosa, de lo ocurrido en la última reunión de la Cámara, con respecto al artículo en discusión.

Todos los sectores políticos fueron muy cautos y muy parsimoniosos en esta materia, e incluso se planteó en aquella circunstancia, para evitar una votación y a fin de que no quedaran dudas ni suspicacias, la posibilidad de incluir en el dictamen los términos concretos «Confederación General del Trabajo». Se invitó a la primera minoría a que aceptara la inclusión para aventar sospechas.

Ese comunicado quiere hacer aparecer a los otros sectores políticos como obstaculizando la sanción de esta ley, por lo que creo que ha llegado el momento de decir algo que por razones de mesura y de contemporización no se dijo en esa oportunidad.

Creo que la línea política de la Unión Cívica Radical del Pueblo es concordante con la mantenida en el anterior período legislativo por sus representantes parlamentarios.

Considero que, a través de este subterfugio, se pretende distorsionar y modificar en un futuro cercano la ley de asociaciones profesionales. La idea es dividir el movimiento obrero.

Yo creo, señor presidente, que esa interferencia a través de esta ley es coincidente con el pensamiento de entonces de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Nosotros fuimos los auspiciadores y los autores de la ley, y en aquella oportunidad correspondió oponerse a esa ley, entre otros, y defender el retiro del recinto de la bancada radical del pueblo para no votar, al entonces señor diputado Perette, actualmente vicepresidente de la República. Dijo entonces el diputado Perette: «El proyecto analizado (se refería al de la ley de asociaciones profesionales) tiene dos partes esenciales que no pueden confundirse. Para explicar su contenido totalitario, fascista y regresivo (decía con referencia al proyecto de ley de asociaciones profesionales) no se necesita recurrir a ninguna clase de filosofía o doctrina jurídica. Quiero señalar que la primera parte, que se refiere a la legislación, diríamos, “orgánica y permanente”, es sumamente grave en su contenido, y la segunda parte, con las disposiciones provisionales o transitorias, es tanto o más grave que esa legislación orgánica.»

Y continuaba diciendo: «Quiero destacar un aspecto que no se ha analizado con detenimiento. Esta legislación no traerá paz, sosiego ni tranquilidad en los sectores laborales argentinos. La modificación proyectada no es una reforma progresista; es una decisión para la regresión, y traerá graves perjuicios a la sociedad y al país.» Y siempre refiriéndose a la ley de asociaciones profesionales, actualmente en vigencia, afirmaba: «Es una reforma reaccionaria, regresiva y totalitaria.» (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara; reunión 27ª, julio 24 de 1958, página 1970.)

Agregaba más adelante: «Afirmo que en esta hora de pacificación a que tanto se alude, esta ley contraría ese principio, afecta la justicia y niega el estado de derecho. Esto sí implica una intromisión directa sobre todos los gremios sin necesidad de elección...» «Esta ley tendrá, por otra parte, un vicio institucional insalvable: anula el sindicalismo democrático, que no puede admitir la apología del fascismo y del corporativismo, con lo que se pretende explicar principios sociales de progreso que ya han sido abatidos por la sociedad y por la democracia universal.» Se estaba refiriendo el doctor Perette a la ley de asociaciones profesionales, actualmente en vigor.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Ha vencido el término de cinco minutos que reglamentariamente corresponde al señor diputado para su exposición.

Sr. Gómez Machado. — En un minuto más término, señor presidente.

Afirmo que todo este proceso tiende, además, a modificar la ley 14.250, de convenciones colectivas de trabajo, y ello nos preocupa fundamentalmente. En aquel momento, el núcleo reaccionario que aglutinaba a todos los sectores

reaccionarios que estaban en contra de la ley estaba dado por la Unión Cívica Radical del Pueblo, a través de estas expresiones del doctor Perette, y actualmente, junto con otros sectores políticos, representa la misma línea de pensamiento político.

Yo afirmo que actualmente, desde la vicepresidencia de la República, con el asesoramiento del doctor Roberto Pifarré, ese funcionario gorila de la revolución en el Ministerio de Trabajo, y con la ayuda del subsecretario, doctor Germán López, de la misma tendencia gorila y de actuación nefasta en tiempos de Rojas y Migone, se trata de modificar la ley de asociaciones profesionales.

Entiendo que estas afirmaciones, que tienen antecedentes y que están reflejadas en la conducta presente del gobierno —me refiero al último discurso del señor ministro del Interior—, así como en la conducta anterior, es decir que ofrecen ilación lógica, tienden a destruir la ley de asociaciones profesionales. Y para que no quede duda de esta aseveración, yo digo que ella es exacta si la mayoría no accede a incorporar concretamente la expresión «Confederación General del Trabajo».

Sr. Rodríguez Vagaría. — El señor diputado no tiene autoridad para decir esas cosas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — El señor diputado Rodríguez Vagaría no está en el uso de la palabra.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Fernández Núñez. — Ustedes daban leyes y palos; las dos cosas.

Sr. Calabrese. — Los palos ya los van a dar ustedes. Vean, si no, el anuncio del estado de sitio.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia ruega a los señores diputados se sirvan no dialogar.

Tiene la palabra el señor diputado Catalán.

Sr. Catalán. — Nosotros queremos ser leales con nuestro pensamiento y consecuentes con nuestra doctrina. La Confederación General del Trabajo no sólo es el organismo máximo, con personalidad jurídica, que representa al gremialismo argentino sino que, a través de su actuación, ha demostrado siempre alta responsabilidad en las funciones que le competen. Ha desarrollado su actuación en un elevado nivel intelectual y siempre en defensa de los intereses obreros. Yo diría que las conquistas sociales y las conquistas de orden laboral obtenidas en el país han sido fruto de la acción inteligente puesta de manifiesto en todos los tiempos por la Confederación General del Trabajo.

Yo no me explico cómo, frente a este organismo que en la consideración pública gravita como una entidad de pronunciada calidad moral, esta Cámara quiere crear un problema más,

sumándolo a los ya muy graves por que atraviesa el país. Yo no me explico por qué se quiere deslizar una complejidad en la ley, al no querer designar a la Confederación General del Trabajo en forma imperativa, infiriendo así un agravio a esta institución, que no lo merece, y dando margen a un posible problema, tendiente a desintegrarla.

Entiendo que el Congreso debe dar leyes claras y definitivas, no sólo en su letra sino también en su aspecto moral, estimulando y haciendo justicia con los organismos que marcan los grandes rumbos por los que debemos conducirnos en el quehacer nacional.

Esta ley debe dar facultades a la Confederación General del Trabajo para que pueda designar sus representantes ante el organismo que se crea por ella, sobre todo por la profunda capacidad de estudio en los problemas laborales que siempre ha puesto de manifiesto. La Confederación General del Trabajo, que representa a todos los organismos obreros, es la única entidad que está en condiciones de hacer lo que la clase obrera necesita y de designar a los dirigentes gremiales que sabrán defenderla con capacidad y honestidad.

Por todas estas consideraciones, yo rindo homenaje a la Confederación General del Trabajo, y manifiesto que vamos a apoyar ampliamente la disposición que establezca que es ella quien debe hacer las designaciones de los representantes ante el organismo que se contempla en este artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Señor presidente: estoy verdaderamente sorprendido de la tenacidad con que el sector justicialista...

Sr. Luco. — No se sorprenda, señor diputado.

Sr. Jofré. — ...el sector demócrata cristiano...

Sr. Salado. — Muchas gracias por reconocer la existencia de nuestro partido.

Sr. Jofré. — ...y el partido frondizista —no sé cómo se llama en estos momentos—...

Sr. Calabrese. — ¿Cómo no sabe cómo se llama?

Sr. Jofré. — Como cambia de nombre casi siempre, pido disculpas por mi ignorancia.

Me sorprende, como digo, la insistencia con que mantienen su criterio y sobre todo la insistencia con que hacen pensar a la Cámara que hay propósitos ocultos en los que tenemos una posición distinta de la que ellos sostienen.

Con anterioridad, en la época en que se dictó el decreto 33.302, ratificado por ley de este Congreso, había aquí una gran bancada del partido justicialista y alguna oposición del partido del señor diputado. Sin embargo, olvidan ahora que en aquella oportunidad se sancionó un artículo 99 que dice que el directorio del Instituto Nacional de las Remuneraciones estaría compuesto por el presidente y doce directores titulares, de los cuales seis serían representan-

tes de los empleadores y seis de los empleados y obreros, designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las asociaciones gremiales más representativas de las actividades, etcétera.

Sr. Gómez Machado. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Jofré. — Sí, señor diputado.

Sr. Gómez Machado. — ¿Me puede decir la fecha de ese decreto?

Sr. Jofré. — Este decreto es de fecha 20 de diciembre de 1945, ratificado por ley en el año 1946.

Sr. Gómez Machado. — Evidentemente, la cita que hace el señor diputado es histórica, de vieja data. Lo que hay que discutir aquí es lo que pasa después de sancionada la ley de asociaciones profesionales.

Sr. Jofré. — Indudablemente, hay que pensar en lo que pasa después, pero también debemos pensar en lo que ocurrió antes, para no cometer los graves errores que ocurrieron en el país. Están sucediendo muchas cosas como consecuencia de la mala memoria que tienen algunos señores diputados. Si los señores diputados tuvieron buena memoria, sin duda otra cosa sería del país, de las instituciones y del porvenir de la República.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no interrumpir los señores diputados.

Sr. Jofré. — Quiere decir, entonces, que no son consecuentes los señores diputados con sus opiniones anteriores, y no lo son cuando sostienen que no hay continuidad histórica. Debe haber continuidad histórica en las instituciones, no en los hechos. Si los señores diputados sostuvieron en esa oportunidad que estaba bien que se aceptara la asociación gremial más representativa, no advierto por qué ahora no lo admiten.

Sr. Serú García. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvase no interrumpir el señor diputado.

Sr. Jofré. — Tengo solamente cinco minutos para desarrollar mi exposición, razón por la cual no puedo conceder todas las interrupciones que se me solicitan.

Quiere decir que, o están equivocados ahora, o lo estaban en aquella oportunidad, cuando se dictó la ley, y puede pensarse que entonces se quería dividir el movimiento gremial argentino, cosa que se hizo después, para centralizarlo luego en una mano y convertirlo, como se dijo en esta Cámara, en un sector que apoyaba a un partido determinado.

Todo ello significa que no se es sincero, que no se habla con autenticidad para el bien del país, sino exclusivamente con un propósito político, cuando se quiere que se ponga nombre y apellido a la ley, como dije en la sesión anterior, porque se trata de un sector que está dentro del pensamiento político de algunos señores diputados.

—Hablan a la vez varios señores diputados.

Sr. Gómez Machado. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia exhorta al señor diputado Jofré a que no acepte interrupciones, con el fin de facilitar un debate más ordenado.

Sr. Jofré. — Si se acepta ese temperamento, es porque interesa a los fines políticos de quienes sostienen esa tesis. Nosotros actuamos en esto con absoluto desinterés y buena fe, y solamente queremos que se dé la posibilidad de que cualquier organización de tipo gremial más o menos representativa pueda tener acceso a la entidad que se crea. Todo eso será de interés para el país.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no interrumpir al orador los señores diputados.

Sr. Jofré. — Insisto en la tesis que sostuve oportunamente. Esta ley debe estar vinculada con la de asociaciones profesionales, la cual admite que puedan existir varias organizaciones obreras representativas. Debe dejarse la posibilidad de que la más importante de ellas esté representada en ese organismo.

Además, no debemos olvidar que esta Cámara ha ratificado el Convenio de Ginebra de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se dice que deben dictarse leyes que permitan la libertad sindical, es decir, que admitan la existencia de varias organizaciones obreras, si es que los obreros, con toda libertad, lo quieren establecer. De modo que no tenemos por qué cerrarnos ahora en una tesis que tiene más que todo un sentido netamente político.

Sr. Gómez Machado. — La opinión del señor diputado de la Federación de Partidos de Centro...

Sr. Presidente (Mor Roig). — No está en el uso de la palabra el señor diputado.

La Presidencia exhorta a los señores diputados a ayudar en el mantenimiento del buen orden en el debate, a no interrumpir y a no utilizar la palabra cuando no le ha sido concedida. La trascendencia del asunto que está considerando la Honorable Cámara y su repercusión justifican plenamente la exhortación de la Presidencia y la actitud condigna de los señores diputados.

Tiene la palabra el señor diputado Monte.

Sr. Monte. — La verdad es que no me sorprende la contumacia con que se actúa con el fin de lograr un objetivo que, a mi juicio, está muy lejos de concretarse: la división de la Confederación General del Trabajo. Podrá ocurrir que por presión oficial y/o deseos de algunos dirigentes sindicales de hacerse fuertes en sus organizaciones, adquirir notoriedad, etcétera, se produzca como máximo una simple segregación de algunas pocas organizaciones sindicales, pero

nunca una división tal que haga peligrar la fortaleza del movimiento obrero argentino.

Nosotros tenemos una vieja inquietud en torno de este problema, que ha sido puesta de manifiesto en este recinto en virtud de proyectos y de planteamientos de algunos legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical Intransigente. Esa vieja inquietud, en cuanto a qué es lo que se propone hacer el Poder Ejecutivo en relación con el movimiento obrero argentino, la hemos reiterado y es lo que ha suscitado precisamente el debate sobre este artículo 7º. Si realmente hay sinceridad por parte de la bancada radical del pueblo...

Sr. Damiani. — Siempre es sincero nuestro bloque.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvasse el señor diputado no hacer alusiones como la que acaba de hacer.

Sr. Monte. — Me voy a atener a lo expresado por el colega de Santa Fe.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Exhorto al señor diputado a dirigirse a la Presidencia.

Sr. Monte. — Por intermedio del señor presidente digo que me voy a atener a lo que me acaba de decir el señor diputado que me interrumpió, para probar que el radicalismo del pueblo está en una actitud coherente, es decir, que pretende dividir al movimiento obrero argentino. Me voy a valer de las palabras de un ex legislador entrerriano que es hoy vicepresidente de la Nación.

Sr. Damiani. — Un gran vicepresidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvasse no interrumpir el señor diputado.

Sr. Monte. — Me alegra que el señor diputado diga eso, porque prueba que es un hombre consecuente...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Invito por segunda vez al señor diputado a dirigirse a la Presidencia.

Sr. Monte. — Para que me dirija al señor presidente no hace falta que lo mire, ¿verdad?

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia no pretende eso, sino que no se dirija a los señores diputados.

Sr. Monte. — No nos vamos a perder en todo un alegato en torno de este asunto y no nos vamos a cegar ante este proyecto de ley de salario mínimo, vital y móvil, que será móvil con el correr del tiempo —lo veremos— y que no es salario vital por las cifras que se proponen ahora y por los conceptos que se especifican en el artículo 2º. Por un lado se ofrece un menudrugo, diría, porque 9.800 pesos de salario mínimo para el trabajador soltero...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Está en discusión el artículo 7º, señor diputado.

Sr. Monte. — Estoy haciendo apreciaciones...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sobre el artículo 2º.

Sr. Monte. — Yo tengo mi estilo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se va a dar lectura al artículo 144 del reglamento.

Sr. Secretario (Oliver). — Dice así el artículo: «En la discusión en particular deberá guardarse la unidad del debate, no pudiendo por consiguiente aducirse consideraciones ajenas al punto de la discusión.»

Sr. Monte. — Quiere decir que estoy bien.

Digo que por un lado se ofrecen mendrugos y por otro se prohíja la división del movimiento obrero argentino.

El dictamen de la comisión en el artículo 79 hace referencia a las organizaciones sindicales con personería gremial más representativas. El antecedente que tenemos al respecto es el proyecto del Poder Ejecutivo que habla de la central de trabajadores con personería gremial más representativa.

En definitiva, esto supone que en determinado momento podría haber una puja entre varias organizaciones centrales y, ante la colisión, el Poder Ejecutivo sería quien determinaría cuál es la más representativa. Ya en este aspecto entrarían las subjetividades, es decir, la posición o el interés del Poder Ejecutivo nacional.

He dicho que iba a demostrar que el radicalismo es coherente, es decir, que está incurriendo en contumacia, y me valgo de la opinión de un legislador entrerriano que hoy es vicepresidente de la Nación, un vicepresidente grande, según una interrupción.

Sr. Elena. — Han dicho la verdad.

Sr. Monte. — Cuando se trató la ley de asociaciones profesionales dijo que, en definitiva, de ese debate salían triunfantes las ideas de Benito Mussolini y las disposiciones expresas de la Carta del Lavoro, para probar que era una ley típicamente fascista. Nosotros dijimos que la ley 14.455 es una ley eminentemente democrática. Y aquí va la prueba de mi afirmación: «Queremos señalar —decía el doctor Perette— que estos principios no pueden ser puestos en tela de juicio y que nuestra postura será seguida hoy desde la oposición o mañana desde el gobierno.» Y eso es lo que está ocurriendo. El radicalismo del pueblo es ahora consecuente con lo que sostuvo cuando se debatió la ley 14.455, de asociaciones profesionales. Después de esto muy poco tengo que agregar. Se me ocurre que el radicalismo del pueblo no es sincero en cuanto manifiesta que no intenta la división de la organización obrera.

Sr. Elena. — Es una falsedad.

Sr. Monte. — Cuando hago estas afirmaciones, con todo fundamento, despierto una ola de protestas en la bancada radical del pueblo. No veo razón para ese nerviosismo si sus conciencias están tranquilas. Si no están dispuestos a jugar a la división del movimiento obrero argentino, no les queda otro camino que aceptar nuestra propuesta: Confederación General del Trabajo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Señor presidente: yo había pedido la palabra para referirme a un problema distinto al que se discute, pero voy a usar del tiempo reglamentario para abordar ambas cuestiones.

Quería preguntar —y tal fue el motivo del pedido de palabra— por qué, a casi una semana de iniciada la discusión de esta ley, no están todavía impresas las disidencias parciales formuladas al dictamen de la mayoría; y si están impresas, por qué no están sobre las bancas, cuando ello permitiría seguir de mejor manera el debate y dejar claramente grabadas para el futuro las posiciones de cada uno de los sectores que intervienen en este debate.

Voy a referirme además —y dejo para el final la oportunidad de que la Presidencia conteste a la pregunta que formulo— al artículo 79 en discusión.

Yo digo que este debate se obviaría y llegaríamos fácilmente a sancionar el artículo 79 si pudiéramos saber con exactitud cuáles son las intenciones de la bancada oficialista al proponer esta fórmula relativa a las organizaciones sindicales con personería gremial más representativas. ¿Qué espera, qué busca, qué se propone la bancada oficialista al hacer semejante proposición?

Si la ley 14.455 no prevé más que una central, que actualmente es la Confederación General del Trabajo, no se ve razón alguna para estar alentando la posibilidad de que exista otra central obrera en el país. La CGT es expresión de la voluntad abrumadoramente mayoritaria de los trabajadores. No es ésta una ley impuesta ni un instrumento totalitario, sino una ley libremente consentida y reclamada por la inmensa mayoría de los trabajadores. Nosotros, que no contamos en la CGT con un instrumento favorable al partido en el cual actuamos, si es que algún partido apoya o quiere apoyar de alguna manera la CGT, podemos hablar con absoluta libertad e independencia de juicio en esta ocasión y sostener que no cabe otra fórmula correcta que no sea la mención de la Confederación General del Trabajo para integrar la representación que prevé el artículo 79. Cualquier otra solución sería aventurar un intento de reforma de la ley 14.455 y hacer ciertas las sospechas que flotan en el ambiente, avaladas, desgraciadamente, por muchos hechos como la interferencia sindical que se realiza desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la influencia y el estímulo que desde esferas más altas en la conducción oficial gubernativa se desarrolla para la división del movimiento obrero argentino.

Sr. Musitani. — Eso no es cierto.

Sr. Vedia. — Eso es absolutamente cierto, y de alguna manera lo que se está queriendo. Si no se dice con claridad qué es lo que se pre-

tende, se permite que sea supuesto lo que acaba de afirmar.

Lo que se busca es promover la división del movimiento obrero argentino. La entidad representativa es la CGT, y esta consagración que se propone importaría, repito, adelantar un intento de reforma de la ley y, en todo caso, desconocer la vigencia de la ley 14.455, que crea una central única de trabajadores.

Exhorto a la bancada oficialista a que diga con claridad cuáles son sus intenciones con respecto a la sanción de la norma que propone, porque de lo contrario quedaría indubitabilmente cierta la idea de que lo que en definitiva se quiere es quebrar el movimiento sindical argentino, alentar movimientos que son minoritarios y reaccionarios y consagrar como entidades gremiales representativas a las que con un sello de goma se titulan 32 gremios mayoritarios democráticos, que de democráticos no tienen nada, de mayoritarios menos, y de los 32 acaso tengan solamente el dos.

De manera que nuestro bloque insiste en que el artículo 7º debe hacer mención expresa de la Confederación General del Trabajo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Vedia: la Presidencia le informa que no ha sido realizada la impresión del texto de las disidencias en virtud de que fueron presentadas en el transcurso de la sesión y quedan incorporadas al Diario de Sesiones.

Tiene la palabra el señor diputado Pugliese.

Sr. Pugliese. — Señor presidente: considerábamos que este debate, con estas derivaciones políticas, había sido agotado en la tarde del día sábado. Evidentemente se lo ha traído de nuevo a la sesión de hoy.

Resulta lamentable que el pasado nos siga envolviendo y que no nos permita encontrar el camino para resolver los problemas del presente. El sábado se nos dijo que la modificación del texto del proyecto del Poder Ejecutivo, que había resuelto la comisión, revelaba una intención, ya que en todo este debate, de intenciones se trata. Se ha pensado que cuando el Poder Ejecutivo presentó este proyecto, mantenía más o menos buenas relaciones con la CGT, pero que la situación ha cambiado cuando la CGT iniciaba el plan de lucha. Y este plan de lucha no ha merecido del gobierno otra cosa que serenidad y calma, a pesar de las presiones que recibe de distintos sectores para adoptar otra conducta; incluso de sectores que tendrían que estar interesados en que el gobierno mantenga esta serenidad y esta calma.

Y todo esto, señor presidente, cuando nosotros no tenemos intención de ninguna naturaleza, porque se pretende confundir esta ley con la ley de asociaciones profesionales, con citas parciales, con opiniones emitidas en distintas circunstancias políticas del país. Resulta que también ahora, cuando hablamos solamente en singular, cuando toda nuestra intención aviesa esta-

ba en el uso de la palabra «central» en plural, seguimos teniendo ese tipo de intenciones, y estamos aquí como niños puestos entre la espada y la pared para tener que decirle a la Honorable Cámara qué intenciones persigue la bancada oficialista.

La bancada oficialista no persigue intención de ninguna naturaleza, porque si pretendemos modificar una ley, han de saber los señores diputados que esta modificación no será por decreto, que en última instancia seguirá el trámite parlamentario que corresponde a toda modificación de una ley. Esto lo saben bien los señores diputados, porque el procedimiento no puede ser otro.

Nosotros estamos dispuestos a sancionar esta ley, y si es posible en el día de la fecha. Nosotros hemos vuelto a la iniciativa del Poder Ejecutivo para que no quede absolutamente ninguna duda sobre nuestro proceder, porque sé que en el fuero íntimo de los señores diputados no se abrigan esas dudas sobre las intenciones, porque será la CGT la que tenga la representación en el Consejo Nacional del Salario. Sin embargo, volvemos una y otra vez al debate político.

Sr. Monte. — ¿Ustedes dicen, señor diputado, la más representativa?

Sr. Elena. — Tenga la amabilidad de escuchar, señor diputado.

Sr. Pugliese. — Sí, señor presidente, decimos la más representativa...

Sr. Serú García. — El señor diputado Jofré dijo otra cosa.

Sr. Pugliese. — ... aunque, incluso, consideramos también eso una redundancia. Quizás algunos señores diputados consideren, un tanto ingenuamente, que si alguna vez el movimiento obrero no mantiene esta unidad es debido a que el único factor que la perturbe pueda llegar a ser el Poder Ejecutivo. Y esto no es así, porque, incluso, puede producirse un cambio en la denominación de la central obrera para llamarse de otra manera. Nosotros hablamos de la central obrera con personería gremial, que es lo importante.

Lo que queremos decir, fundamentalmente, es que nuestro bloque en el día de hoy ha decidido no recoger absolutamente ninguna alusión política y no dejarse arrastrar a un debate de tipo político. Y esto porque nuestro propósito es sancionar esta ley que, retaceada y mínima como se ha dicho, importa para el país la institución del salario vital, mínimo y móvil, que no estaba implantado. Debemos tener en cuenta que en última instancia lo que decide este Parlamento en el día de hoy es una cláusula transitoria hasta la constitución del Consejo Nacional del Salario, que será el que, en definitiva, con mejores elementos de juicio, podrá determinar dentro de muy poco tiempo a cuánto ascenderá el monto del salario. Nosotros marcamos solamente un punto inicial en este sentido, y no puede atribuirse, con honradez, intenciones

de ninguna naturaleza ni contumacia, porque la única contumacia que hay en esta Honorable Cámara es la de persistir en el debate político, que esteriliza nuestro tiempo e impide la sanción de esta ley que está esperando el pueblo trabajador de la República.

Por eso, nosotros decimos, recogiendo palabras de un señor diputado, que muchas veces, para contribuir al ánimo tranquilo de esta Cámara, tenemos que mordernos la lengua. Y hoy nos vamos a continuar mordiendo la lengua hasta sangrar, pero no vamos a entrar en el juego político, porque queremos sancionar esta ley en el día de la fecha. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart.

Sr. Pérez Gallart. — Señor presidente: cuando en la sesión del sábado provoqué esta cuestión acerca del propósito de dividir a la clase trabajadora por parte de algunas esferas gubernamentales, no pensaba que este debate alcanzara la prolongación y la magnitud a que ha llegado; supuse que el bloque oficialista, confrontado con la diferencia de criterio existente entre el dictamen de comisión, el texto de la ley de abastecimiento y el proyecto del Poder Ejecutivo, no tendría inconveniente en hacer lugar a nuestro reclamo incluyendo el nombre de la CGT como entidad representativa de la clase trabajadora argentina. No ha sido así.

Pese al ánimo expresado por el señor vicepresidente del bloque mayoritario, de que la ley se sancione sin nuevas dilaciones ni nuevas ultimeridades, con extraña obstinación se ha mantenido el texto ambiguo y confuso, que permite que por un acto del poder administrador se dé a otra central, existente o a crearse, la representación de los trabajadores argentinos.

Esto confirma que no es ajeno a la realidad lo que denuncié en esa ocasión —y ya lo había hecho con anterioridad— desde esta banca. Lo que hoy ha manifestado un diputado de otro sector confirma mis palabras anteriores, en el sentido de que el señor vicepresidente de la República está organizando una CGT paralela, divisionista, con el propósito de arribar, por un medio oblicuo, al que fue su propósito, contrario a la unidad de los trabajadores argentinos, expresado con palabras que ya se han leído en la sesión de esta tarde.

Nosotros hemos denunciado ese plan divisionista de tan alto magistrado y los señores diputados de la primera minoría han demostrado una absoluta insensibilidad frente a esa denuncia, a menos que —a esta altura de las cosas— tengamos derecho a suponerlo— uno o muchos de ellos estén acordes o embarcados en ese plan.

Se ha dicho aquí que el gobierno, frente al plan de lucha, ha demostrado absoluta serenidad y calma. ¿No sería que esa serenidad y calma era producida porque existían medidas de otro tipo, tendientes a terminar con el plan

de lucha mediante la división de la central obrera, mediante la división de la clase trabajadora?

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Pérez Gallart. — ¿Y no sería que esa serenidad y esa calma ya se van perdiendo al no haberse logrado llevar a cabo el plan divisionista y por eso ya se anuncia en los diarios de hoy la próxima implantación del estado de sitio?

—Hablan varios señores diputados simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no interrumpir los señores diputados.

Sr. Pérez Gallart. — Esta reacción al haber mencionado aquí las recientes declaraciones del presidente del bloque de senadores demuestra cabalmente la profunda intranquilidad que tienen los señores diputados del bloque situacionista, que pese a sus manifestaciones enfáticas tal vez dentro de pocos días tendrán que levantar la mano en este recinto para implantar el estado de sitio, que ya se anuncia.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia exhorta a los señores diputados a guardar el orden, y recuerda al señor diputado Elena que no está en el uso de la palabra.

Sr. Elena. — Que el pueblo sepa...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por tercera vez la Presidencia advierte al señor diputado Elena que no está en el uso de la palabra.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pérez Gallart.

Sr. Pérez Gallart. — No sé cómo pueden provocar tanta indignación mis palabras, cuando la liquidación de la ley de asociaciones profesionales no es más que uno de los compromisos adquiridos desde la oposición por el hoy partido gobernante, que hace gala de su lealtad hacia todos esos compromisos. Por eso tenemos derecho a pensar que van a liquidar esa ley, como ya reconocieron en el debate del sábado varios señores diputados de ese bloque, que también están dispuestos a liquidar la libertad de enseñanza.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Una vez más la Presidencia advierte a los señores diputados que si no guardan orden, en uso de sus atribuciones invitará a la Cámara a pasar a cuarto intermedio.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pérez Gallart.

Sr. Pérez Gallart. — Nos vamos a mantener en la posición que teníamos al iniciar este debate, y no votaremos nada que no sea la inclu-

sión expresa de la CGT en este artículo, porque no estamos dispuestos a consentir otra solución e, incluso, nos opondremos por todos los medios reglamentarios a que se lleve adelante el plan divisionista de la clase trabajadora argentina.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Solana.

Sr. Solana. — Voy a usar brevemente de la palabra, y espero que el señor presidente consiga mantener la tranquilidad que necesita tener en este momento la bancada de la primera minoría para escuchar los requerimientos que naturalmente surgen con claridad acerca de la necesidad de que en el artículo 7º del proyecto en discusión se admita la disidencia parcial formulada por los señores diputados Luco, Monte, Rois y Salado al dictamen de la mayoría de la Comisión de Legislación del Trabajo para que conste que la representación de los trabajadores en el consejo debe ser designada a propuesta de la Confederación General del Trabajo.

A pesar del propósito enunciado por el señor diputado Pugliese de no contestar las referencias políticas posibles, no puede menos que pensarse, tal como lo han destacado con insistencia muchos señores diputados, que la tenacidad con que el bloque del radicalismo del pueblo mantiene el despacho de la mayoría de la comisión no consiste nada más que en una cortina de humo, en un eufemismo que se utiliza para ocultar intenciones que no se atreven a manifestar con claridad.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia ruega a los señores diputados que no interrumpen al orador, y pide al señor diputado Solana que se dirija a la Presidencia.

Sr. Solana. — Al diputado que me interrumpió, y que no individualicé, le digo que siga el consejo del presidente de su bloque, y se muerda la lengua.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Solana.

Sr. Solana. — No puede extrañar, señor presidente, que se hagan referencias políticas cuando se trata de desentrañar por qué razones no se establece categóricamente que la Confederación General del Trabajo designará o propondrá a los integrantes obreros de este consejo.

Sr. Balboa. — Para no dar nombres propios, señor diputado.

Sr. Solana. — Este es el nombre propio de la entidad que representa a los trabajadores argentinos, la cual ha demostrado en el plan de lucha en ejecución una alta responsabilidad, como se declara en forma categórica en la solicitada que publican algunos diarios de la fecha y cuya inclusión en el Diario de Sesiones voy a requerir. Es natural también que el bloque justic

cialista diga enfáticamente que comparte en lo político todo el sentido que encierra la declaración de la Confederación General del Trabajo. Esta manifestación no puede extrañar a los representantes del bloque conservador, porque es indiscutible que nuestro sector encarna, en lo político, en lo social y en lo económico, las ideas fundamentales que en estos momentos mueven a la acción a la Confederación General del Trabajo.

El pensamiento de la central obrera está claramente expuesto en la parte final de esta declaración, que me voy a permitir leer, aun cuando pueda herir con ello la susceptibilidad de algún señor diputado. «No está actuando la CGT —dice— exclusivamente con la única mira de lograr un aumento de sueldo, sino que brega por obtener soluciones de tipo integral, costo de la vida, desocupación, cesantes represaliados, leyes represivas, amnistía, el funcionamiento pleno de nuestra industria, restitución del mercado de consumo y la recuperación del bienestar de nuestro pueblo.

»La CGT lucha además con y por nuestro pueblo, por nuestros hijos y por nuestro futuro, y no bajaremos la guardia, no abandonaremos nuestra lucha en tanto no impere en el país la justicia social, la igualdad para los argentinos y la dignidad y soberanía nacionales.»

Una entidad que se manifiesta con tanta responsabilidad como se hace en esta declaración, y que reconoce la acción del gobierno en lo que ha tenido de positivo, como es la anulación de los contratos petroleros por inconstitucionales y por atentatorios a la economía y a la soberanía de la Nación, lo menos que merece del Parlamento argentino es que se le reconozca la representatividad necesaria para integrar el consejo creado por esta ley y que está dirigido a atender las necesidades del sector a que aquella entidad representa por su organización y por sus fines. (*¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Cornejo Linares.

Sr. Cornejo Linares. — Para los antiguos pitagóricos el número siete tenía un sentido cabalístico: siete eran los planetas, siete los colores, siete las maravillas del mundo, más tarde fueron también siete los pecados capitales, y ahora también son siete los demócratas cristianos. (*Risas.*)

Pareciera ser que se ha vuelto a esta concepción cabalística acerca del número 7, pues bien pronto van a cumplirse siete horas desde que empezó la discusión del artículo 7º del proyecto en consideración. Es claro que es así porque esto tiene gran trascendencia, dentro de la importancia del dictamen que estamos considerando. Es la piedra de toque, el talismán, que va a servir para la suerte futura de este estatuto legal. Yo no me explico este planteo—será quizá porque no tuve la suerte de estar en la última reunión—, que pareciera que viene a renovar la antigua discusión de los universales,

entre nominalistas y conceptualistas. Se hace toda una cuestión acerca de una sigla: CGT. Pareciera que existe un tabú que prohíbe terminantemente a los señores diputados de la primera minoría usar esa sigla, que significa Confederación General del Trabajo, que no es un nombre más, ni una simple sigla. Ella designa a un organismo con vida y «existencia real en el país, a una institución que nuclea y representa a todos los trabajadores. Ella ha sido consecuencia del progreso político de nuestra organización nacional, y gracias a ella puede haber discusiones de alto nivel entre las fuerzas del trabajo y las fuerzas empresarias.

Yo, señor presidente, soy modestamente ingenuo. Y prefiero pasar por ingenuo antes que pecar por suspicaz. Presumo buena fe en toda la gente hasta que se me pruebe lo contrario. Por eso presumo buena fe en las actuales autoridades de la Nación, y presumo buena fe en la bancada radical del pueblo. Pero aquí ha quedado flotando una grave acusación: ¿por qué no se quiere decir expresamente en el texto de la ley «Confederación General del Trabajo» y se buscan eufemismos literarios para suplantar esos términos?

Sr. León. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Cornejo Linares. — Desde otro punto de vista, debo decir que no estamos aquí legislando para ahora, que no estamos haciendo una ley para el presidente Illia.

Sr. Belgrano Rawson. — Ese es el argumento que abona nuestra posición, señor diputado.

Sr. Cornejo Linares. — Estamos legislando con carácter permanente, con abstracción absoluta de las autoridades actuales de la Nación. De ahí que sea indispensable la precisión en el lenguaje jurídico, para evitar falsas interpretaciones y vagas maniobras políticas.

Sr. Fernández (R.). — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Cornejo Linares. — Es necesario que la legislación sea orgánica, coordinada, sobre todo en cuanto a las leyes que versan sobre una misma materia y persiguen objetivos semejantes. ¿Por qué, si en la ley 14.455, de asociaciones profesionales, se legisla en determinada forma, en esta nueva ley, que trata la misma materia laboral, hemos de pronunciarnos en otra forma? Yo me atrevo a exhortar a los señores diputados de la primera minoría a que, haciendo fe de sus buenas intenciones, eliminen del dictamen de mayoría esas sutilezas bizantinas, esos eufemismos, y acepten nuestra moción de que se diga expresamente «Confederación General del Trabajo». Con ello se disipará una duda muy grande, lo que contribuirá, a no dudarlo, a crear el clima de pacificación que necesita el país. De otra manera se seguirán creando conflictos que, en un primer momento, parecen artificiales y que luego se manifiestan como tempestades, cuyas consecuencias paga todo el mundo y no solamente los que sembraron los vientos. El país

está a la expectativa de la sanción de esta ley, y, precisamente, alrededor de este artículo 7º, que tiene una trascendencia enorme, mucho mayor que la mera formalidad de las palabras.

Por estas razones es que insistimos en que se diga expresamente «Confederación General del Trabajo», y no otra frase semejante, idéntica o parecida.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Maglietti.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: es indudable que nuestra bancada no está dispuesta a llevar este debate al terreno político, pero es necesario dejar bien aclarada nuestra posición.

Se ha sostenido que en la actitud pacífica del Poder Ejecutivo existe un plan divisionista. Nada más falso, señor presidente. Nuestro partido y nuestro gobierno son únicos en sus principios. En su plataforma electoral ha establecido con toda claridad que gobernará para todos los habitantes y que las clases obreras merecerán la principal atención del gobierno.

La actitud mesurada y pacífica del Poder Ejecutivo no tiene otra finalidad que la de mantener la paz que hoy reina en todo el país, y que ciertos sectores interesados quieren romper a toda costa.

Algunas expresiones vertidas en este recinto acusan al Poder Ejecutivo de estar tendiendo una cortina de humo con el propósito de dividir a los trabajadores. Nada más inexacto. Yo preguntaría al señor diputado que hizo esa manifestación si en el año 1946, cuando se dictó el decreto 33.304 —en el que se hizo referencia a las instituciones gremiales más representativas— hubo por esa causa propósito divisionista por parte del Poder Ejecutivo de aquel entonces.

No pueden achacársenos, basados en el artículo 7º en discusión, que exista tal propósito de nuestra parte, teniendo en cuenta, además, que si en el día de mañana la CGT cambia de nombre, la redacción de la ley como lo pretende el dictamen de la minoría no podría surtir sus efectos. El hecho de que en el dictamen de la mayoría se haga referencia a la institución más representativa, no hace sino determinar que se menciona a la central obrera, que representa a todos los trabajadores argentinos.

Se ha agravado en todo sentido a nuestra bancada. A pesar de ello, nuestra actitud ha sido mesurada. Se ha sostenido que se van a utilizar todos los recursos reglamentarios, para evitar la sanción de esta ley. Si ello ocurre, señor presidente, quedaría demostrado el propósito inconfesado de no sancionar esta ley, con el consiguiente perjuicio para los obreros que no lograron así el salario mínimo, vital y móvil.

Asistimos al hecho innegable de que estamos gobernando sin estado de sitio, a pesar de que existen sectores interesados para que lo implantemos.

Hace poco tiempo el país salió de un gobierno convulsionado que gobernaba con estado de sitio. Las cárceles estaban repletas de obreros y de presos políticos; las huelgas terminaban incluso con medidas de represión de distinta naturaleza y con cesantías en distintos cuadros de la administración pública; las movilizaciones estuvieron al día y las fuerzas armadas vivían acuarteladas.

Hoy el país asiste a un espectáculo totalmente opuesto, de paz, tranquilidad y mesura, contra actos que hubieran llevado a cualquier gobierno a tomar medidas extremas, pero que no adoptará nuestro gobierno. El valor adquisitivo del salario en el gobierno de aquel entonces disminuyó enormemente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado: está en discusión el artículo 7º del proyecto.

Sr. Maglietti. — La clase obrera en aquel entonces sufrió vejámenes de toda índole. Se dictó una ley de asociaciones profesionales, pero se utilizaron todos los medios para que esa central obrera no pudiera exigir las reivindicaciones tan necesarias en aquel entonces. Nuestro gobierno, en cambio, ha contemplado todas las aspiraciones populares y ha dado cumplimiento a los 13 puntos de la CGT, el último de los cuales es el que hoy debatimos y estamos dispuestos a sancionar. Con ello demostraremos al país nuestro innegable propósito de gobernar para todos los habitantes, sin distinciones de ninguna clase, y con el fin de beneficiar preferentemente a todos los trabajadores del país.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — Tengo la sensación de que hace un buen rato que en este debate estamos girando alrededor de los mismos conceptos, que todo el mundo tiene tomadas posiciones y que es muy difícil decir cosas nuevas. Sin embargo, tal vez por seguir esta corriente donde todos van diciendo lo que piensan, aunque todos lo sabemos, quiero decir algunas palabras recogiendo algo de lo que se ha dicho, para precisar el porqué de nuestra posición en este debate y del voto que vamos a emitir.

Se preguntaba hace un momento un señor diputado por qué no se quiere aludir concretamente en el proyecto a la Confederación General del Trabajo. Sencillamente, porque la Confederación General del Trabajo no es un poder del Estado ni una persona jurídica de existencia necesaria, sino una persona jurídica de existencia posible, que existe en tanto y en cuanto se ajuste a las condiciones que la ley determina para las organizaciones de este tipo. Mañana, con otro nombre, podrá existir una organización igual.

Las personas jurídicas de existencia necesaria o los poderes del Estado, ellos sí, deben ser designados en las leyes por su nombre propio; pero las demás personas jurídicas, sólo mediante las fórmulas que la ley emplea para señalar-

las. En este caso del artículo 7º del proyecto se emplea exactamente la fórmula de la ley vigente de asociaciones profesionales. Además, esto de hablar de la organización sindical más representativa es emplear una fórmula jurídica acuñada ya en nuestra legislación. Incluso, pienso que referirse a una organización con personería gremial más representativa es una redundancia, porque precisamente la ley 14.455 dice que tiene personería gremial exclusivamente la organización más representativa.

Decía el señor diputado Cornejo Linares que es necesaria la precisión en el lenguaje jurídico. Justamente por eso es que pretendemos que en esta ley —como lo pretendimos al discutirse la ley nacional de abastecimiento, pero no prosperó nuestro criterio y después hubo consecuencias— se emplee esa fórmula acuñada ya en la legislación argentina de «asociación con personería gremial» o «asociación más representativa».

En esta materia nuestra posición es perfectamente clara y coherente con la legislación anterior. Y lo es también con este otro alcance: no queremos de ninguna manera contribuir, ni con nuestro silencio, al intento que se está generalizando de convertir a la Confederación General del Trabajo en un poder del Estado, que trata de igual a igual con los demás poderes del Estado, cuando no los amenaza o trata de someterlos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Nosotros estamos con un criterio que el señor diputado Gómez Machado calificó hace un momento de reaccionario. Yo estoy de vuelta de los adjetivos. Alguna vez yo también he empleado esas expresiones; pero ya estoy de vuelta de los adjetivos que ahorran o evitan el razonamiento. ¿Qué significa hablar de concepciones reaccionarias, como se ha dicho también hace un momento en el sector de la izquierda? Yo tengo sobre mi banca el debate, que en algunas partes acaba de leerse, realizado en la Cámara de Diputados con motivo de la consideración de la ley 14.455. En él habló y dijo las cosas que se leyeron el actual vicepresidente de la República, que ojalá mantenga esos puntos de vista, y hablaron en el mismo sentido otros correligionarios suyos.

En ese debate se leyeron palabras que no provenían del sector radical del pueblo ni del sector conservador, ni de nadie a quien pueda calificarse desde ninguna bancada de esta Cámara de reaccionario, cualquiera sea el sentido que se dé a esa expresión, de cualquier manera peyorativa. Aquí se leyeron expresiones de un hombre cuya memoria todos respetamos y a quien hemos rendido homenaje unánime.

Cuando en 1958 se discutió la actual ley de asociaciones profesionales y se la vinculó con el decreto 23.852, dictado en 1945, que fue la base y la inspiración del proyecto de 1958, decreto aquél que introdujo por primera vez en la legislación argentina el concepto de la organi-

zación más representativa y de la personería gremial, el señor diputado Casella Piñero citó estas palabras de Moisés Lebensohn, referidas a él, que voy a leer: «Como en Italia y Alemania, el régimen —el régimen que dictó esta ley— consagró una preocupación central al apoderamiento de los sindicatos. La satisfacción de reclamaciones inmediatas le sirvió para disolver en el triunfo aparente del minuto la desazón por una organización social que no se ajusta a fundamentales requerimientos humanos. Así efectuó sus primeras conquistas, en adhesión espontánea a veces y forzada otras. El poder sindical organizado verticalmente constituyó el soporte principal de aquellas dictaduras. Del mismo modo en la Argentina es la base del régimen.»

Y terminaba con estos conceptos: «La tarea previa para el restablecimiento de la democracia consiste, pues, en la recuperación de la autonomía gremial, en el desarme del gran aparato sindical de conducción totalitaria que ahoga la espontaneidad creadora de la organización obrera y la coloca en el campo de la opresión y de la injusticia.»

Yo, conservador, termino mi exposición con esas palabras tan actuales de Moisés Lebensohn. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muniagurria.

Sr. Muniagurria. — Señor presidente: no voy a entrar al trasfondo que indudablemente existe en este debate. Me limitaré al artículo 7º de la ley de salario mínimo, vital y móvil que está en discusión, y voy a señalar que desde nuestro punto de vista se está prolongando excesivamente la discusión de un artículo que, sin trasfondo, no tiene mayor significación.

El señor diputado González Bergez acaba de decir con acierto que la ley 14.455, que crea las asociaciones profesionales de trabajadores, establece en su artículo 18 que la asociación profesional de trabajadores más representativa de la actividad de que se trate tendrá derecho a gozar de personería gremial y, consiguientemente, también establece en el artículo 26 que las federaciones y confederaciones más representativas tendrán derecho a gozar de personería gremial.

Sr. Garófalo. — Lo dice en plural, ¿verdad?

Sr. Muniagurria. — Efectivamente, pero los hechos, señor diputado Garófalo, son más obstinados que las palabras, y hay un hecho de tal magnitud que frente al cual, si no existe el trasfondo o la intención ulterior, debemos ubicarnos con absoluto realismo, en un propósito de sancionar la ley que la Cámara y la opinión pública quieren, por encima de circunstancias o de desviaciones en la discusión.

El hecho positivo y exacto, sin entrar a juzgar los beneficios o los inconvenientes, las circunstancias que nos abruman, las actitudes que criticamos o que compartimos, es que la confe-

deración gremial más representativa en este momento de la vida de la República se llama Confederación General del Trabajo. Ese es un hecho real, absoluto y total, y por ser tan real no merece siquiera una amable observación de cualquiera de los señores diputados.

Sr. Pugliese. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Muniagurria. — Sí, señor diputado.

Sr. Pugliese. — ¿Podría asegurar el señor diputado que siempre se llamará así? Formulo esta pregunta, ya que se dijo que debemos legislar para lo permanente y no para un instante.

Sr. Muniagurria. — En el momento mismo que no se llame así por las vicisitudes del proceso en función de las relaciones entre los empresarios, los trabajadores y el Estado, sería muy simple y sencillo modificar el nombre del organismo.

Sr. Maglietti. — No, no.

Sr. Muniagurria. — No seamos tan jactanciosos de suponer que estamos legislando para un futuro indeterminado, sino que estamos legislando para una realidad existente en el país.

Sr. Pugliese. — Le aseguro, señor diputado, que lejos de nuestro ánimo está el ser jactanciosos.

Sr. Muniagurria. — No me refiero a esa bancada en particular, sino a la Cámara en general.

Sr. Pugliese. — Deseo preguntar también al señor diputado si el artículo, con su redacción actual, es absolutamente comprensivo de la Confederación General del Trabajo.

Sr. Muniagurria. — Entiendo que es perfectamente compatible y comprensivo, pero no estaríamos en la realidad si no advirtiésemos que nos encontramos con una fórmula ortodoxa e intransigente de una bancada y con la fórmula ortodoxa e intransigente de la otra bancada. Mi propósito, sin entrar al trasfondo, es hacer, sin acentos que no me corresponden, por cierto, un llamado a la coincidencia con respecto a una fórmula que demuestre el espíritu común de ambas partes para que de esa forma podamos seguir considerando en particular esta ley del salario mínimo vital y móvil, que es el propósito que perseguimos.

Sr. Pugliese. — Hemos demostrado esa voluntad pero se nos exige la rendición incondicional.

Sr. Muniagurria. — No, señor diputado. No vengo aquí a pedir rendiciones incondicionales. Vengo, única y exclusivamente, a hacer un llamado a la reflexión de los señores diputados, en el sentido de señalarles que el camino está por encima de los obstáculos y que el camino también tiene su meta. En este caso la meta es la de sancionar la ley que la opinión pública espera de nosotros, lo cual, por otra parte, es aspiración de los señores diputados que integran esa bancada, como es la nuestra por haber suscrito el dictamen de comisión.

Sr. Maglietti. — ¿Me permite el señor diputado una breve interrupción?

Sr. Muniagurria. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia solicita del señor diputado Muniagurria quiera no conceder nuevas interrupciones, para el mejor ordenamiento del debate.

Sr. Maglietti. — Yo solicito del señor diputado quiera aclarar qué es lo que aconseja una buena técnica jurídica: si la redacción que tiene el dictamen de la mayoría o la redacción que pretenden los otros bloques.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Muniagurria.

Sr. Muniagurria. — Señor presidente: voy a decir algunas palabras que tal vez puedan ser tachadas de imprudentes, pero lo hago con la seguridad de espíritu de expresar lealmente mi pensamiento.

Yo no atribuyo intenciones a nadie. Yo no supongo que en el Poder Ejecutivo y en la bancada del radicalismo del pueblo se alientan intenciones que puedan determinar eventualmente algunas actitudes contrarias a la Confederación General del Trabajo. No lo supongo, pero dentro de este orden realista en el cual me quiero colocar no exteriorizaría con suficiente claridad mi pensamiento si no dijese que aun en la hipótesis de que algunos sectores alentaran intenciones contra la existencia misma de la Confederación General del Trabajo, no aparecerían éstas limitadas por el hecho de que en una ley se mencione circunstancialmente y como reconocimiento de una realidad, a la Confederación General del Trabajo. Esta mención, me pregunto yo, ¿va a determinar inhibiciones o limitaciones para esas actitudes legislativas o ejecutivas hipotéticas? Estoy convencido íntimamente de que ello no podría ser de ninguna manera un obstáculo para que se cumpliera un designio o una actuación gubernativa de alguna significación en ese sentido.

Sr. Jofré. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Muniagurria. — Sí, señor diputado.

Sr. Jofré. — Y solicito permiso a la Presidencia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Quiero señalar al señor diputado Muniagurria, con todo el respeto que me merece su opinión, que comete un error al decir que aquí se menciona a la Confederación General del Trabajo circunstancialmente. De ninguna manera es así; al contrario, se la menciona expresamente y se le da una facultad tan grande como es la de intervenir en el organismo encargado de fijar anualmente el salario vital mínimo y móvil. Siendo así no podemos nosotros legislar pensando que la ley puede durar uno o dos años —yo creo que va a durar muchos años, y deseo que así sea—. Se tiene que legislar para el futuro. Nosotros tenemos que pensar que las generaciones venideras van a considerar a esta norma legal como una ley sabia, y no podemos suponer que haya que ir cambiando con el tiempo los nombres de acuerdo con la voluntad

de los organismos gremiales, que pueden modificar su designación o bien decidir no participar en el organismo que se crea, como ha pasado con la ley nacional de abastecimiento. No nos cerremos, pues, en una posición, y dejemos abiertas las posibilidades dentro de los conceptos ya enunciados. Esto será legislar con sabiduría.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Muniagurria: como ha vencido el término reglamentario de que disponía para su exposición, la Presidencia lo invita a concluir su pensamiento.

Sr. Scarpello. — Que se le prorrogue el plazo, señor presidente.

Sr. Muniagurria. — No obstante la amabilidad de mis colegas, voy a cerrar mi pensamiento, sin dejar de mencionar, a propósito de la interrupción del distinguido señor diputado Jofré, que así como la Cámara contó con el apoyo de su bancada para mencionar la sigla CGT —que en este momento se la considera urticante— en la ley nacional de abastecimiento, ahora no debiera oponerse a esta sanción.

Sr. Jofré. — Nos opusimos expresamente.

Sr. Muniagurria. — Me rectifico, entonces, pues creía de buena fe que habían votado aceptando esa mención en la ley nacional de abastecimiento.

Sr. Serú García. — Puede dirigirse, entonces, a la bancada del radicalismo del pueblo.

Sr. Muniagurria. — Esto se parece a aquellas epístolas de San Pablo que eran dirigidas a los corintios para que de cualquier manera las leyera los romanos.

Quiero reiterar y cerrar mi exposición, por circunstancias reglamentarias. Repito que la posición de nuestra bancada, la cual ha suscrito el dictamen de la minoría, es clara en este aspecto, y mi intervención en el debate responde al deseo de hacer una exhortación para que encontremos una fórmula, sin declinación de posiciones, convicciones ni actitudes que comporten en cierta medida principios de trasfondo —repito la palabra—, fórmula que resulte adecuada para la solución de este problema.

La realidad es que la CGT existe; la realidad es también —y lo estaba diciendo cuando me interrumpió el señor diputado Jofré— que si existiera aquel designio al cual yo me refería, no habría de ser ni una disminución ni una limitación la posibilidad de que en una ley colateral se haya mencionado la sigla CGT, o las palabras Confederación General del Trabajo, como ya se ha hecho en la ley nacional de abastecimiento.

De manera que la posición demócrata progresista, que ha suscrito el dictamen en minoría, es exhortar a la Honorable Cámara a hallar una fórmula que pueda ser el reconocimiento de realidades que están por encima de nuestras intenciones.

Sr. León. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Muniagurria. — No tengo inconveniente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Ha vencido el término reglamentario, señor diputado, y la Presidencia lo invita a no conceder interrupciones y a poner fin a su exposición.

Sr. Muniagurria. — Señor presidente: he dado fin a mi exposición para complacer a la Presidencia y a la Cámara.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado León.

Sr. León. — Había pedido una interrupción a nuestro distinguido colega, el diputado Muniagurria, porque me parecía oportuna la exhortación, tan serena, del presidente del bloque democrata progresista, y para hacer esta pregunta que no iba solamente dirigida al señor diputado sino a todos los sectores, que yo creo también se mantienen en el casillero de la buena fe y desean sancionar esta ley que va a ser útil al país.

Tomando el sentido de la realidad de que hablaban algunos diputados, entre ellos el señor Cornejo Linares, yo haría esta pregunta: en este instante, tomado el país como está, con esa realidad que marcan los hechos y la historia presente, ¿qué diferencia hay entre decir «la Central con personalidad gremial» o «Confederación General del Trabajo»?

Estamos legislando sin poner nombres ni apellidos, para la misma realidad y con el sentido de coincidencia que nos solicitaba el señor diputado Muniagurria. Creo que la posición de nuestro bloque es bien clara en este asunto: no niega jerarquía a nadie, y de esa forma estamos legislando, no para modificar una ley mañana o pasado, sino para la realidad permanente del país.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo y miembro informante del dictamen en discusión no me corresponde contestar las manifestaciones formuladas en este debate, plagado, indudablemente, de matices políticos, de afares electoralistas, de manifestaciones minúsculas algunas y tendenciosas otras, y de presunciones que carecen de asidero, que permiten afirmar que hay algunos sectores que, a pesar de manifestarlo, no están realmente interesados en la sanción de esta ley.

Voy a entrar directamente al tema de la redacción del artículo 79. Indudablemente, la comisión ha modificado su criterio tendiendo a ajustarse a las disposiciones vigentes de la ley de asociaciones profesionales, que también se refieren a la entidad más representativa, a fin de acordarle personalidad gremial. Debemos tener en cuenta que ésta es una ley permanente, que no puede estar dedicada a ninguna institución, como bien lo señaló el señor diputado González Bergez; que una nominación implicaría la imposibilidad de que se designen los representantes ante el Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil en el caso de que la entidad

central de los trabajadores cambie esa denominación.

Es de buena técnica legislativa referirse a tal entidad en una forma conceptual y no por su nominación actual, que puede variar, como dije, en cualquier momento.

Por otra parte, aunque ya se ha dicho en este debate, las organizaciones gremiales —según la experiencia que nos proporciona toda la historia del sindicalismo mundial y también de la Argentina— no reconocen limitaciones de tipo legal para su constitución y desarrollo. De manera que no estamos poniendo una traba a estas organizaciones ni a la representación que cada una de ellas pretenda ejercer.

Es conocida la posición de la Unión Cívica Radical del Pueblo en favor de una central única, querida y aceptada por los trabajadores. En consecuencia, hemos seguido, casi literalmente, la redacción de los artículos correspondientes de la ley de asociaciones profesionales. Entendemos que de esa manera se obvian estos inconvenientes. Nominar una ley nos parece de una técnica legislativa deplorable y, por lo tanto, la comisión ha de mantener el dictamen. Nada más.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Señor presidente: no pensaba intervenir en este debate, pues ya lo habían hecho, en nombre de mi bloque, distintos señores diputados que han expuesto con toda claridad el pensamiento que nos anima.

No hemos venido aquí en son de guerra, ni exigimos la rendición incondicional de nadie, como se manifestara incidentalmente por parte del señor diputado Pugliese. Nuestra sola presencia en el recinto está hablando de la vocación pacifista que nos alienta. Hemos abandonado las catacumbas para llegar hasta estos altos estrados, a fin de trabajar permanentemente por la pacificación del país. Como digo, nuestra presencia en la Cámara, nuestra actuación anterior, nuestra constante preocupación por los problemas públicos, nuestro propósito de no obstruir la labor del gobierno cuando está encaminada hacia la resolución de los grandes problemas nacionales, es nuestra mejor carta de presentación en este sentido.

No es, en consecuencia, obstinación ni capricho, lo que nos alienta, sino la contemplación de la realidad viviente, que es la que da vida a la norma jurídica, porque, como decía Jiménez de Asúa, el derecho no es la ley «a secas»; el derecho debe asentarse en la vivencia del pueblo en que rige. Y ésa es la cuestión que hemos traído al debate.

Aquí se quiere cubrir con eufemismos —y lo digo sin sentido peyorativo— una realidad viviente, una realidad sentida, una realidad que presiona sobre nuestras conciencias cotidianamente. No podemos soslayarla ni mucho menos por incompreensión, por sectarismos políticos, crear al país un nuevo factor de perturbación.

Me inquieta, más que el texto de las proposiciones concretas alrededor de este artículo, lo que ocurriría en el país si no acertamos con la fórmula conciliatoria que todos anhelamos. No hemos venido, como decía, ni a hacer mérito de un pasado que ya pertenece a la historia, ni tampoco a hacer actos de contrición, ni a que nuestra conciencia sea examinada por nadie, porque nuestra conciencia solamente pertenece a Dios. Queremos que se nos crea sinceros con todos los sectores de la Cámara, sensibles a la vigente realidad nacional, para que juntos arbitremos las medidas legislativas que el país reclama.

Yendo específicamente al tema en discusión, creo que se parte de un supuesto cuando se quiere vincular con sentido equivocado la ley de asociaciones profesionales con el texto de este proyecto de ley. Precisamente la ley de asociaciones profesionales en una honrada interpretación es la que nos da la pauta. Cuando por virtud de sus disposiciones se confiere carácter de entidad representativa a una central obrera, ese reconocimiento lleva implícito el uso de todos los atributos que hacen a su personalidad jurídica y gremial, y entre ellas, en forma indiscutible, el derecho al nombre, porque no bastaría para que nosotros, como personas físicas, pudiéramos invocar las disposiciones del Código Civil diciendo que somos personas físicas por el solo hecho de existir, y cuando existimos, la personalidad física y jurídica nos reúne con una serie de atributos que son irrenunciables y que deben ser reconocidos *erga omnes*.

En virtud de la ley de asociaciones profesionales, la entidad más representativa de los trabajadores argentinos se llama CGT.

Sr. Vaccarezza. — Hoy.

Sr. Caro. — Hasta el día que se muera; lo mismo que las personas físicas.

No hay ninguna incongruencia jurídica ni doctrinaria, pues se trata de hacer jugar en su pristina pureza los principios jurídicos que hacen a la cuestión. Comprendo los escrúpulos de algunos señores diputados que, en algunos casos, son absolutamente consecuentes con su posición filosófica, como ocurre con la Federación de Partidos de Centro. Pero —y lo digo con todo respeto— no encuentro la misma consecuencia en el sector del socialismo democrático, y encuentro totalmente abstrusa, incoherente y contradictoria la posición del sector del centro.

Ya que esta discrepancia se ha planteado en términos de una pequeña batalla parlamentaria, aspiro a que seamos sensibles y a que no haya vencedores ni vencidos, abocándonos a buscar una solución conciliatoria, pues no se puede aceptar el dictamen modificado de la comisión en cuanto dice que la representación la tendrá la entidad obrera más representativa.

Al decir «más representativas», significa que tiene que hacerse un juicio de valor, y estos juicios son sumamente peligrosos en política y en actos de gobierno. ¿Cuáles serán los tér-

minos de la valoración? Ya están preestablecidos en el reconocimiento de la personalidad gremial, de acuerdo con la ley de asociaciones profesionales.

Exhorto a los señores diputados del sector del centro, que tienen la enorme responsabilidad de apoyar políticamente al gobierno que tiene hoy la República, a que mediten profundamente sobre la responsabilidad que les compete.

Yo felicito a los señores diputados por su obstinada defensa de los puntos de vista del Poder Ejecutivo, pues no les cabe otra misión política de mayor trascendencia en la Cámara.

Sr. Pena. — Si el señor diputado me permite...

Cuando el dictamen dice «la central de trabajadores con personería gremial más representativa», esta expresión tiene hoy el mismo significado que las palabras «Confederación General del Trabajo». Pero la ley tiene carácter permanente, y nosotros debemos legislar con una buena técnica legislativa. Por eso la comisión mantiene su dictamen.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Me voy a permitir formular una breve pregunta al señor diputado Pena, en su carácter de presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Quiero que controvierta de alguna manera mi manifestación de que el otorgamiento de la personalidad gremial a cualquier entidad le confiere como derecho inalienable el uso del nombre.

Sr. Pena. — La terminología del proyecto quizá resulte redundante, porque se dice «personería gremial» y «más representativa». Tal vez sería más conveniente seguir casi al pie de la letra la terminología de la ley de asociaciones profesionales. Podría suprimirse alguna de esas calificaciones —y la comisión lo aceptaría si fuese solicitado por algún señor diputado—, dejándose simplemente «más representativa», o bien «con personería gremial».

En estos momentos, es evidente que la CGT sería la entidad que estaría en condiciones de asumir esa representación.

Sr. Caro. — Ya he advertido la luz indicadora del vencimiento del término, de modo que voy a concluir.

A título personal, y sin comprometer la opinión de mi bloque ni mucho menos la de los sectores que suscribieron el dictamen en disidencia, propongo concretamente la supresión de la expresión «más representativas».

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta?

Sr. Pena. — La comisión acepta, puesto que, de todas maneras, la expresión es redundante.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se dará lectura a la redacción que la comisión acepta.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo diría, en lugar de la expresión contenida en la redac-

ción anterior: «...de la o de las organizaciones sindicales con personería gremial más representativas», lo siguiente: «... de la central de trabajadores con personería gremial».

Sr. Serú García. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — A efectos de coincidir en la redacción definitiva del artículo, hago moción de que pasemos a un cuarto intermedio en las bancas de hasta quince minutos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la moción de orden de pasar a cuarto intermedio.

—Resulta negativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — En realidad, señor presidente, no tengo nada más que agregar. Resta únicamente ver si podemos coincidir en la propuesta que he formulado, y eso queda a criterio de los sectores que han producido dictamen en disidencia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — Mi pedido de palabra era anterior a este problema, de modo que no voy a hablar en este momento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Domingorena, para una segunda intervención.

Sr. Domingorena. — Yo tampoco voy a hacer uso de la palabra, señor presidente.

Sr. León. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado León.

Sr. León. — La propuesta de pasar a cuarto intermedio formulada por el señor diputado Serú García tomó de improviso a este bloque, por lo que votó por la negativa. Advertimos ahora que si el cuarto intermedio es para coordinar ideas y opiniones entre los distintos bloques, puede ser conveniente, por lo que vamos a rectificar nuestro criterio y votar afirmativamente la moción de orden.

Sr. Serú García. — Agradezco la intervención del señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Debe reiterarse la moción de orden.

Sr. León. — Propongo, concretamente, que pasemos a cuarto intermedio por quince minutos, en las bancas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado León.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Invito a los señores diputados a pasar a cuarto intermedio por quince minutos, en las bancas.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 17 y 55.

—A la hora 18 y 30:

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Señor presidente: tengo el honor de informar a la Honorable Cámara que los grupos parlamentarios que suscribieron el dictamen de minoría —demócrata progresista, demócrata cristiano, socialista argentino, ambas UCRI y justicialista— han coincidido en sostener el siguiente texto para el artículo 7º: «Los miembros del consejo serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Economía, de la central de trabajadores con personería gremial...», en la inteligencia de que la interpretación auténtica de esta redacción es la que dio el señor presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo.

Destaco que los grupos que han coincidido en esa redacción no están vinculados entre sí por ningún interés político, y que la coincidencia que los ha alentado en esta circunstancia es de tipo puramente parlamentario y se asienta en puntos de vista comunes en la apreciación de una realidad actual.

Sr. Serú García. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Caro. — Sí, señor diputado.

Sr. Serú García. — Solamente por una razón de lealtad parlamentaria he solicitado una interrupción al señor diputado Caro. En efecto, deseo adelantar que, como consecuencia de la coincidencia producida, en oportunidad en que consideremos las disposiciones transitorias habremos de proponer un nuevo artículo que establezca que para la puesta en marcha de la ley el organismo que debe proponer los representantes obreros ante el consejo creado por el artículo 5º, debe ser la Confederación General del Trabajo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La comisión, como lo había adelantado con anterioridad al solicitarle una interrupción al señor diputado Caro, acepta la supresión de las palabras «más representativas», por considerar que son superabundantes en la redacción de este artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión la proposición del señor diputado Schaposnik, en el sentido de modificar el plazo de tres años por el de dos años?

Sr. Pena. — La comisión acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se dará lectura de la redacción definitiva del artículo.

Sr. Secretario (Oliver). — Dice así: «Los miembros del consejo serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Economía, de la central de trabajadores con personería gre-

mial y de la o las entidades empresarias más representativas. Durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelectos. Deberán reunir los requisitos exigidos para ser electo diputado nacional y poseer reconocida versación en materia laboral o económica. Si alguna de las entidades consideradas como más representativas por el Poder Ejecutivo se negare a formular la propuesta, las designaciones se harán de oficio.»

Sr. Domingorena. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Domingorena.

Sr. Domingorena. — De acuerdo con la lectura dada por Secretaría, con la coincidencia de todos los sectores se suprimió la expresión «más representativa». Habría que suprimir también la expresión del párrafo final que dice: «Si alguna de las entidades consideradas como más representativas...».

Sr. Serú García. — Se refiere a las entidades empresarias. ¿No es así, señor presidente de la comisión?

Sr. Pena. — Así es.

Sr. Domingorena. — Con la aclaración de que la expresión está referida a las entidades empresarias, retiro mi observación.

Sr. Gómez Machado. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

Sr. Gómez Machado. — El último párrafo podría redactarse en la siguiente forma: «Si algunas de las entidades que deben designar representantes se negare a formular la propuesta, las designaciones se harán de oficio.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Pena. — Después de las modificaciones introducidas en la discusión, la proposición del señor diputado Gómez Machado mejora la redacción. Por ello, la comisión la acepta.

Sr. Del Pero. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Del Pero.

Sr. Del Pero. — Yo votaré en favor del primitivo artículo proyectado por la comisión. No apoyaré las modificaciones que en forma tan versátil ha aceptado la comisión a través de todo el debate.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 7º del dictamen con las modificaciones aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El señor diputado Salado propone el siguiente agregado al artículo 7º: «El consejo funcionará con quórum de la mitad más uno de sus miembros y podrá tomar decisiones válidas por mayoría simple de votos. Deberá constituirse y comenzar a funcionar dentro del plazo que establece la presente ley, aun cuando alguna o algunas de sus representaciones no estuviera designada o se negara a integrarlo. Igual procedimiento se

seguirá si, una vez constituido, alguno o algunos de sus miembros se retiraran del organismo sin que se designe reemplazantes. Si alguna o algunas de las representaciones en el consejo obstruyeran su normal funcionamiento, impidiendo la formación del quórum legal, el organismo podrá tomar resoluciones válidas por mayoría simple de votos de sus miembros presentes. La reglamentación tipificará los actos de obstrucción a que se alude en este artículo. En caso de empate en las votaciones, el presidente tendrá doble voto.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Pena. — Señor presidente: la comisión no acepta el agregado porque entiende que se refiere a cuestiones reglamentarias que no deben incorporarse a la ley.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Salado que acaba de leer la Secretaría.

—Resulta negativa.

Sr. Solana. — Señor presidente: en el transcurso del debate he solicitado una inserción en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Así es, señor diputado.

Se va a votar la inserción solicitada por el señor diputado Solana.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se hará la inserción solicitada (1).

En consideración el artículo 8º.

Tiene la palabra el señor diputado Bobillo.

Sr. Bobillo. — Sugiero a la comisión que en el inciso e) del artículo 8º reemplace la expresión «formular su presupuesto de gastos» por la de «proponer su presupuesto de gastos», a fin de mantener un mejor ordenamiento dentro del poder administrador.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta por el señor diputado Bobillo?

Sr. Pena. — La comisión entiende que con ella no se modifica en manera alguna el sentido del inciso. Por lo tanto, la comisión mantiene el dictamen.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Salado.

Sr. Salado. — El artículo 8º, en el que hay disposiciones de suma importancia, justifica mi interés respecto del inciso e), que destina el 20 por ciento de los fondos que ingresen al Consejo Nacional del Salario para la atención de su propio presupuesto, afectando el excedente al Consejo Nacional de Educación Técnica.

Entiendo que el 20 por ciento de los fondos del consejo son excesivos para atender a las nece-

(1) Véase el texto de la inserción en el Apéndice.

sidades de su existencia. Por ello propongo que se lo reduzca al 10 por ciento.

Por otro lado, en lo que respecta a la afectación del excedente de los fondos, la bancada que represento entiende que dada la procedencia de dichos fondos, que provienen del sueldo anual complementario de todos los obreros y empleados, deben estar dirigidos a servir las necesidades más elementales y urgentes de los trabajadores, como es la construcción de viviendas.

Si bien como miembro de la Comisión de Educación y como educador reconozco que son grandes las necesidades que el país tiene en materia de educación técnica, comprendo también el gran déficit de edificación que tenemos. Si bien en lo que respecta a educación es fundamental tecnificar la mano de obra del país para dar mayores posibilidades de superación a la clase trabajadora, creo que lo primario es, no obstante, atender a las necesidades elementales, entre ellas la urgente necesidad de viviendas que hay en todo el país. Ya he dicho en el debate que tenemos muchas ciudades con numerosas villas miseria y que aun en nuestro campo se vive como en una villa miseria.

Debemos evitar esas situaciones. Nos consta que los fondos que se destinarían a vivienda no son suficientes para solucionar el problema, pero será al menos el testimonio de la voluntad de este Congreso de que sirvan a esas necesidades fundamentales que he señalado.

Al pedir la reducción del presupuesto de gastos del Consejo Nacional del Salario, entendemos que con la modificación que propugnamos tendrá también los fondos suficientes para la atención de su cometido, sin convertirse en un organismo burocrático más.

Dejo así formuladas las modificaciones propuestas al inciso e) del artículo 8°.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas por el señor diputado Salado?

Sr. Pena. — La comisión ha redactado este artículo procurando limitar el uso de este recurso y a su aplicación para afrontar el presupuesto del Consejo Nacional del Salario y, por ello, ha establecido «hasta el 20 por ciento», lo que significa que no tiene por qué utilizarse el total asignado. Sobre un total estimado de 200 millones de pesos, el 20 por ciento significará 40 millones.

Hemos estimado así mismo que era procedente destinar el excedente al Consejo Nacional de Educación Técnica, porque está bastante ligado al origen de los fondos, y además porque debemos tener en cuenta que la aplicación de estos fondos a un plan de vivienda nos dará un importe relativamente insignificante para poder promover este anhelo de toda la población trabajadora del país. Por esta circunstancia la comisión va a mantener los términos del dictamen que ha formulado.

Sr. Carreira. — Ahora que tengo la palabra definitiva de la comisión, deseo preguntarle al señor miembro informante cuáles son las cifras que se han tenido en consideración para llegar a la conclusión que termina de exponer, relacionada con el importe de cuarenta millones de pesos. ¿Han tenido a la vista el pago total de jornales anuales? ¿Cuál es la suma que anualmente se paga por sueldos y jornales?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: contestando al señor diputado Carreira, expreso que hemos tenido en cuenta la recaudación que obtiene la Dirección Nacional de Turismo con el 3 por ciento sobre el monto de los sueldos anuales complementarios. La recaudación del 3 por ciento indicado ha alcanzado en el último año a 292 millones. Si la Dirección Nacional de Turismo, con un recurso del 3 por ciento sobre el aguinaldo, ha obtenido esa suma, en el caso que estamos tratando, aplicando el 2 por ciento, se podrá obtener 200 millones de pesos. Sobre estas bases se ha hecho el cálculo de los 40 millones de pesos a que me he referido.

Sr. Carreira. — Si esas fueran las cifras, no haría objeción. Pero mentalmente estaba haciendo un cálculo teniendo en cuenta lo que se paga anualmente por sueldos y jornales, que es una suma que supera los 400 mil millones de pesos, y según esto los porcentajes que menciona el señor miembro informante de la comisión no estarían muy orientados. Además, podría ser que la estadística de la Dirección Nacional de Turismo adolezca de un error.

Sr. Bobillo. — Pero es sobre el total del sueldo anual complementario.

Sr. Carreira. — Entonces, no puede ser ésa la cifra sobre la cual debe hacerse el cálculo.

Si, como se me precisa, son 480 mil millones de pesos el total de sueldos y jornales pagados...

Sr. Calabrese. — Entiendo que deben ser 480 millones de pesos, señor diputado.

Sr. Carreira. — Al realizar en estos momentos el estudio del presupuesto nacional encuentro que en el ejercicio de 1962 el total pagado por el concepto que termino de expresar alcanzaba en aquel entonces a los 400 mil millones o 412 mil millones de pesos. Ha aclarado el señor diputado Ghioldi que en este momento —y así puede ser, porque han transcurrido ya dos años— esa cifra está en los 480 mil millones de pesos. Si ésta es la cifra con la cual se va a hacer el cálculo los porcentajes no pueden dar de ninguna manera el monto que nos ha expresado el señor diputado Pena.

Sr. Ghioldi. — La cifra que acabo de pronunciar ha sido tomada de la tabla del ingreso neto nacional en el renglón «Remuneración del trabajo en relación de dependencia», donde se consigna la suma de 480 mil millones de pesos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Carreira.

Sr. Carreira. — Siendo así, no se puede sostener el porcentaje que tiene el dictamen de la mayoría. Si ésas son las cifras definitivas, es exagerado. Aunque figure allí la expresión «hasta el 20 por ciento», de cualquier manera sería un importe que quedaría congelado y no sé por qué. No se le puede dar un destino efectivo y práctico como el que propone el señor diputado Salado.

Sr. Jofré. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Carreira. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — En el inciso e) del artículo a que se hace referencia, se habla de que los gastos serán atendidos con hasta el 20 por ciento de los recursos que ingresen por aplicación del artículo 15. Y en el artículo 15 se establece que «los gastos del consejo serán atendidos con dos unidades del aporte previsto por el artículo 48 del decreto ley 33.302/45». El mencionado artículo 48 se refiere al sueldo anual complementario. Por lo tanto, esas dos unidades no son aplicables sobre las cifras totales que perciben los obreros en el país, sino sobre los importes que perciben por concepto de sueldo anual complementario.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Carreira.

Sr. Carreira. — En este momento estaba haciendo los cálculos mentalmente, y considero que la proposición que hace el señor diputado Salado es atinada. Me parece que merece la consideración de la comisión y debe ser examinada.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La comisión quiso ser realista. Para ello investigó la recaudación que podría obtenerse por este recurso. No olvidemos que por el artículo 48 del decreto 33.302 se aporta el 5 por ciento sobre el importe del aguinaldo, correspondiendo el 3 por ciento a cargo del empleador y el 2 por ciento se autoriza a descontarlo del sueldo del trabajador.

Como digo, quisimos trabajar sobre realidades, y para ello concurrimos a la Dirección Nacional de Turismo donde averiguamos que ese 3 por ciento, que está afectado al presupuesto de dicha dirección, produjo 292 millones de pesos en el último ejercicio. Sabemos que sobre este aporte hay evasión, y ninguno de nosotros tiene dudas de que ella se seguirá produciendo. Preferimos ajustarnos a algo concreto antes que a una expresión numérica como la que formula el diputado Carreira. Por eso fue que en la comisión se estableció esa limitación de hasta el 20 por ciento, que nos daría una cifra aproximada a los 40 millones de pesos para afrontar todos los gas-

tos, incluso la contratación de técnicos, los estudios que debe realizar el Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil, etcétera. Posteriormente se verá si es necesario aumentar dicho presupuesto para que los estudios sean más profundos y exhaustivos y para responder a las necesidades de la fijación del salario mínimo vital.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Carreira.

Sr. Carreira. — Nuestro bloque va a votar la proposición que formula el señor diputado Salado, porque estima que la fuente de información que ha tenido la comisión, aunque es realista, no es correcta. Y como yo tengo en este momento el pensamiento puesto en las cifras que analicé, nos vamos a inclinar, como digo, por la proposición del señor diputado Salado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bobillo.

Sr. Bobillo. — Quería aclarar el sentido de mi proposición anterior de cambiar el término «formular» por «proponer», cuando se refiere al presupuesto de gastos. De la redacción actual podría interpretarse que este organismo va a hacer y a aprobar por sí mismo el presupuesto.

Si la comisión interpreta que la expresión «formular su presupuesto» importa nada más que el hecho material de su confección, y que será elevado oportunamente ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que siga el trámite correspondiente, no tengo inconveniente en aceptar la redacción actual. De otra manera, insisto en mi proposición de que se diga «proponer su presupuesto de gastos», porque debe ser el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social quien apruebe en definitiva el proyecto de presupuesto, para elevarlo al Congreso Nacional juntamente con el resto del presupuesto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Voy a contestar primeramente a la sugerencia del señor diputado Bobillo.

Entiendo que la palabra «formular» tiene aquí el sentido de «proponer» que él sugiere. En consecuencia, la palabra «formular» tiene un alcance similar al que reviste en las entidades autárquicas: el cálculo o la proposición del presupuesto que, en definitiva, aprueba el Poder Ejecutivo.

En contestación al señor diputado Carreira, diré que, siguiendo la misma línea de razonamiento y las mismas cifras que él ha tomado, si partimos de un total de 480 mil millones de pesos como sueldos anuales, llegaremos...

Sr. Carreira. — A 800 millones de pesos.

Sr. Pena. — Efectivamente, ése es el 2 por ciento. Pero de ahí tomamos el 20 por ciento. Quiere decir que al Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil le quedaría en el mejor de los casos, teniendo una recaudación perfecta, lo que será muy difícil de lograr en los primeros tiempos, nada más que 160 millones de pesos para solventar todos los gastos de su presupuesto. No creo que ese importe sea demasiado importante,

sobre todo teniendo en cuenta las dificultades de recaudación. No olvidemos que las cifras que estamos barajando aquí son un poco teóricas. Tendrán que establecerse los sistemas de recaudación, que todavía no han funcionado porque el consejo no ha tenido principio de existencia y tampoco el Instituto Nacional de las Remuneraciones creado por el decreto 33.302.

En consecuencia, teniendo presente que en el inciso e) se establece que el máximo de los gastos del presupuesto de este consejo podrá ascender hasta el 20 por ciento y que esta cifra no podrá ser mayor de 160 millones de pesos, entiendo que debemos mantenerla pues no considero exagerado el monto que surge de este cálculo.

Sr. Carreira. — Eso es lo que determinó nuestra observación, porque cuando se hacen reservas de esta naturaleza se abren las puertas a los excesos burocráticos, que es lo que deseamos evitar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — En primer término, para apoyar la proposición de reforma del inciso e) del artículo 8º, propuesta por el señor diputado Salado; y, en segundo lugar, para proponer que se eliminen los restantes incisos del artículo, puesto que si los leemos con detenimiento ellos invaden las facultades reglamentarias y su inclusión en la ley no es necesaria.

El artículo dice: «El consejo tendrá las siguientes facultades», y al entrar a enumerarlas se aprecia que son facultades obvias, que de ninguna manera deben estar contenidas en la ley. Véase si no es así: «a) Nombrar comisiones de estudio con la participación de los sectores interesados; b) Requerir asesoramiento e información de las reparticiones y organismos nacionales, provinciales, municipales o privados; c) Realizar encuestas y estudios relativos a la situación económica y condiciones de vida de los trabajadores en las distintas zonas del país; d) Contratar, previo concurso, personal administrativo, economistas y técnicos.» Y el último, el inciso f), que es el más redundante de todos, dice: «Realizar toda otra actividad tendiente al cumplimiento de esta ley.»

Entiendo que el artículo quedaría más claramente redactado si, aparte de la modificación propuesta por el señor diputado Salado, dijera: «El consejo formulará su presupuesto», porque los verdaderos objetivos de ese organismo están dados por el artículo 9º.

Reitero que todas estas facultades son obvias, naturales de cualquier entidad de este tipo, y no contribuye a la buena técnica legislativa esa enumeración que, por otra parte, es incompleta porque entre ellas puede haber muchas más.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La comisión va a mantener su dictamen por las siguientes razones.

Si bien es cierto que la facultad esencial del consejo está establecida en el artículo 5º del dictamen, entiendo que la enumeración de sus facultades, que es enunciativa, como resulta del inciso f) cuando expresa «realizar toda otra actividad tendiente al cumplimiento de esta ley», a juicio de los firmantes del dictamen es necesaria, porque sirve para indicarle al consejo un plan de trabajo que tendrá que llevar a cabo a fin de realizar los estudios necesarios para la fijación del salario vital, mínimo y móvil.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Molinas.

Sr. Molinas. — Si la comisión mantiene el texto del artículo 8º, pienso que habría que suprimir del inciso d) la palabra «economistas». Si el consejo tiene la facultad de contratar personal administrativo y técnico, los economistas o son una especie híbrida o están contenidos entre los técnicos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión la supresión propuesta por el señor diputado Molinas?

Sr. Pena. — Considerando que en alguna medida puede mejorar la redacción del proyecto, la comisión va a aceptar la supresión propuesta.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Solari.

Sr. Solari (J. A.). — El artículo que se discute establece las facultades del consejo a crearse.

Coincido con el señor diputado Luco en que podrían omitirse algunos de los incisos, sobre todo el último, que establece «realizar toda otra actividad tendiente al cumplimiento de esta ley», que me parece es redundante.

El inciso c), al que asignamos importancia, determina lo siguiente: «Realizar encuestas y estudios relativos a la situación económica y condiciones de vida de los trabajadores en las distintas zonas del país.» Propongo agregar a continuación: «y publicar anualmente un informe económico-social con referencia a la evolución de los salarios, precios, costos y ganancias.» Sería un elemento de juicio sumamente importante, que va siendo cada vez más indispensable como antecedente para la labor de gobierno, e, incluso, para el mismo Congreso.

Creo que estas breves palabras son suficientes para fundar la razón del agregado que propongo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Pena. — La comisión acepta el agregado propuesto por el señor diputado Solari.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Monte.

Sr. Monte. — Para consignar nuestra adhesión a la proposición del señor diputado Salado, por entender que ese nuevo destino de los fondos sería un factor coadyuvante para solucionar el problema de la vivienda.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Corresponde votar el artículo 8º.

La Presidencia sugiere que este artículo se vote por partes, excluyendo de la primera votación el inciso e), que se votaría a continuación.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 8º, con excepción del inciso e).

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el inciso e) del dictamen.

—Resultado afirmativa.

Sr. Fabrizio. — Faltaría votar el agregado propuesto por el señor diputado Solari.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia entiende que al poner a consideración el artículo 8º del dictamen, implícitamente quedaba comprendido el agregado propuesto por el señor diputado Solari, aceptado por la comisión.

En consideración el artículo 9º.

Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: como surge seguramente de la versión taquigráfica de la discusión relacionada con el artículo 4º, la comisión entiende que hay que agregar a este artículo, después de las palabras «inferior a la jornada legal», la siguiente facultad del consejo: «y determinará las remuneraciones que por su efectivo carácter de premios, primas o bonificaciones por incentivación, productividad u otro concepto, no deben considerarse para el cómputo del salario vital mínimo».

Además, accediendo a sugerencias de algunos señores legisladores, la comisión está de acuerdo en la supresión del párrafo segundo del artículo en consideración.

Por otra parte me permito expresar que las disposiciones de este artículo fueron discutidas in extenso y en profundidad en oportunidad de considerarse el artículo 2º, sobre todo en lo relacionado con las zonas de aplicación del salario. Entiendo, por lo tanto, que no corresponde ahora reiterar esa discusión, que fue amplia, dado que la Cámara ya ha expresado su voluntad al sancionar el artículo 2º tal como era aconsejado por la mayoría de la comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para un mejor orden de la discusión se va a dar lectura a las modificaciones propuestas al artículo 9º.

Sr. Secretario (Oliver). — En la disidencia parcial que suscriben los señores diputados Lucio, Monte, Rois, Salado y Palacios, se establece para el artículo 9º que en el primer párrafo se suprima «para cada zona»; en el inciso b) se suprime el segundo párrafo, y en el inciso c) se propone la siguiente redacción para el tercer párrafo:

«Establecerá así mismo, por resolución fundada, los porcentajes de aumento y los de reducción que correspondan a los aprendices y menores, a los trabajadores cuya capacidad laboral se encuentre manifiestamente disminuida y

a aquellos que cumplan un horario de trabajo no impuesto por la calificación, naturaleza o características especiales del mismo, inferior a la jornada legal.»

El señor diputado Solari, Juan Antonio, proponía suprimir del artículo las palabras «para la familia tipo del trabajador».

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Cornejo Linares.

Sr. Cornejo Linares. — No obstante la manifestación formulada en el seno de la comisión por su presidente, en el sentido de que el problema de la quita zonal, directamente vinculado al artículo 9º, se ha discutido en extenso y en profundidad, por su trascendencia e importancia me voy a permitir insistir en esta cuestión, a pesar —incluso— de haberse debatido al considerar el artículo 2º del dictamen.

El fundamento de los salarios por zonas se basa en que en ciertas regiones del país la vida sería más cara que en otras y, en consecuencia, el salario vital mínimo debe ser más elevado que en otras zonas donde el costo de la vida sería más barato. Pero no se ha dicho que allí donde se dice que la vida es más barata, lo es únicamente en función de la miseria en que vive la población, por el pauperismo que allí hay. Tal ocurre en mi provincia con los obrajes, fenómeno común también en Santiago del Estero y el Chaco. Esas provincias son consideradas zonas pobres con salarios más bajos.

Pero ocurre, señor presidente, que ni siquiera allí la vida es más barata si se tienen en cuenta las necesidades mínimas de alimentación.

Los señores diputados que conocen la zona Norte del país saben que la mayor parte de los artículos de consumo —cereales, pastas, etcétera— es llevada desde el Sur. De manera que aparte del recargo del flete ferroviario sufre otro por el traslado de dichos artículos desde el centro más próximo de población hasta el obraje, que a veces se halla de noventa a ciento veinte kilómetros de distancia, y así esa gente se ve obligada a consumir artículos de alimentación recargados a veces en hasta un sesenta por ciento sobre los precios que rigen en la Capital Federal.

También se ha dicho que si se establecieran en las zonas más pobres del país los jornales que rigen en las urbanas o industriales, se produciría allí un fenómeno económico que eliminaría a las pequeñas industrias y actividades afines por la imposibilidad de afrontar el pago de mayores jornales. Pero no es posible que se piense en la miseria y en el hambre como sistema para sostener industrias y actividades. Allí donde el desarrollo económico es mínimo —me refiero a las zonas pobres del país— el Estado nacional está obligado a concurrir con medidas fiscales de fomento, como exenciones impositivas, inversiones en obras públicas y otras medidas productivas tendientes a impulsar el comercio y la industria, y, con ello, la economía de esas regiones.

En ninguna forma es posible admitir, por un sentido mínimo de justicia, que en esas zonas las industrias y otras actividades se sostengan merced al pauperismo, al hambre y al desempleo de su población.

Por otra parte se dice que la vida es más barata en esas zonas porque no hay cinematógrafos, no hay transportes, no hay centros de diversión o de cultura, es decir no hay ninguna clase de esparcimiento ni de desenvolvimiento cultural. Pero, ¿es posible que sigamos pensando que nuestra gente de campo no tiene el mínimo derecho al esparcimiento, al desarrollo cultural, a la atención de la salud y a la prosperidad de sus hijos, y que ello continúe siendo privilegio exclusivo de los grandes centros poblados?

Este es el sentido de la insistencia de nuestro bloque. No lo hacemos guiados por un estrecho criterio político. Adviértase que en estos momentos hay en todos los gremios una corriente que tiende a la supresión de las quitas zonales en todos los convenios colectivos. Hasta mi despacho han llegado peticiones de distintas provincias, y en este sentido quiero recordar la situación de los obreros del cemento pórtland del departamento General Güemes, de Salta. Sé, por experiencia, que la vida es allí más cara que en Córdoba, por ejemplo, y, sin embargo, en los convenios colectivos de trabajo se fijan para los obreros de Salta jornales menores que para los que desempeñan la misma actividad en la provincia de Córdoba. ¿Será acaso porque se nos continúa considerando «cabezas negras», y que por vivir a 1.700 kilómetros de la Capital no tenemos el menor derecho?

En el caso recordado de los obreros de la industria del cemento portland, debo agregar que la misma empresa tiene establecimientos en ambas zonas, en Salta y en Córdoba, y tal vez el rendimiento de la planta de Salta sea mayor que el de la otra, de tal modo que el costo será más reducido y mayor el margen de utilidades.

Hay otras ramas del trabajo que por disponer de mayor fuerza gremial han eliminado por completo este criterio de las quitas zonales, que podríamos calificar de reaccionario. Esto es lo que ha ocurrido en los convenios de la industria azucarera —aun cuando, como todos saben, el costo de producción en Tucumán es más elevado que en las provincias del Norte—, y los jornales han sido uniformados, lo que es justo, sin considerar factores ajenos a la relación laboral misma.

Estas pocas palabras han de resultar suficientes para reafirmar la necesidad de que se acepte el criterio establecido en el dictamen de la minoría.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Salado.

Sr. Salado. — Señor presidente: nuestro bloque insiste en su conocida posición de defensa de la integralidad del salario. Hasta el momento ningún partido político o autor de derecho cons-

titucional han podido demostrar que las quitas zonales estén incluidas en el concepto de salario mínimo establecido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

No me refiero tan sólo a lo que pudiera ser una simple cuestión de inconsecuencia de algunos partidos políticos, sino a la propia inconsecuencia que podría resultar de la actividad del Estado. El Estado paga a sus obreros y empleados de las distintas zonas del país de acuerdo con el criterio de una clasificación que otorga bonificaciones mayores a los que viven en zonas más alejadas, o desfavorables, como se las denomina. Esta política general emprendida por el Estado habrá de quedar desvirtuada ahora, cuando lo cierto es que si debemos proteger a algún sector en especial es a aquel que vive más alejado de las posibilidades de la vida social. Si así no fuese, los maestros o los militares no podrían estar prestando servicio en destinos alejados de los centros urbanos. Conforme a una buena política, el alejamiento de los centros de confort debe merecer siempre un reconocimiento remuneratorio por parte del Estado; no puede éste, retaceando el concepto de salario mínimo, establecer una diferencia no sólo en la política salarial propia, sino proteger los otros retaceos, los patronales, en los convenios colectivos.

Entiendo que las quitas zonales no sólo han venido a desvirtuar el sentido del salario, sino a constituir la piedra de la discordia en el tratamiento de los problemas laborales entre las partes. Por eso insisto en mis razones para que se eliminen esas quitas definitivamente de la legislación argentina.

No podemos, por un lado, establecer una política de salario mínimo y, al mismo tiempo, por otro lado, dejar que el Estado no brinde su protección a los que viven en lugares alejados. No podemos establecer bifurcaciones en los conceptos esenciales. Si bien el salario se establece de acuerdo con la Constitución, con la doctrina y con la buena práctica laboral, según el concepto de que a igual tarea debe corresponder igual remuneración, encontramos que luego se pretende establecer una forma de categorización de los sistemas laborales en el país.

El salario mínimo tiene un sentido de universalidad, de generalidad y de justicia, que todos defendemos. Por eso insisto en la necesidad de eliminar las quitas zonales, a fin de preservar el concepto integral del salario.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Carreira.

Sr. Carreira. — No voy a volver sobre el problema de las quitas zonales, porque nuestro bloque tiene posición tomada y va a votar el dictamen en disidencia. Por eso no repetiré argumentos. Mencionaré solamente uno, de pasada.

La sanción del artículo 2º y la que presuntamente se dará al artículo 9º no lograrán sino influir otra vez en el éxodo de los trabajadores que están afectados por la discriminación zonal,

volviendo a fortalecer los conglomerados urbanos, con todos los problemas que trae apareados la deserción de trabajadores del interior de la República hacia las zonas más pobladas.

Sr. Balestra. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Carreira. — Sí, señor diputado.

Sr. Balestra. — El problema que plantea el señor diputado se resuelve creando fuentes de trabajo en el interior. De ese modo el obrero tendrá dónde ocuparse y no se producirán los éxodos que preocupan al señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Carreira.

Sr. Carreira. — La observación que formula el señor diputado Balestra puede ser que tenga validez en el momento en que ese propósito que ha enunciado haya sido logrado dentro de la realidad argentina. Pero yo estoy hablando para esta realidad desgraciada que estamos viviendo.

Paso al otro punto que me interesa considerar, que se refiere a la cláusula que está en medio del tercer párrafo del artículo en el dictamen de la mayoría. Para ser más claro, daré lectura de dicho párrafo: «Establecerá así mismo, por resolución fundada, los porcentajes de aumento o reducción correspondientes a las distintas zonas de aplicación, a los aprendices y menores —y aquí viene la parte a que me refiero—, a los trabajadores cuya capacidad laboral se encuentre manifiestamente disminuida...», etcétera.

Me parece que esta cláusula, además de introducir cierta anarquía, es injusta. Introduce anarquía porque el consejo va a tener que discriminar en cada una de las circunstancias específicas donde se dé la posibilidad de existencia de un trabajador con capacidad manifiestamente disminuida.

¿Qué es esto de capacidad manifiestamente disminuida? La incapacidad ordinariamente es la ocasionada como consecuencia de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Cuando esto ocurre, por ejemplo, a un trabajador que ha sido afectado por una incapacidad, por lo regular se lo transfiere de función. Así, un obrero que pierde un brazo pasa a prestar servicio como sereno u otros análogos, donde no necesite la función del brazo con eficacia y en cambio puede serle muy útil la función mental. En ese caso, la forma en que desempeña las tareas en su nueva ocupación es tan eficiente como la de cualquier otro obrero.

No veo por qué mantener la injusticia de discriminar un salario hacia abajo. Sugiero a la comisión que piense en la conveniencia de eliminar esta cláusula.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Pena. — Señor presidente: la intención de la comisión al redactar esa disposición fue, precisamente, no perjudicar a aquellos trabajadores que, por cualquier circunstancia, ven dis-

minuida su capacidad laboral. Si las empresas tuvieran que pagarles el salario mínimo vital, podría ser que no les interesasen sus servicios. En cambio, si a través de una fundada resolución del Consejo Nacional de Salarios pueden pagar en esos casos un salario reducido en alguna proporción, habrá para esos trabajadores mayor posibilidad de ocupación.

Tal ha sido el propósito de la comisión y, por ello, entendemos que debemos mantener el dictamen tal cual ha sido redactado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bobillo.

Sr. Bobillo. — Señor presidente: el planteamiento que ha efectuado el señor diputado Cornejo Linares, quien ha estado ausente en la sesión del sábado cuando se discutió el artículo 29, obliga, en cierta medida, a repetir los argumentos expuestos.

No es lo mismo la institución de la «quita zonal» que la calificación por zonas que efectuará el Consejo de Salarios. La «quita zonal» no ha respondido en los convenios colectivos a ningún criterio científico ni real, sino que se ha concretado en porcentajes fijos sin tener en cuenta las necesidades dietéticas y calóricas de la familia tipo. Estoy seguro de que, cuando el consejo fije el salario mínimo, teniendo en cuenta la composición de la familia tipo y el nivel y costo de vida de cada zona del país, va a considerar las necesidades normales desde el punto de vista dietético y calórico.

Sr. Caro. — ¿Qué entiende por nivel de vida el señor diputado?

Sr. Bobillo. — Eso quedó bien aclarado el sábado. El costo de vida estará dado por el costo de los distintos productos y sus cantidades necesarias para el adecuado desarrollo de la familia y del individuo. En cuanto al nivel de vida, es idea fundamental elevarlo en todas las zonas. Es decir que, teniendo presente el actual nivel de vida, el Consejo de Salarios tratará de que el de esos trabajadores ser el nivel normal, adecuado y justo a que tienen derecho. En ello juega un poco el concepto filosófico y la razón de ser del salario vital, mínimo móvil.

Sr. Salado. — ¿Ese fue el concepto del senador Abdala?

Sr. Bobillo. — El proyecto del senador Abdala, cuando era diputado, respondía al propósito de destruir la injusticia de la quita zonal que se aplicaba en los convenios colectivos, por cuanto podría darse el caso de que esas zonas, que están ahora perjudicadas por el sistema de quitas zonales, como las de la provincia de Salta mencionadas por el señor diputado Cornejo Linares, se vieran beneficiadas por el salario mínimo en forma tal que, si el salario mínimo se ajustara a las necesidades reales, en esas zonas sería mayor que en la Capital Federal o en la provincia de Córdoba, por ejemplo.

En cuanto a los argumentos del señor diputado Salado acerca del texto constitucional, debo señalar que la redacción del artículo 14 bis

no se debe interpretar con sentido gramatical estricto, sino de acuerdo con criterios modernos como el que sustenta el profesor Recasens Siches, del «logos de lo humano, de lo lógico, de lo razonable». No se puede suponer que el artículo 14 bis de la Constitución, cuando habla de «a igual trabajo, igual remuneración», se refiera al ámbito espacial de aplicación del salario mínimo, sino que se refiere a que, en igualdad de condiciones, debe haber igual remuneración para el mismo trabajo.

Sr. Pizarro. — Eso no lo dijo el miembro informante.

Sr. Bobillo. — En cuanto al argumento de que a los trabajadores del Estado se les adjudica un «plus» por trabajar en zonas aisladas, debo señalar que ese sobresueldo tiene un sentido colonizador. Es para estimular a los individuos sacrificados que deben ir a zonas alejadas de los centros urbanos a desarrollar actividades; es para facilitar el trasplante de una zona urbana a una zona rural, porque si no se daría el caso de que de ninguna manera habría individuos que a igual remuneración quisieran trabajar en las zonas más alejadas del país y, por ejemplo, todos los maestros desearían trabajar en la Capital y grandes ciudades, en desmedro de la niñez que habita en zonas alejadas o inhóspitas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Catalán.

Sr. Catalán. — Señor presidente: voy a ser muy breve en mi exposición, pero deseo participar en el debate porque, precisamente, uno de los primeros proyectos de ley que presenté a la Honorable Cámara se refería a establecer la prohibición de las quitas zonales.

Esta cuestión de los jornales tiene una profundidad histórica que comienza con los primeros actos de la organización social. La mayoría de las doctrinas económicas y políticas han analizado exhaustivamente el problema a través de todos los tiempos y le han dado una preferente atención. Yo diría que esa interpretación en materia de salario tuvo una coincidencia y una aceptación como objetivo indestructible en la Convención de 1957, al consagrarse, entre otros, en el artículo 14 bis, como un imperativo constitucional, el salario vital y mínimo y móvil, y el principio de igual remuneración a igual tarea. Disiento en este aspecto con la opinión del señor diputado Bobillo.

Estamos, pues, señor presidente, en presencia de una cláusula constitucional imperativa, y no podemos modificarla sin vulnerar esa y otras prescripciones básicas de la Constitución Nacional, como son las que aseguran la igualdad ante la ley y la prohibición al legislador de dictar leyes reglamentarias que se opongan a las cuestiones básicas contenidas en el texto constitucional.

Sr. Pugliese. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Catalán. — ¡Cómo no!

Sr. Pugliese. — Deseo advertir al señor diputado que el dictamen de la minoría contiene la posibilidad de efectuar aumentos sobre el salario mínimo, con lo cual también se varía, en ese supuesto, la cláusula constitucional de igual remuneración a igual tarea.

Sr. Catalán. — Esa no es la interpretación, señor diputado. Justamente las provincias de Mendoza, Salta y otras, en oportunidad de suscribirse convenios colectivos de trabajo, impugnaron esos documentos basándose en las cláusulas constitucionales y en su autonomía, al entender que al establecer quitas zonales tales convenios laborales eran inconstitucionales y vulneraban además los principios y las facultades de las provincias.

Tal es lo que ocurrió al suscribirse los convenios colectivos para empleados de comercio. Tengo entendido que ante la Suprema Corte de Justicia se tramitan actuaciones por las que se declaran inconstitucionales tales convenios. No sé si la justicia se ha expedido, pero tengo entendido que algunos gremios han deducido esas causales.

En estas circunstancias, en que queremos establecer por una ley de orden público un salario mínimo que atienda a todas las necesidades de los trabajadores del país, no de Buenos Aires, ni del Chaco, ni de Mendoza, ni de distintas zonas, sino a las necesidades reales y esenciales que tiene una familia o un obrero para subsistir en cualquier lugar del país, por un principio jurídico elemental y de sentido social, incluido en casi todos los idearios políticos, lo menos que podemos hacer es darle, precisamente, a los obreros ese mínimo para su subsistencia, en una medida igualitaria y justa.

Sr. Rial. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Catalán. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Rial.

Sr. Rial. — He de ser muy breve y trataré de que nos entendamos.

Tiene razón el señor diputado cuando habla de iguales remuneraciones, pero ello significa salarios reales iguales, y no salarios nominales iguales. Lo que debería demostrar entonces es que los salarios reales corren paralelos con los nominales, que son los que especifica la ley. Esta es la gran diferencia. Muchas gracias por la interrupción.

Sr. Catalán. — Quiero llegar a establecer que no se pueden hacer discriminaciones en esta materia. De lo contrario esta ley sería un verdadero *boomerang*, que se volvería contra sus autores, porque crearíamos la arbitrariedad y la injusticia en todo el país al establecer clases de trabajadores entre los que ganan más y los que ganan menos.

Esta ley debe tener una finalidad u objetivo fundamental: establecer el salario vital mínimo y móvil para todos los trabajadores del país de acuerdo con las cláusulas constitucionales, que

fijan un principio fundamental que nosotros no podemos vulnerar a través de una ley, y de acuerdo con las exigencias de las masas trabajadoras de la gran familia argentina, que en estos momentos está pasando miseria y hambre, y que necesita que el Congreso le tienda la mano para sacarla de la situación caótica de crisis en que está viviendo.

Ya lo hemos dicho, y lo vuelvo a reiterar, porque se vincula con el tratamiento de esta ley. Cuando se trató la ley de abastecimiento, así como cuando se consideró la ley de reformas a la carta orgánica del Banco Central, nosotros dijimos que esa masa monetaria volcada al mercado iba a traer inflación, produciendo un impacto contraproducente para las clases trabajadoras, y esto resultó una realidad. En este caso también digo lo mismo: si esta ley no cubre el objetivo fundamental y primerísimo de reconocer a todos los trabajadores argentinos las mismas condiciones en cuanto al salario, colocándolos en una situación de igualdad, va a traer graves consecuencias. Además, si este instrumento legal no se complementa con una congelación de los precios de los artículos de primera necesidad, de uso y de consumo, y con una programación de la actividad industrial y agropecuaria, traerá al país graves consecuencias y nosotros no habremos previsto entonces para el futuro, pues nos encontraremos con un proceso de estancamiento y aun con mayores problemas laborales, económicos y sociales.

Insistimos en que debe establecerse un salario vital y móvil igualitario para todos los trabajadores argentinos. No se pueden hacer discriminaciones, porque esto sería odioso y sería dividir a la clase obrera argentina, como dije anteriormente, entre los que ganan más y los que ganan menos.

Aun aceptando que en alguna zona el costo de la vida puede ser inferior, debemos considerar que en las grandes ciudades es donde se tienen las mayores comodidades y las máximas posibilidades de expansión. Los obreros de las zonas alejadas tienen que supeditar a sus hijos a un desarrollo intelectual distinto, porque no tienen cerca universidades, porque no tienen elementos que difundan la cultura, médicos y otros elementos esenciales, porque viven en una situación desfavorable respecto de los habitantes de las grandes ciudades. Esto solo bastaría para justificar, si no fuera suficiente argumento lo relativo al costo de la vida, la igualdad de los salarios, porque es un verdadero sacrificio el que hacen los obreros que trabajan en las zonas alejadas del país, y estarían dentro de la ley natural de las compensaciones.

En esa forma soy consecuente con los términos de mi proyecto de ley, que surgen de la experiencia y del conocimiento de este problema, porque las leyes han de tener ese sentido del conocimiento, de la experiencia y de las exigencias de las clases sociales y de los intereses del país.

En ese sentido, siendo consecuente con el proyecto de ley que presenté en su oportunidad, aclaro que vamos a votar en contra del dictamen de la mayoría, para sostener el principio fundamental de igual salario para todos los trabajadores del país, por estar ello dentro de las cláusulas constitucionales y de la justicia social.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Monte.

Sr. Monte. — Deseo expresar el punto de vista de la Unión Cívica Radical Intransigente, ratificando los conceptos que emitimos con amplitud cuando se trató en general este proyecto de ley.

Aparte de las consideraciones que se han hecho en torno al problema humano, de justicia distributiva y de justicia retributiva, pienso que uno de los fundamentos más sólidos que podrían darse en favor de la aplicación de las quitas zonales, como lo sostiene la bancada radical del pueblo...

Sr. Rodríguez Vagaría. — No son quitas.

Sr. Monte. — No nos vamos a poner de acuerdo y vamos a dar vueltas en un círculo vicioso. Yo sostengo que son quitas, y si no, que se apruebe nuestra propuesta en el sentido de incrementar y no de disminuir los salarios.

Pienso que el fundamento más importante sobre este problema es la situación de la industria en zonas alejadas de los centros de consumo, pero ello no puede ir de ninguna manera en desmedro de los salarios, del nivel de vida y de las condiciones de trabajo de los hombres que laboran en esas industrias. Se dirá que el transporte de la materia prima incrementa los costos por las pérdidas de tiempo, el manipuleo y tiempo requerido para llevar esa materia prima elaborada a los centros de consumo.

Se me ocurre que la solución está dada por la vía de los decretos de promoción de la actividad industrial y económica. Dicha promoción debe efectuarse a través de créditos, impuestos y una serie de medidas que vayan en apoyo de las industrias de esas zonas a las que se quiere beneficiar por la vía de la disminución de los jornales de los trabajadores.

En conclusión, nosotros nos pronunciamos por la supresión de las quitas zonales.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pizarro.

Sr. Pizarro. — Aunque ya hemos expuesto nuestra posición favorable a la supresión de discriminaciones por quitas zonales, debo decir algunas palabras más para referirme principalmente a la interpretación del texto constitucional aprobado el 24 de octubre de 1957 por la Convención Reformadora de Santa Fe, en la que estuvieron como integrantes de la misma algunos señores legisladores del bloque radical del pueblo, que podrían hacerle notar al diputado Bobillo su equivocada interpretación. Allí, cuando se trató el tema de la retribución justa, salario vital móvil e igual remuneración por igual tarea, quedó expresamente aclarado por

el miembro informante que ello significaba no hacer discriminaciones de edad, sexo, nacionalidad, religión, creencias políticas o de cualquier otro orden. El señor diputado admitía que había posibilidades de discriminar.

Sr. Bobillo. — Por la ubicación espacial.

Sr. Pizarro. — El miembro informante dijo que por ningún concepto. Inclusive, señor diputado, eso sería concordante con el artículo 23 (1), inciso 2º de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre sancionada por las Naciones Unidas, que dice que no puede haber ninguna discriminación.

Sr. Bobillo. — En igualdad de condiciones. Esa es mi interpretación.

Sr. Pizarro. — No, señor diputado, ésta es la interpretación del miembro informante en el debate del 24 de octubre de 1957. Además, puede citarse el principio del artículo 23 de la Constitución, que establece que no puede alterarse por las leyes que reglamentan su ejercicio ninguno de los derechos consagrados en el capítulo único de declaraciones, derechos y garantías.

Por eso, creo que es necesario bregar por una unidad de salarios sin discriminaciones. Suprimiendo, en consecuencia, las quitas zonales, la existencia de la garantía constitucional de una justa retribución abona y respalda la posición de estos bloques minoritarios, pero no es la misma interpretación suya, señor diputado Bobillo, por más que me haga señas.

Con estas pocas palabras reitero que el bloque de la democracia cristiana va a votar el dictamen en disidencia que se ha sustentado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Señor presidente: en oportunidad de discutirse el artículo 2º del proyecto que estamos considerando fijé mi punto de vista respecto de este tema, y si vuelvo sobre él es porque también deseo ratificar mi total discrepancia con la interpretación del texto constitucional que ha hecho el señor diputado Bobillo.

Naturalmente que como método de interpretación podría ser aceptado sólo como una interpretación un tanto curialesca de la ley, pero sin atender a las razones que le dieron vida.

No hay que confundir dos cosas que son fundamentales: estamos tratando la fijación del salario mínimo, vital y móvil. Lo importante en este asunto es determinar qué se entiende por vital. En una interpretación puramente materialista, lo vital se refiere a lo únicamente biológico, en cuya consecuencia el salario sería la retribución material del hombre. Pero no creo que en una teoría moderna del salario, sobre todo en una filosofía adscrita a la doctrina que sustentan casi todos los partidos políticos con inspiración cristiana, pueda sustentarse tal interpretación del texto constitucional.

(1) Corregido de acuerdo con las manifestaciones del señor diputado en la página 993 del Diario de Sesiones del 10 de junio.

Cuando la Constitución habla de salario vital quiere significar que el hombre argentino tiene un mínimo de necesidades de tipo material y de tipo espiritual, vale decir que el salario debe ser suficiente solamente para aprehender ciertos bienes materiales y ciertos bienes culturales que son necesarios para preservar el ser nacional.

Participando de esta filosofía, es evidente que el salario mínimo, vital y móvil tiene que ser uniforme en todo el país, porque el hombre argentino necesita aprehender ciertos bienes materiales y culturales que hacen a la grandeza nacional. Evidentemente, esto tampoco implica desconocer las distintas conformaciones económicas del país. Desde luego que allí donde las posibilidades sean mayores, el salario tiene que estar por encima de este mínimo, y tal es la filosofía que inspira el dictamen en disidencia.

Deseamos establecer que el salario mínimo debe ser uniforme en todo el país y que por ninguna causa debe ser rebajado, porque ello estaría en contra de esta interpretación del texto constitucional, que para mí es la exacta y cabal; vale decir que ningún argentino debe ser retribuido por su trabajo por debajo de sus necesidades vitales. Y reitero que lo vital no está simplemente referido a lo biológico, sino que involucra el destino del hombre en la comunidad nacional.

Por eso, voy a sostener mi punto de vista, afianzado esta vez en el texto constitucional, cuya correcta interpretación creo haber formulado en esta breve intervención.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: la bancada demócrata progresista firmó también, juntamente con otros sectores de la Cámara, las disidencias al dictamen de la mayoría, entre las que están incluidas modificaciones al artículo en consideración. En las mismas sosteníamos la supresión de la discriminación zonal en lo que hace a la reducción del salario mínimo vital.

En oportunidad de considerarse el artículo 2º fijamos la posición de nuestro bloque, refiriendo que lo que consideramos fundamental en esta ley es que el salario —que en esta oportunidad se fija por una disposición transitoria, pero que luego será fijado por el Consejo Nacional de Salarios— debe ser un mínimo a partir del cual se puedan contemplar las situaciones de las distintas zonas del país sobre la base de aumentos, pero nunca de reducciones. Mencionamos, entre otros argumentos que considerábamos importantes, en primer lugar una razón de tipo psicológico, porque se podría crear una situación de incertidumbre y de frustración en el ciudadano del interior de la República que tuviera sólo noticias periodísticas de la sanción de la Cámara en este caso —o en el futuro de las resoluciones del consejo— acerca de una cifra determinada de la cual él no percibiría sino un porcentaje inferior.

La segunda razón que sostuvimos, de orden práctico, pero muy importante, se refiere a las asignaciones familiares. Como luego, presumiblemente, la Cámara ha de votar, la asignación familiar quedará fijada, por cada miembro que genere el derecho a percibirla, en el 10 por ciento del salario vital mínimo que se establezca. Si no partimos de la base de que el salario a establecer es el mínimo, y sobre él sólo podrá haber aumentos y no reducciones, nos encontraríamos con que las asignaciones familiares serían variables a lo largo del país, de acuerdo con las discriminaciones zonales en menos que pudiera formular el consejo.

El señor presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo me dijo que eso sólo crearía un problema de orden material, que podrían solucionar las cajas de asignaciones familiares, pero es que aunque pudiera resolverse el problema de orden material, que es desde ya complejo, crearíamos una discriminación en las asignaciones familiares, que no deberían ser variables porque se vinculan con el fortalecimiento y la consolidación de la familia, propósito que los sectores que hemos apoyado el dictamen entendemos que es fundamental.

Por eso, la bancada demócrata progresista va a votar en contra del dictamen de la mayoría, ya que no acoge las disidencias que hemos formulado oportunamente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — Muy pocas palabras he de decir para señalar, en relación a lo que se ha venido sosteniendo por algunos señores diputados, que el artículo 2º del dictamen define con absoluta claridad lo que se entiende por salario vital mínimo, diciendo que es la remuneración que posibilita asegurar en cada zona al trabajador y a su familia alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión.

Me da la impresión de que aquí nos estamos curando en salud. De ningún modo puede suponer la Cámara que se van a contemplar distintos niveles de vida, para continuar con la situación de empobrecimiento en que se desenvuelven las familias sacrificadas de las lejanas provincias llamadas pobres. Por el contrario, lo que deberá hacer el Consejo de Salarios es adecuar los mínimos de modo tal que admitan el mismo nivel de vida; pero, lógicamente, para obtener los trabajadores ese mismo nivel de vida, no tienen los mismos costos en las distintas zonas del país. Es muy probable, entonces, que en algunas zonas sean superiores, y en otras inferiores. Pero lo que hay que descartar de manera definitiva es que aquí no se pretende realizar quitas zonales, sino que, por el contrario, el dictamen tiende a establecer un salario real igual para todo el país. Vale decir, un salario con el mismo poder adquisitivo para todo el país, que permita el mínimo nivel de vida ade-

cuado y digno para los trabajadores. Esto es constitucional, y lo es tanto que el propio señor diputado Bravo, que actualmente integra nuestro bloque y que fue diputado constituyente en Santa Fe, en oportunidad de la discusión del problema en aquella asamblea, dijo estas palabras, que también fueron señaladas por el presidente de nuestro bloque: «El costo de la vida no es rígido ni estable; cambia según el tiempo y el lugar, por lo que el salario mínimo vital debe variar con las modificaciones del costo de la vida.»

Sr. Serú García. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Alfonsín. — Si me disculpa el señor diputado, previamente le voy a conceder una interrupción al señor diputado Caro, quien me la solicitó con anterioridad.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Quiero destacar al señor diputado Alfonsín que estamos en desacuerdo en el punto de partida.

Creo que para nuestra Constitución, e incluso para nuestra sensibilidad, el salario tiene una fundamentación moral más que material, y estando fundamentado en reglas de la moral, no se le puede asignar un ámbito de validez espacial, como quiere el señor diputado Bobillo y como pretende el artículo 2º que acaba de recordar el señor diputado Alfonsín.

Acá hay que ponerse de acuerdo en una premisa básica: en si el salario debe ser para mantener las cosas tal cual están en el país, en este enorme estado de desequilibrio entre la Capital y el interior, o si debe procurar restablecer el equilibrio roto; es decir lograr la elevación del nivel de vida a que hacía referencia el señor diputado Bobillo para ponerlo a nivel de las comunidades culturalmente más evolucionadas y económicamente más ricas. Esto hace a la unidad nacional y a una auténtica filosofía del salario.

Sr. Alfonsín. — El señor diputado Caro, a mi juicio, acaba de darme la razón...

Sr. Caro. — Esa es su opinión personal.

Sr. Alfonsín. — Por supuesto que sí.

Aquí se está sosteniendo por parte de diputados que se oponen al dictamen, que hay grandes desniveles, que hay distintos standards de vida en la población, y que ello es una injusticia, y por otra parte también se sostiene que tenemos que buscar llegar a un mismo nivel de vida a través del artículo 2º. Es lógico entonces que estemos procurando que esos sectores que están sumergidos en la vida nacional tengan toda la posibilidad de desarrollo y de desenvolvimiento. Y esto está expresamente consignado en la ley.

Quiero decir, además de lo que acabo de leer del señor diputado Bravo, expresado en el debate de la Constituyente de Santa Fe, que es indudable que la cláusula que establece que para igual salario corresponde igual remuneración, está contemplada perfectamente en este pro-

yecto. Porque si fuéramos a entrar en una teoría estricta, literal, tendríamos que arribar a la conclusión de que de ninguna manera cabría considerar la asignación familiar dentro del salario, toda vez que el trabajador que tenga dos hijos va a ganar más que el que tenga uno y menos del que tenga tres o cuatro.

Y aquí voy a la filosofía de este proyecto: lo que se busca a través de esta sanción es la forma, el medio para que todos los trabajadores del país tengan derecho a una vida digna que les permita mantener un nivel de vida adecuado a las perspectivas económicas del país.

De manera, pues, que no incurrimos en contradicción alguna; por el contrario, esas diversas zonas que se han de fijar han de estudiar el problema de los salarios, no de acuerdo con los niveles de vida sino con el costo de la vida, para igualar así el standard de vida de los trabajadores, situación que es completamente distinta de la que se pretende señalar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Mársico.

Sr. Mársico. — Nuestro bloque va a apoyar las reformas propiciadas por el dictamen suscripto por los señores diputados Luco, Rois, Salado y otros.

Entendemos que las razones económico-sociales que fundamentan la vigencia de un salario mínimo hacen necesario que ese salario tenga universalidad de aplicación y sea norma positiva en toda la extensión geográfica del país.

En consecuencia, sostenemos que las diferencias zonales que pudieran existir por razón del mayor costo de la vida o por estímulos imprescindibles para las regiones inhóspitas deben ser establecidas por encima del salario mínimo y nunca por debajo de ese nivel. Nosotros entendemos que el salario mínimo significa la retribución mínima, y por ende no puede haber una remuneración inferior a la mínima, salvo que se viole la ley.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Peña y Lillo.

Sr. Peña y Lillo. — Nuestro bloque va a mantener la posición que ya expuso al fundar en general su despacho, pero quiero advertir que cuando hablamos de salario vital mínimo y definimos en el artículo 2º cuáles son los factores o las expresiones de esa vida mínima —alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, educación propia y de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, etcétera—, no decimos nada que sea incompatible con la expresión cuantitativa, en pesos, por zona. Una cosa es esa vida mínima que procuramos asegurar al asalariado, y otra es la expresión cuantitativa, en pesos, de esas necesidades mínimas, que puede ser diferente en cada zona.

Quiero agregar algo a propósito de la supuesta incompatibilidad de las quitas zonales con la igualdad que prescribe el texto constitucional, señalando de paso que esto que prescribe el artículo 9º en consideración no es una quita

zonal. Con referencia a este tema y a lo expresado por el señor diputado Catalán, debo decir que es exacto que en la provincia de Mendoza se discutió la constitucionalidad o legitimidad de la quita zonal en los convenios colectivos; que el departamento provincial del trabajo, invocando esa cláusula constitucional de la igualdad en la retribución, estuvo en contra de la quita zonal; que la Corte de la provincia la declaró legítima, y que llevado el asunto por vía de recurso de queja por apelación denegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta declaró que la interpretación del superior tribunal de la provincia de Mendoza era constitucional, no incompatible con el texto de la Constitución. Es decir que se admitió que la quita zonal, en el caso de ser tal —y éste no es, reitero, el caso del artículo 9º—, es constitucional.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart.

Sr. Pérez Gallart. — No voy a reiterar argumentos que ya se han dado en la sesión del sábado último.

Escuché atentamente las palabras del señor diputado Alfonsín, y entendí entonces que, dentro de la economía de esta ley, se concebía un salario vital mínimo, determinado conforme a un igual nivel de vida para cada zona de la República en función de los costos que dicho nivel tuviera en cada una de ellas. Evidentemente, si ése fuera el criterio de la ley no podríamos hablar aquí de quitas zonales, ni mucho menos oponernos a ellas. Pero ocurre, señor presidente, que ése no es el sistema de la ley. Este está claramente determinado en el tercer párrafo del artículo 9º, cuando dice que se establecerán, así mismo, por resolución fundada, los porcentajes de aumento o reducción correspondientes a las distintas zonas de aplicación.

Sr. Alfonsín. — A los aprendices.

Sr. Pérez Gallart. — Después dice «a los aprendices» y demás.

O sea que una de las razones de aumento o disminución en el salario mínimo vital y móvil es la zona de aplicación. De modo que aquí se operará de la siguiente forma: se establecerá un salario vital, mínimo y móvil por el consejo, tal como hacemos ahora por razones de emergencia en el artículo 20, y luego se aplicarán porcentajes de reducción o de aumento en las distintas zonas. Estamos, pues, en las quitas zonales, porque no se trabajará con las estadísticas de costos de un mismo nivel de vida para cada zona sino que se actuará con el eterno criterio porteño, es decir, se fijará cuál es el costo de la vida en Buenos Aires y luego en forma más o menos arbitraria o acertada —lo que no entro a juzgar—. . .

Sr. Alfonsín. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Pérez Gallart. — Como no, señor diputado.

Sr. Alfonsín. — Quisiera preguntar al señor diputado Pérez Gallart en base a qué disposición

de la ley supone que ésa va a ser la forma de actuación.

Sr. Pérez Gallart. — Ya la he citado.

Sr. Alfonsín. — Pero de ninguna manera puede deducirse de lo que el señor diputado ha leído que ésa va a ser la forma de aplicación de la ley, sino al contrario.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pérez Gallart.

Sr. Pérez Gallart. — Lo deduzco porque, o esta disposición no quiere decir nada, o quiere decir lo que acabo de interpretar. Si por resolución fundada se deben establecer porcentajes de aumento o disminución, dichos porcentajes son con respecto a algo, y ese algo será el salario mínimo, vital y móvil de tipo general, que, por supuesto, se fijará con criterio porteño, como dije anteriormente.

Sr. Alfonsín. — ¿Por qué lo supone, señor diputado?

Sr. Pena. — Es una presunción del señor diputado.

Sr. Alfonsín. — Esperemos que los señores miembros del consejo interpreten el sentir de la Cámara, para que lo fijen con un sentido nacional.

Sr. Pérez Gallart. — Los señores miembros del Consejo interpretarán y aplicarán más fácilmente el texto de la ley que el sentir de la Cámara. Por eso nosotros queremos que esto surja de manera inequívoca de dicho texto legal, sin dejar librado a una interpretación que, si es ajustada a la ley, será la que surja del tercer párrafo del artículo 9º, y entonces ha de ocurrir que en lugar de elaborarse estadísticas para un mismo nivel de vida y determinar costos para cada región del país se establecerá un salario mínimo tipo y por distintas razones, arbitrarias o no, se harán reducciones que afectarán las zonas marginales de la República y mantendrán el nivel de vida elemental y sumergido a que ya me he referido en la sesión del sábado.

Sr. Presidente (Mor Roig) — Para una segunda intervención, tiene la palabra el señor diputado Salado, quien dispone de cinco minutos para hacerla.

Sr. Salado. — Únicamente deseo aclarar la interpretación que de mis palabras hizo el señor diputado Bobillo.

Sin pretender entrar en el análisis, o en términos, de hermenéutica constitucional, quiero aclarar que la pretensión de toda norma constitucional es asegurar los derechos y garantías que establece a la mayor cantidad de habitantes posible, es decir a todos los habitantes de la Nación.

Esa universalidad de la norma constitucional me ha permitido interpretar que el salario mínimo vital y móvil establecido en la Constitución debe también tener sentido universal.

Por otro lado, el texto del artículo 16 de la Carta Magna, en cuanto establece la igualdad ante la ley, en cuestión de salarios no está sujeto a categorías de ningún tipo, más aún si mencio-

namos los fines establecidos en el Preámbulo de la Constitución, en cuanto se refieren a promover el bienestar general. Sabemos que toda norma constitucional tiende a ejercitarse y a cumplirse para el mayor número de personas, asegurándoles sus derechos y garantías. Ese es el espíritu con que lo trata Sánchez Viamonte en su libro sobre el *Recurso de amparo*; ése es el sentido que le atribuye el constitucionalista europeo socialista Lasalle; ése es también el sentido de toda referencia político-social establecida en la Constitución, tal como lo dice Rippert. Y tales citas me eximen de mayores consideraciones.

Por otro lado, si el Estado establece estímulos a empleados y funcionarios para ir a zonas desfavorables del país, ¿por qué, por vía de la política social que estamos ejercitando mediante esta ley, vamos a mantener a los nacidos en esas zonas desfavorables en desigualdad con respecto a los empleados del Estado?

Entiendo, pues, aclarados los términos de la interpretación constitucional del artículo 14 bis en lo referente al salario mínimo, y también en cuanto a la norma practicada anteriormente por el Estado tendiente a estimular, como dice el señor diputado Bobillo, a las personas que van a ejercer funciones en zonas desfavorables del país.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Señor presidente: se han dado ya abundantísimos argumentos de orden moral, de validez constitucional y de concepción económica a favor de la eliminación de las quitas zonales; entre estos últimos, uno, que me parece fundamental, que concibe a la política salarial como un instrumento eficaz de política económica destinado a promover un desarrollo armónico y generalizado en todo el territorio nacional.

Como muy bien se ha señalado, la uniformidad en el salario puede ser, y en la práctica lo sería, un instrumento efficacísimo para frenar el éxodo hacia los grandes centros, en particular hacia la Capital Federal, y estimular, por el contrario, el arraigo en las zonas más pobres del país. Quiero agregar brevemente un argumento, creo todavía no dicho en este debate.

Nos recordaba el señor diputado Alfonsín que el artículo 2º define el concepto de salario vital mínimo como la remuneración que asegura en cada zona, al trabajador y a su familia, alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia, etcétera.

Yo me pregunto cómo se puede determinar el salario mínimo justo para cada una de las zonas del país, si se puede dar en la realidad, como se da, que el trabajador o su familia tengan que proveer a la educación de sus hijos en zonas alejadas de las que viven, es decir, sometidas a distintos niveles de vida; o gozar de vacaciones o tener asistencia sanitaria en zonas alejadas de las que vive, sometidas a distintos

niveles de vida. ¿Cómo puede determinarse en este caso, pregunto a los señores diputados de la primera minoría que han estado sosteniendo el criterio opuesto al de este bloque, el salario mínimo adecuado de esa zona, cuando no puede haber un criterio uniforme con respecto a los costos de lo que insume la educación, la asistencia sanitaria o las vacaciones, o si los trabajos se prestan en zonas distintas a aquellas en las que se vive.

Sr. Costantino. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Vedia. — Sí, señor diputado.

Sr. Costantino. — En las distintas zonas se va a establecer el salario mínimo, vital y móvil en la misma forma en que actualmente los gremios celebran los convenios colectivos en cada zona, porque el señor diputado no va a sostener que en toda la República no existen asociaciones gremiales que se ocupan de obtener en cada zona el convenio colectivo con la patronal y con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Sr. Vedia. — En primer lugar le contesto su pregunta al señor diputado expresando que la práctica va demostrando la eliminación de las quitas zonales en los convenios colectivos. Por otro lado, le reitero mi planteo y le pregunto concretamente cómo se contemplaría la situación de una familia que vive en la provincia de La Rioja y envía sus hijos a la ciudad de Buenos Aires por razones de educación o de asistencia sanitaria, o a cualquier otro centro de nivel de vida más elevado, y que se trasladen durante las vacaciones a Mar del Plata o a algún otro lugar. Pregunto, pues, cómo se determina el salario mínimo para esa familia en esa zona.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — No continúo, señor presidente, porque, a mi juicio, el argumento es tan irrefutable, y no ha sido contestado, que queda planteada una seria objeción a la posición que sostiene la primera minoría.

Sr. Pugliese. — Señor diputado: de acuerdo con la ley, ¿quién determina el salario mínimo?

Sr. Vedia. — El consejo, pero ¿cómo va a hacer para determinarlo?

Sr. Pugliese. — Tiene medios y elementos suficientes para determinarlo. El único organismo que no lo puede determinar es el Congreso.

Sr. Vedia. — ¿Cómo va a contemplar el consejo la situación de familias, como las del ejemplo que he dado, que mandan sus hijos a estudiar a otra localidad...?

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bobillo.

La Presidencia aclara al señor diputado que se trata de su segunda intervención en el debate, por lo que sólo dispone de cinco minutos.

Sr. Bobillo. — Deseo referirme a la interpretación que se ha dado del principio constitucional contenido en el artículo 16, referido a la igualdad ante la ley. Ese principio no puede ser interpretado con un criterio restrictivo, sino que la Corte Suprema de Justicia...

Sr. Caro. — Ha tolerado todas las desigualdades ante la ley.

Sr. Bobillo. — ...ha entendido que juega en igualdad de oportunidades. De lo contrario, la interpretación que ha dado el señor diputado Salado llevaría a declarar inconstitucionales las tasas progresivas previstas en la ley de impuesto a los réditos, porque en ese supuesto variaría la igualdad ante la ley...

Sr. Salado. — ¡Qué interpretación amplia que hace el señor diputado!

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Salado: sírvase respetar al orador en el uso de la palabra.

Sr. Salado. — Por lo menos que no tergiversar los términos de mi exposición.

Sr. Bobillo. — El señor diputado Salado y sus colegas del bloque demócrata cristiano parece que quieren ser dueños de la Cámara y no admitir las otras intervenciones al considerarse los depositarios de la verdad.

Sr. Salado. — Nosotros no nos consideramos dueños de la Cámara.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Salado: sírvase no interrumpir al orador ya que no está en el uso de la palabra.

Sr. Salado. — Señor presidente...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por segunda vez la Presidencia le solicita que no interrumpa. El señor diputado no está en el uso de la palabra.

Sr. Salado. — Nosotros no...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por tercera vez la Presidencia le advierte que no está en el uso de la palabra, y lo llama al orden.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Bobillo.

Sr. Bobillo. — Señor presidente: el salario mínimo, vital y móvil juega con la cláusula constitucional del artículo 14 bis cuando se aplica en igualdad de condiciones, teniendo presente el tiempo y el espacio en el que va a regir. La argumentación respecto del principio de la igualdad ante la ley debe entenderse en el sentido de que en el mismo lugar, en la misma zona, y en igualdad de condiciones, el salario debe ser igual para igual trabajo. Sólo en esta forma se está cumpliendo estrictamente con el sentido lógico y razonable de la disposición constitucional.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta por el señor diputado Carreira?

Sr. Pena. — No voy a repetir los muchos argumentos que se han dado en el curso de este debate. Reitero entonces los que anteriormente

formulara en oportunidad de la discusión del artículo 29.

Sr. Luco. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Pena. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — Deseo preguntarle al señor presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo si la comisión entiende, en definitiva, que la redacción actual de los artículos 99 y 29 posibilitan las quitas zonales sobre el salario mínimo que vamos a fijar, o sobre el que el consejo cada año determine. Este es el quid de la cuestión que discutimos. Si la redacción no posibilitara las quitas, creo que sería fácil acordar un texto más claro; si se posibilitaran las quitas, lamentablemente vamos a diferir.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Entiendo que el dictamen no sostiene la reproducción del sistema de las quitas zonales. Se establecerán, eso sí, distintos salarios mínimos que serán reducidos o aumentados porcentualmente en proporción al distinto costo de vida de cada región.

Sr. Catalán. — ¿Quiere decir que podrán ser disminuidos o aumentados de la cifra que se fija?

Sr. Pena. — Sí, señor diputado.

La fundamentación de esta disposición reside en que debe asegurar un idéntico nivel de vida a todos los trabajadores del país, es decir asegurarles iguales salarios reales. Pero es evidente que en las distintas regiones del país, para mantener idéntico nivel de vida, hay que afrontar costos distintos. En consecuencia, corresponde que jueguen los porcentajes de aumento o reducción. Lo contrario sería fijar salarios nominales iguales, lo que implicaría una manifiesta injusticia. Con estas palabras dejo fijada la posición de la comisión, que no acepta la modificación propuesta.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿La comisión acepta la propuesta del señor diputado Carreira?

Sr. Pena. — ¿A qué se refiere, señor presidente?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se refiere al caso de los trabajadores cuya capacidad laboral se encuentra manifiestamente disminuida.

Sr. Pena. — La comisión no acepta, y ya he dado las explicaciones durante la exposición del señor diputado Carreira.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — Me voy a permitir insistir, a pesar de conocerse la opinión oficial de la comisión, vertida por el señor diputado Pena, en lo tremendamente importante que es el problema que estamos discutiendo. Por esto llamo a recapacitar a la bancada de la primera minoría para que nos acompañe en nuestra posición, por lo menos, adoptando un sentido aclaratorio en los

términos expresados por el señor miembro informante.

Si el artículo 29, que hemos consagrado después de una larga discusión, no significa otra cosa, según se ha dicho aquí, que el salario vital mínimo, y la remuneración posibilite asegurar en cada zona al trabajador la alimentación adecuada, no podrá estar por debajo del salario que, en este caso concreto, establezca la Cámara y luego, del salario anual mínimo garantizado, diría yo, que cada año debe fijar el consejo. Estamos, evidentemente, de acuerdo.

Pero si por la vía de las disposiciones del artículo 99 puede haber reducciones en detrimento del ingreso de los trabajadores, tanto públicos como privados, en las provincias llamadas pobres, evidentemente estamos sancionando una injusticia.

Los argumentos principales que se han esgrimido son los constitucionales. Lamento no compartir la novedosa tesis y forma de interpretación de la Constitución del diputado Bobillo, porque cuando el artículo 14 bis de la Constitución dice, entre otras cosas, que «el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil...» se está refiriendo a toda la Nación, porque de lo contrario la misma Constitución haría la distinción correspondiente.

Interpretando en forma restrictiva esta disposición, con la misma validez podríamos decir que el descanso y las vacaciones pagas pueden tener diferentes formas según las provincias y de acuerdo con las zonas. Pero la Constitución cuando se refiere al descanso quiere asegurar mínimos igualitarios para todos. Con respecto a cualquiera de los otros tópicos imperativos que contiene la Constitución, la interpretación dada por el diputado Bobillo es inaceptable.

Sr. Bobillo. — ¿El señor diputado considera que cuando se establecen distintos términos de vacaciones pagas para los obreros de acuerdo con su antigüedad, se viola la igualdad ante la ley?

Sr. Luco. — Por supuesto que no; no estoy hablando de la igualdad ante la ley, sino del salario vital mínimo. La distinción que hace el señor diputado es respecto a las zonas, no respecto a la igualdad de tareas y antigüedad. Es un problema completamente distinto.

Entre los argumentos de fondo que tienen alguna validez están los económicos, y aunque pueden comprenderse en el sentido de que hay zonas en que esta disposición va a provocar un impacto y un deterioro en alguna medida, la solución para ese problema estará en que nosotros procuremos la promoción de esas zonas rápidamente, con leyes de fomento industrial, económico, crediticio, etcétera. Pero nunca debemos sancionar una injusticia, como sería la de disminuir los magros salarios de los obre-

ros, especialmente en las zonas empobrecidas del interior.

Repito que si sancionamos este artículo sin una aclaración debida y con el texto propuesto, la ley, que según parece se va a sancionar, violaría la Constitución, a la cual son tan apegados algunos legisladores de la Cámara, pero que cuando es necesario se desplaza a un costado por intereses políticos. Y violamos, burlamos y evadimos la petición concreta del pueblo y nuestro propio imperativo de hacer una ley de salario vital, mínimo y móvil, porque habríamos sancionado un salario diferenciado, que no es la misma cosa en derecho laboral.

Por otra parte, el salario que en este momento establece la Cámara, y que a partir del año que viene establecerá el Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil, es un salario de sacrificio. De ninguna manera compensa las necesidades reales de los trabajadores. Y, sobre todo, si posibilitamos la reducción zonal habremos cometido una injusticia y logrado un impacto psicológico, como señalaba el diputado Martínez Raymonda, dejando de lado a los trabajadores casualmente más angustiados por los problemas económicos, como son los de las provincias llamadas pobres.

Antes de la votación quiero llamar a la reflexión al bloque de la primera minoría, porque, aunque creo tiene ya posición tomada, el problema merece mayor atención. Advierto, además, que si la ley sale con esta disposición, tal cual figura en el dictamen de la mayoría, se producirá un semillero de pleitos en todo el país, porque se la acusará de inconstitucionalidad y de violar los principios a que he aludido, con lo cual habremos contribuido a agravar los grandes problemas que tiene el país y, especialmente, sus trabajadores.

Por último, quiero hacer notar que en el examen de los problemas que se han venido discutiendo en la Cámara el bloque oficialista tiene siempre la misma reticencia. Discutimos la ley nacional de abastecimiento y estuvimos de acuerdo en el fondo del problema, que planteaba la necesidad de acudir con energía a disminuir el costo de la vida. Pero sus miembros se quedan a mitad de camino. No sancionaron la facultad de congelación de precios que otros bloques solicitaban, y lo mismo ocurre en este momento. La necesidad nos ha unido para legislar sobre un salario vital mínimo, pero cuando llegamos a las proposiciones quedamos a mitad de camino.

Yo noto en esto una evidente reticencia o una sobrestimación de los problemas políticos que preocupan al gobierno. Saben muy bien, por la actuación conjunta de todos los bloques, que para las grandes soluciones van a contar con el apoyo unánime de todos los sectores, pero para eso es necesario que dejen de lado la reticencia demostrada y que avancemos juntos.

Sr. León. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado León.

Sr. León. — Con el mismo ánimo constructivo le quiero hacer notar al señor diputado Luco que no existe tal reticencia ni cambio de línea. Para demostrarlo traigo como ejemplo un hecho que el señor diputado conoce. El gobierno justicialista del Chaco tuvo una actitud totalmente distinta a lo que argumenta el señor diputado Luco en Buenos Aires.

No creemos que se trate de reticencia ni de falta de voluntad de construcción social.

Sr. Luco. — Yo no tengo la obligación de estar de acuerdo con el señor gobernador del Chaco.

Sr. León. — Sólo le quería hacer una aclaración con respecto a su afirmación de que había reticencia. La política no es una ortodoxia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Nuevamente tengo que expresar mi extrañeza con respecto a la posición que ahora adoptan en el recinto algunos sectores de la Cámara. Justamente el sector justicialista es el que en alguna oportunidad hizo gran alabanza del decreto 33.302, después convertido en ley de la Nación. En ese decreto se establecían expresamente las diferencias zonales. Justamente en el artículo 18 se dice: «Salario vital mínimo es la remuneración del trabajo que permita asegurar en cada zona al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte» etcétera. Y luego en el artículo 22, cuando habla de los salarios básicos, dice: «Se establecerá una escala de salarios básicos con arreglo a las siguientes condiciones: naturaleza y riesgo del trabajo, necesidad de otorgar al empleado y obrero adulto un nivel de vida adecuado», etcétera, expresando al final que en ningún caso el salario básico podrá ser inferior al salario vital fijado para la respectiva zona.

Vale decir que en ese decreto, que es tan precursor y que se dictó justamente unos días antes de la elección, lógicamente se preveía la posibilidad de que en nuestro país hubiera distintas condiciones de vida, y por tal causa ocasión de fijar un salario vital. Por eso se llama vital.

Si en esa oportunidad se aceptó por parte de ese sector que hubiera salario zonal, no vemos por qué en este momento, en que desgraciadamente no han cambiado las condiciones de vida en algunas zonas del país, no vamos a poder establecer distintas condiciones en cuanto al pago del salario que se va a abonar en las mismas.

Por otra parte, creo, como ya lo señalé en la sesión anterior, que estas diferencias zonales no afectan en absoluto a la Constitución, pues ella habla de igual remuneración para igual trabajo, pero en cada uno de los lugares y en las mismas condiciones, como muy bien lo señaló el señor diputado Bobillo.

Además, ésa es una interpretación constitucional de los señores diputados, pero no es la de otros sectores, especialmente de quienes votamos ese artículo de la Constitución. Cuando lo votamos lo hicimos con la convicción absoluta de que ésta era la interpretación, porque expresamente se dijo en esa oportunidad que las condiciones de vida —y me remito a las exposiciones que se hicieran entonces— eran distintas en los diversos lugares del país, y que si nosotros damos el mismo salario en un lugar determinado, le creamos posiblemente condiciones perjudiciales, porque matamos la industria y no le damos al obrero las posibilidades de trabajo que debe tener en cada lugar. Con una diferenciación de esta naturaleza se crean mejores condiciones de vida en lugares donde necesitamos fomentar el desarrollo de industrias que, en otras circunstancias, no se podrían desarrollar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Con la mejor de las intenciones y el más constructivo de los propósitos, la Presidencia señala que a cinco horas de iniciada esta reunión se han aprobado tan sólo dos artículos, y que sobre el artículo en consideración, que reedita un debate ya producido en la Honorable Cámara, hasta este momento han hablado veintidós señores diputados.

Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — El no haberme concedido una interrupción el señor diputado Jofré me obliga a usar este camino para manifestar mi pensamiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La intervención del señor diputado Caro es la segunda sobre este artículo. Le corresponden cinco minutos.

Sr. Caro. — Seré muy breve.

El señor diputado Jofré nos estuvo enrostrando a través de todo el debate una cierta especie de «mala memoria» —él la calificó así—, porque no recordábamos lo que ocurrió con el decreto de estatuto del peón. Lo recordamos perfectamente bien, señor presidente, y a la par de recordarlo también tenemos que hacer una afirmación: para nosotros el derecho no es estático; la vida social se transforma, las costumbres cambian, y el peronismo ha tendido, por la vía de reformas progresivas, a llegar al perfeccionamiento social.

También ha dicho el señor diputado Jofré que este decreto fue dictado en vísperas de una elección; pero omite decir que ello tuvo lugar entre 1946 y la época en que el señor diputado dejó de ser ministro del gobierno de la intervención federal que surgió con motivo de la revolución del 4 de junio, que destituyó al presidente Castillo.

Algunos padecemos de «mala memoria»; pero otros padecen de «amnesias lacunaris» profundas, que les hacen olvidar ciertos episodios de la vida política del país.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 9º del dictamen.

—Resulta afirmativa.

4

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Cornejo Linares. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Cornejo Linares.

Sr. Cornejo Linares. — Para recordar a la Presidencia que, en oportunidad de plantear hoy una cuestión de privilegio, no se puso a votación en virtud de que no había número. Al mismo tiempo, quiero expresar que al dar lectura al artículo que motivó la cuestión de privilegio omití pedir su inserción en el Diario de Sesiones, cosa que hago ahora.

Oportunamente había solicitado que esa cuestión de privilegio pasara a comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar si la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Cornejo Linares pasa a comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Se va a votar el pedido de inserción formulado por el señor diputado Cornejo Linares.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se hará la inserción solicitada (1).

5

SALARIO VITAL, MINIMO Y MOVIL

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la consideración del proyecto de ley sobre salario vital, mínimo y móvil.

En consideración el artículo 10. Si no se formulan objeciones, se tendrá por aprobado.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 11.

Por Secretaría se dará cuenta de las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario (Oliver). — La comisión propone sustituir el texto del artículo 11 que figura en el dictamen impreso, por el siguiente: «El 30 por ciento del monto del salario vital mínimo para la familia tipo estará integrado por las asignaciones familiares. El monto de la asignación familiar por cada persona que genere el derecho a percibirla será el equivalente al 10 por ciento del que se fije como salario vital mínimo de acuerdo con el artículo 9º. Las asignaciones familiares no estarán sujetas al pago de aportes jubilatorios ni del impuesto a los réditos.»

El artículo 11 ha sido también observado por el señor diputado Solari, que solicita su supresión.

(1) Véase el texto de la inserción en el Apéndice.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: a este artículo se ha incorporado el párrafo que establece que el monto de la asignación familiar por cada persona que genere el derecho a percibirla será el equivalente al 10 por ciento del que se fije como salario vital mínimo de acuerdo con el artículo 99.

La otra modificación, que corresponde al párrafo tercero, es simplemente de redacción, y ello a raíz del que se intercala y acabo de citar.

Creemos que de esta manera, accediendo a una sugerencia de algunos sectores de la Cámara, mejoramos la redacción del proyecto, por cuanto queda claro que todas las asignaciones familiares serán fijadas o establecidas en un equivalente al 10 por ciento del salario mínimo vital para todos los trabajadores, cualquiera sea el sueldo que perciban y cualquiera sea el número de hijos.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Miguel P. Del Pero.

Sr. Presidente (Del Pero). — Se va a votar el artículo 11 con las modificaciones propuestas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Del Pero). — En consideración el artículo 12.

Como se proponen modificaciones, se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (Oliver). — La comisión propone sustituir el texto del artículo 12 por el siguiente:

Las asignaciones familiares se abonarán a los trabajadores que presten servicios en la actividad privada, conforme al régimen establecido por los decretos leyes 7.913/57, 7.914/57, sus modificatorios, y la ley 15.223. Quedan incorporadas al sistema de los textos legales citados todas las actividades que tengan establecidos regímenes de salario familiar sin compensación propia.

La Caja de subsidios familiares para empleados de comercio de la República Argentina tendrá a su cargo la aplicación del régimen de todas las actividades civiles, comerciales y rurales.

Las asignaciones familiares que corresponda percibir a los agentes de la administración central, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado se abonarán directamente, efectuándose las provisiones necesarias de los respectivos presupuestos.

Las otras modificaciones propuestas por el dictamen en disidencia fueron incorporadas al artículo 11, por lo cual quedan sin efecto en el 12.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: sintetizando, diré que en la nueva redacción del artículo 12

se han suprimido los términos «de los fondos compensadores», por cuanto al referirnos al régimen establecido por los decretos leyes 7.913 y 7.914, de 1957, ellos van implícitos y no necesitan, por tanto, ser incorporados al dictamen.

Se suprime también el párrafo que en el dictamen original dice así: «Facúltase a los directores de las cajas creadas por las citadas normas legales a elevar el aporte patronal, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor.» Dichas cajas ya están facultadas a través de los citados decretos leyes y de la ley 15.223, por lo que es innecesario incorporar aquel párrafo a las disposiciones de esta ley.

En reemplazo de dicho párrafo se establece que «quedan incorporadas al sistema de los textos legales citados todas las actividades que tengan establecidos regímenes de salario familiar sin compensación propia», a efectos de evitar posibles discriminaciones entre trabajadores con cargas de familia y trabajadores sin dichas cargas, que en esos regímenes tienen los beneficios del salario familiar.

Sr. Presidente (Del Pero). — Se va a votar el artículo 12 con la nueva redacción leída por Secretaría.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Del Pero). — En consideración el artículo 13.

Por Secretaría se dará cuenta de las modificaciones sugeridas a este artículo.

Sr. Secretario (Oliver). — El señor diputado Juan Antonio Solari ha propuesto también la supresión de este artículo. No hay otras observaciones.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Fabrizio.

Sr. Fabrizio. — Quiero aclarar con respecto al artículo que consideramos, así como con relación a los anteriores, que como la Honorable Cámara ha sancionado el artículo 99, que instituye el salario vital mínimo con la asignación familiar, retiramos las objeciones hechas en la consideración en general, por carecer de objeto a esta altura de la votación del articulado del dictamen.

Sr. Presidente (Del Pero). — Se va a votar el artículo 13 del dictamen de comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Del Pero). — En consideración el artículo 14.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Del Pero). — En consideración el artículo 15.

Tiene la palabra el señor diputado Oreja.

Sr. Oreja. — Deseo exponer muy brevemente una observación relacionada con este artículo y solicitar de la comisión quiera tener la deferencia de informarme si ha tomado en cuenta

la circunstancia de que al consignar en esta cláusula que los gastos del consejo serán atendidos con recursos previstos en el artículo 48 del decreto ley 33.302/45, ratificado por la ley 12.921, se viene en realidad a sancionar el desplazamiento de la fuente más importante y casi única de recursos que en la actualidad tiene un importante organismo como es la Dirección Nacional de Turismo.

Es sabido que con posterioridad al decreto ley 33.302 y a la ley de ratificación, una nueva ley, la 13.992, de septiembre de 1950, transfirió esos fondos a la Fundación Eva Perón, para el cumplimiento de los fines sociales enumerados en aquel decreto. Posteriormente por la ley 14.574, sancionada en 1958, que creó y estructuró la Dirección Nacional de Turismo, esos recursos fueron destinados al fondo nacional de turismo. En efecto, el inciso e) del artículo 15 determina que el 3 por ciento a que se refieren los artículos 4º y 5º de la ley 13.992 se aplicará a la formación de ese fondo.

Por la información que tengo en mi poder, entiendo que este recurso produce alrededor de 300 millones de pesos anuales, fondos con los cuales la Dirección Nacional de Turismo subviene así mismo a la realización de obras de promoción turística en diferentes provincias.

Por la ley 14.789, que modificó en su oportunidad el régimen impositivo, también se desplazaron recursos que correspondían a la Dirección Nacional de Turismo, a lo que ahora se agrega esta nueva quita. Deseo aclarar que, por supuesto, al hacer la crítica de esta disposición no está en mi ánimo, de ninguna manera, atacar el destino que se da a estos fondos. Simplemente, quiero señalar la necesidad de que al legislar adoptemos los recaudos imprescindibles para que un organismo importante y que cumple una función social destacada no quede inhabilitado o desvalido para el cumplimiento de sus fines específicos.

Esta es la finalidad de mi observación, y ruego a la comisión quiera informarme si tiene a este respecto un criterio formado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — De la lectura del artículo 15, tal como ha sido redactado en el despacho de la comisión, surge que se ha contemplado la situación a que alude el señor diputado. Establece que «los gastos del consejo serán atendidos con dos unidades del aporte previsto por el artículo 48 del decreto ley 33.302/45 —ley 12.921—, en la proporción establecida en el inciso e) del artículo 8º».

Es sabido que el artículo 43 del decreto ley 33.302 asigna como recurso del Instituto Nacional de las Remuneraciones el 5 por ciento de lo que se pague en concepto de aguinaldo. En consecuencia, el 3 por ciento ya está destinado por la ley 14.574, es decir tres unidades, a afrontar los gastos del presupuesto de la Dirección Nacional de Turismo; las otras dos unidades,

que no tienen destino, se dedican a afrontar los gastos del presupuesto del Consejo Nacional del Salario Vital, Mínimo y Móvil. En consecuencia, no se despoja al primero de los recursos que tiene en la actualidad para afrontar su presupuesto.

Sr. Oreja. — En ese caso, existe evidentemente una modificación con respecto al artículo tal cual venía en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Sr. Pena. — He leído el dictamen de la comisión.

Sr. Presidente (Del Pero). — Se va a votar el artículo 15, como se ha leído.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Del Pero). — En consideración el artículo 16.

Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — En el artículo 16 se establecen dos exclusiones al régimen de la ley: una referida al personal del servicio doméstico y la otra a los agentes de las administraciones provinciales y municipales.

Como en los fundamentos escritos que acompañan al dictamen de la comisión y en los verbales que dio el señor miembro informante no se dan las razones que motivan las exclusiones, ruego al señor diputado Pena me diga las causales que la comisión ha tenido para hacerlas.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Estas exclusiones, que se vienen repitiendo no solamente en el decreto 33.302 sino en todos o casi todos los intentos de legislar sobre la materia, tienen una explicación bastante clara.

En cuanto a los agentes de las administraciones provinciales y municipales, por razones de tipo institucional que no pueden escapar al señor diputado en su condición de abogado. No podríamos nosotros establecer un salario vital mínimo y móvil para los agentes de esas administraciones en virtud de que el nuestro es un régimen federal.

En cuanto al servicio doméstico, conocemos las características muy especiales de ese trabajo y, por supuesto, no nos hemos animado en esta oportunidad a incorporarlo a un sistema de salario vital mínimo. Pero es evidente que el Poder Ejecutivo ha de tomar las medidas necesarias, como lo establece un artículo que votaremos más adelante, a efectos de que se incorporen todos los trabajadores del país a este sistema. Provisionalmente quedan excluidos, en razón de la tipicidad de sus servicios, pero eso no significa —ni ha sido la intención de la comisión— que esta exclusión sea definitiva.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Las razones dadas por el señor diputado Pena son, aunque parezca paradójico, suficientes para terminar con las dos exclusiones. Las dos son realmente irritantes,

pero especialmente la primera, que comprende al personal del servicio doméstico.

La tradición ha pesado en el ánimo de la comisión, según nos lo acaba de explicar el señor diputado Pena, de la misma manera como viene sucediendo desde hace mucho tiempo en otras leyes laborales, para excluir a los trabajadores domésticos del beneficio del salario vital mínimo y móvil. Es verdad lo dicho por el señor diputado Pena de que en muchas leyes y decretos, y en algunas otras disposiciones, se ha dejado fuera de los beneficios de la legislación laboral al personal doméstico. Estoy seguro que esto no será aceptado por una Cámara que ha puesto en evidencia, en más de una ocasión, sensibilidad humana.

En esa tradición hay una gran injusticia, un verdadero menosprecio moral por un sector de trabajadores al que todavía se considera como si fuesen siervos de la época feudal. Eso no lo podemos tolerar. Los trabajadores domésticos son trabajadores como todos los demás de la República, con el agravante de que para ellos no hay jornada máxima de labor y no gozan de otros beneficios de la legislación laboral. Viven en condiciones deplorables, máxime en estos años en que una elevada proporción del personal doméstico está constituido por nuestras mujeres y hombres del interior que se trasladan a las grandes ciudades en busca de mejores condiciones de vida, en lo material a las de sus provincias de origen, y para que se les abran posibilidades de acceso al mundo de la cultura.

No alcanzo a comprender la exclusión y confieso que me rebelo contra ella. Pido que la Cámara reconsidere el artículo para incluir dentro del sistema de la ley al personal doméstico. La mujer y el hombre que trabajan en casas de familia cumplen una tarea socialmente tan útil como la de los hombres y mujeres ocupados en fábricas, talleres, oficinas o en el campo. No hay ninguna distinción.

Si no hay ninguna distinción en orden a la importancia de su labor, ¿por qué mentadas razones de tradición se los deja al margen del beneficio del salario vital mínimo y móvil?

En cuanto al inciso b) del artículo 16, diré que si al salario vital mínimo y móvil lo sancionamos por ley en virtud de una disposición constitucional que alcanza a todos los trabajadores argentinos, no comprendo los motivos por los cuales se regatean los beneficios de la ley a los agentes de las administraciones provinciales y municipales y de las reparticiones autárquicas. Es una desigualdad inaceptable que debe subsanarse.

En resumen, pido que el artículo vuelva a comisión para que un nuevo dictamen deje sin efecto las exclusiones que establecen los incisos a) y b) de dicho artículo con respecto al personal doméstico y a los empleados y obreros de las administraciones provinciales y municipales, colocándolos al margen de los beneficios

de una ley que es nacional y que, por ello, debe ser de aplicación en todo el país, tanto en la Capital como en el interior de la República.

Sr. Presidente (Del Pero).— Tiene la palabra el señor diputado Salado.

Sr. Salado.— Quiero referirme brevemente a la posición de nuestro bloque con respecto al artículo que estamos tratando.

Coincidimos con el señor diputado Muñiz en que debe suprimirse esa excepción irritante con respecto al personal del servicio doméstico. Baste para ello la sola consideración, porque las demás son obvias, de que una discriminación legal importa en este caso una discriminación de tipo moral y social que afecta la dignidad humana.

En cuanto al resto del artículo, creemos que es redundante, porque es bien sabido que la ley nacional no puede legislar la materia de su competencia en las jurisdicciones provinciales y municipales, so pena de invadirlas. Los principios del derecho constitucional y administrativo son suficientemente ilustrativos como para insistir en ellos. Nuestro bloque estima, si, que deben mantenerse en pie todas las gestiones que el «Poder Ejecutivo nacional debe hacer para que las provincias y las municipalidades se acogan a los beneficios de esta ley y establezcan para sus empleados y obreros un régimen similar».

Sr. Presidente (Del Pero).— Tiene la palabra el señor diputado Cornejo Linares.

Sr. Cornejo Linares.— Cedo mi turno a mi colega el señor diputado Lozano.

Sr. Lozano.— El bloque justicialista adhiere al primer inciso en forma terminante por la inclusión del servicio doméstico. No encontramos argumento que justifique la exclusión del personal del servicio doméstico, conforme con los argumentos dados por el presidente de la comisión, quien en la última parte de su exposición llegó a reconocer que posteriormente podría ser revisado.

No puede alegarse que esas personas tienen una remuneración justa con el salario que se les pueda asignar. Si bien es cierto que muchas veces se les da vivienda, hay que tener en cuenta que ese personal no cumple jornadas de ocho o nueve horas como otros gremios, sino que su jornada se extiende a todas las horas en que está en la casa de la familia para la que trabaja.

En cuanto al segundo inciso consideramos que, de acuerdo con las cláusulas constitucionales, una ley nacional no puede avanzar sobre las jurisdicciones provinciales. Nuestro bloque tiene opinión formada y propondrá un artículo nuevo que oportunamente tendrá que discutirse. Pretendemos sí que las provincias tengan la asistencia financiera de la Nación a los efectos de la aplicación de este salario mínimo vital y móvil.

Tal es, brevemente expuesta, la posición del bloque justicialista. En el primer caso estamos

en un todo de acuerdo con los argumentos del señor diputado Muñiz.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Maldonado.

Sr. Maldonado. — Señor presidente: como miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo he firmado el dictamen que se está discutiendo.

En lo que se refiere a las razones tenidas en cuenta para excluir al personal del servicio doméstico de los beneficios de esta ley debo señalar que no son otros que la circunstancia de que el servicio doméstico en la República es de resorte exclusivamente municipal.

Comparto en un todo los conceptos que acabamos de escuchar de parte del señor diputado Muñiz, porque creo que todas las personas que trabajan por cuenta de terceros, personal doméstico o no, deben ser amparadas por el derecho laboral. No obstante ello, como en el artículo 1.624 de nuestro Código Civil se establece que todo lo relacionado con personas del servicio doméstico debe regirse por ordenanzas municipales, se los ha excluido de la ley que tratamos. Es el mismo criterio que llevó a excluir del régimen de la presente ley, de acuerdo con el inciso b) del artículo 16, a los agentes de las administraciones provinciales o municipales, porque esto corresponde a una jurisdicción distinta sobre la cual no podemos legislar.

Es verdad que el Código Civil es una ley del Congreso y que por otra ley puede ser modificado. Esto lo sabemos todos, pero siendo el código un ordenamiento jurídico de naturaleza muy particular no podemos en esta circunstancia modificarlo en una forma inesperada.

Para concluir he de decir que hace varios años, siendo concejal de la Municipalidad de Córdoba, presenté un proyecto de ordenanza por el cual se mejoraba la situación laboral del personal del servicio doméstico. Esto demuestra que lo que se acaba de expresar aquí es una cuestión que ya había reflexionado en más de una ocasión.

Por los motivos expresados la comisión excluyó al personal del servicio doméstico del régimen de esta ley, no obstante contar estas personas con nuestra más absoluta simpatía y solidaridad.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Peña y Lillo.

Sr. Peña y Lillo. — Señor presidente: la comisión ha tenido en cuenta al excluir de este régimen a las remuneraciones del personal de servicio doméstico, que se trata de una situación, perfectamente tipificada no sólo por las normas del Código Civil, que se han mencionado, sino también por el decreto 326 del año 1956, que establece un régimen especial para la contratación de este personal, para el preaviso, para el despido, para la desocupación de la habitación, para la retribución y hasta para el régimen jubilatorio.

Todo esto está enmarcado por una razón fundamental, consistente en que el servidor domés-

tico no presta un servicio de beneficio económico directo a su empleador. Siempre se lo ha considerado al margen del lucro. Por esta razón de ser incluido en esta ley habría que entrar en una estimación de los valores correspondientes a comida, habitación, etcétera, que llevaría a un verdadero relevamiento inmobiliario en el país, porque no es lo mismo estimar una habitación en un departamento ubicado frente al Congreso, que una habitación situada en la ciudad de Jujuy.

Sr. Carreira. — ¿Qué problema hay, señor diputado?

Sr. Peña y Lillo. — Por esas razones es que la comisión ha excluido al personal de servicio doméstico.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Catalán.

Sr. Catalán. — Como el tópico al cual iba a hacer referencia ha sido analizado por un colega de mi sector, le cedo el uso de la palabra al señor diputado Cornejo Linares, que la había pedido anteriormente.

Sr. Presidente (Del Pero). — En esta forma el señor diputado Catalán queda excluido de la lista de oradores.

Tiene la palabra el señor diputado Cornejo Linares.

Sr. Cornejo Linares. — Quería contestar las argumentaciones de los dos señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra.

Nadie ignora que el Código Civil establece que es régimen municipal todo lo relativo al servicio doméstico, pero nadie ignora tampoco que el Código Civil es una ley bastante anticuada en muchos aspectos. De ahí que desde hace varios años se viene insistiendo en la necesidad de su reforma y existen varios proyectos meritorios en ese sentido. De manera que esa disposición del Código Civil es perfectamente derogable y puede ser derogada por una nueva ley.

En lo que respecta a que el servicio doméstico no debe ser considerado porque no importa un valor económico, yo creo que esta ley de salario vital mínimo y móvil tiene ante todo que considerar el aspecto humano, no los aspectos económicos. El hombre es ante todo un portador de valores eternos y no un hacedor de bienes. De allí que nosotros legislemos para el hombre con ese sentido cristiano.

Considero que la comisión en realidad ha pecado un poco por apegarse a la tradición, y por estas consideraciones hasta tengo la seguridad que merced a las argumentaciones que se han hecho, la comisión va a contemplar esta reforma del dictamen en que estamos insistiendo, porque tiene un profundo sentido de justicia. No es posible excluir de ese profundo sentido de justicia a los integrantes del servicio doméstico. Son hombres, son argentinos, son humanos como nosotros. En consecuencia, deben estar comprendidos en esta ley.

No tengamos temor a las amas de casa. Creo que las razones que fundamentan esta reforma las van a obligar a perdonarnos por esta vez. Por otra parte, el salario mínimo que se fija, que es de 9.800 pesos, dada la quita del 30 por ciento por salario familiar, no es nada excesivo. Al contrario, es limitadísimo. Y si se considera que en su determinación debe valorarse lo que recibe por habitación y alimentos, en realidad si hay algún aumento para el servicio doméstico va a ser mínimo.

Sr. Presidente (Del Pero). -- Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart.

Sr. Pérez Gallart. -- Cuando fui electo diputado por la provincia de Santa Cruz sabía perfectamente que me iba a encontrar aquí con algo que se llama el centralismo porteño. Pero nunca supuse que él llegara a un grado tal como para oír lo que he oído esta tarde: un señor diputado que propone que desde aquí, del Congreso de la Nación, fijemos la remuneración que cada provincia debe pagar a los agentes provinciales.

Evidentemente, se ha confundido cuál es la organización constitucional de la República Argentina. Yo sé que en algún tiempo, y no sé si todavía ahora, uno de los puntos del programa del Partido Socialista era establecer la organización unitaria. Pero ese punto y ese programa no se han cumplido. Todavía estamos en un Estado federal, y dentro de nuestra organización constitucional las normas administrativas de cada uno de los estados que la integran se reglan conforme a su Constitución y sus leyes.

Nosotros, que no sólo defendemos el federalismo de la Constitución sino que queremos acentuarlo con el desarrollo económico de las provincias periféricas, para que la vida autónoma se acentúe en todos sus aspectos y todas sus instancias, no podemos menos que oponernos escandalizados a la supresión del inciso b) que se ha propiciado.

En cuanto a la supresión del inciso a), no me voy a referir a ella en esta exposición, por cuanto lo va a hacer otro colega miembro de este bloque.

Sr. Presidente (Del Pero). -- Tiene la palabra el señor diputado Carreira.

Sr. Carreira. -- Señor presidente: a las argumentaciones que se han hecho para la exclusión del personal del servicio doméstico, que ha rebatido mi compañero de sector, el señor diputado Muñiz, deseo agregar algunas otras, recogiendo, en primer término, la defensa de la cláusula que ha hecho el señor miembro informante de la comisión redactora del proyecto de mayoría, y algunas apreciaciones que hizo el señor diputado Peña y Lillo, así como las del señor diputado Maldonado.

No tiene nada que ver que en el Código Civil esté reservado a los municipios el tratamiento de los contratos de conchabo o de servicio doméstico. El argumento justamente nos favorece

a los que estamos en la postura distinta, porque el Código Civil es susceptible de ser reformado por cualquier ley nacional como ésta que estamos considerando. De manera que desde el punto de vista de la entidad jurídica que sostiene el señor diputado Maldonado, su argumentación no resiste el análisis, cae por su propio peso.

Los argumentos que se han hecho por parte del señor diputado Peña y Lillo tampoco son convincentes. En primer término porque él no ha negado la idea de justicia que alienta la proposición del señor diputado Muñiz; ha argumentado solamente las dificultades que sobrevendrían en los consejos salariales para determinar las compensaciones que se vinculan con el ámbito de ocupación, que se asignaría a ese tipo de personal en las casas, y algunos otros ítem que pueden ir comprendidos allí. Son cuestiones de hecho perfectamente superables.

Es muy natural que el consejo salarial pueda hacer un cálculo distinto en el caso de las provincias con respecto a la Capital Federal. He querido desentrañar un poco más el asunto para ver si tenía justificación de otra naturaleza fuera de la tradición.

¿Qué se teme? ¿Que la eliminación de este inciso pueda traer una desocupación en el sector del servicio doméstico?

Sr. Vaccarezza. -- Con toda seguridad.

Sr. Carreira. -- Sería un argumento a considerar, y lo voy a hacer por si ello trajera una gran repercusión económica en los presupuestos de las familias que en este momento tienen contratado servicio doméstico.

He hecho algunos números partiendo de la base del salario mínimo que, si progresara —ya veo que progresa—, quedaría fijado en 9.800 pesos, pero en cuanto le comiencen a hacer las reducciones correspondientes a habitación, comida, etcétera, bajará a una suma que no va a ir más allá de los 6.500 pesos, y por ese lado no veo tampoco un gran inconveniente de carácter económico ni la posibilidad de que pueda haber despidos.

A las familias que en este momento tienen contratado servicio doméstico no les va a costar un sacrificio muy grande poder mantenerlo, y si les costara, que se aguanten o que prescindan del servicio. Pero no creo que vayan a prescindir de él, con lo cual refuto la preocupación que tienen algunos señores diputados de que se vaya a provocar desocupación.

En lo que atañe al inciso b), que se refiere a los agentes de las administraciones provinciales y municipales, tampoco es fuerte la tesis de tipo constitucionalista que aquí se quiere sostener. Otras leyes laborales, como la de jornada de ocho horas, la de descanso dominical, en su oportunidad tuvieron consecuencias patrimoniales, porque lógicamente, al reducirse el régimen horario, obligaba a tomar mayor personal a los municipios y a las provincias. De suerte que por esa vía vendría a incursionar en los resor-

tes que, aparentemente, tendrían reservados los municipios y las provincias, de darse sus propios presupuestos. Sin embargo, se sancionó la ley de ocho horas y se impuso ese régimen dentro de la concepción federalista de la Constitución.

No son muy valederos los argumentos que se dan. Hay un exceso de celo por parte de los señores diputados que defienden un federalismo a ultranza, que es más tradición que resorte constitucional.

Sr. Ortiz Hernández. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Carreira. — Con mucho gusto.

Sr. Ortiz Hernández. — Rogaría al señor diputado me dijera cuál sería la forma en que los gobiernos provinciales o municipales podrían pagar el salario que establece en su proposición.

Si se establece ese salario mínimo para los obreros provinciales y municipales, tendríamos que modificar los presupuestos respectivos, con lo que interferiríamos en el ámbito del federalismo.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Carreira.

Sr. Carreira. — Contestaré al señor diputado procurando ser lo más claro posible.

He pensado en esas dificultades, porque es una cuestión de lógica considerar lo que sobrevendría en los presupuestos provinciales y municipales a raíz de esta disposición que vamos a sancionar. Comprendemos que se van a encontrar con dificultades; pero se trata de dificultades económicas y no de dificultades jurídicas, que son las que aquí se han traído.

Las dificultades económicas las resolveremos por medio de otros resortes. Es indudable que si el poder central da una ley de esta naturaleza, tiene que recurrir a los arbitrios necesarios para contemplar esas dificultades presupuestarias; tiene que arbitrar los recursos para lograr los equilibrios necesarios, recursos que son bastante más abundantes de lo que puede creerse, partiendo del impuesto al mayor valor de la tierra libre de mejoras que ya hemos considerado en distintas oportunidades, y que parece ha quedado a la zaga de toda concepción tributaria argentina, pero que habrá que tener en cuenta.

Sr. Muñiz. — Si nos animamos a sancionar el impuesto al mayor valor, con eso sólo cubrimos el déficit.

Sr. Carreira. — Ha quedado clarísimo que las dificultades no son de orden jurídico, sino de orden patrimonial. En cuanto a estas últimas, aquí estamos para resolverlas, porque justamente podemos sancionar alguna cláusula adicional en las disposiciones transitorias para que el Poder Ejecutivo vaya en auxilio de las provincias y municipalidades.

Cuando prestamos conformidad a la reforma de los artículos 27 y 49 de la carta orgánica del Banco Central pensamos precisamente que el Poder Ejecutivo se iba a encontrar en circuns-

tancias muy excepcionales, que le obligarían a una gran disponibilidad de numerario a través de la Tesorería. Ahí va a tener el poder central uno de los recursos para ir en auxilio de las provincias y de las municipalidades hasta que éstas sancionen nuevos presupuestos que arbitren, dentro del régimen impositivo, los recursos necesarios para hacer frente a estas erogaciones.

Sr. Belgrano Rawson. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Carreira. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — El argumento jurídico no puede jugar desprendido del argumento económico. Esto es fundamental, porque estamos legislando para que la ley sea viable, aplicable. Si la Nación, cuyo presupuesto de este año es de 195.000 millones de pesos, de los cuales acusa el Ministerio de Economía 93.000 millones de pesos de déficit, tuviera que ir, por la vía de esta modificación que se propone, en auxilio de los presupuestos de las provincias y municipios del país, yo pregunto a los señores diputados Carreira y Muñiz de dónde saldría el dinero para poder hacer frente a esa situación.

Sr. Muñiz. — Me he anticipado a su pregunta. Dije recién que el impuesto al mayor valor puede cubrir esos déficit.

Sr. Presidente (Del Pero). — Sírvese no interrumpir el señor diputado Muñiz.

—Suenan las campanas.

Sr. Presidente (Del Pero). — Ha expirado el término de que reglamentariamente disponía el señor diputado Carreira.

Sr. Carreira. — No he redondeado mi pensamiento, y quedaría un poco en el aire la respuesta a la interrupción que me ha hecho el señor diputado de la Federación de Partidos de Centro.

Sr. Presidente (Del Pero). — El señor diputado debe tener en cuenta el tiempo de que dispone para desarrollar su pensamiento. En consecuencia, la Presidencia le ruega que cierre su exposición, porque ya ha vencido el término que tenía para hacer uso de la palabra.

Sr. Carreira. — Voy a decir una frase nada más, y no hecha.

Yo, señor diputado Belgrano Rawson, hice números sobre los quebrantos eventuales que se pueden presentar en los presupuestos de los municipios y de las provincias de aplicarse este régimen salarial. He hecho una especie de muestreo con los presupuestos respectivos de las cinco provincias principales del país.

Tiene razón el señor diputado Belgrano Rawson: lo que demandará al gobierno central un auxilio a las provincias en este momento, es del orden, según mis cálculos, de los 50 mil millones de pesos. Pero el gobierno federal tiene re-

cursos a mano, ya que la evasión impositiva y la morosidad en el pago de gravámenes nacionales oscila en los 80 mil millones de pesos.

Yo comprendo que se plantean dificultades financieras serias, pero tenemos que hacer un esfuerzo para superarlas.

Sr. Presidente (Del Pero). -- Tiene la palabra el señor diputado Monte.

Sr. Monte. -- Me voy a referir al inciso a), complementando la exposición de mi colega, el señor diputado Pérez Gallart.

El problema planteado requiere una solución de estricta justicia y de respeto a la dignidad humana. En consecuencia, nos pronunciamos por la inclusión del personal del servicio doméstico en este inciso.

No advierto por qué nosotros, miembros de uno de los poderes del Estado, vamos a dejar una vez más en el olvido a quienes pertenecen a este gremio, que permanentemente ha vivido sumergido.

El aspecto económico, como bien se ha señalado, no ofrece grandes dificultades, por cuanto está previsto en el artículo 3º que a los efectos de la presente ley el salario comprende toda remuneración e incluye especies, alimentos, uso de habitación, asignaciones familiares. De manera que teniendo en cuenta el artículo 3º, creo que no se producirá problema alguno de desocupación que perjudique a este personal al que nosotros queremos beneficiar.

Pienso también que habrá que introducir modificaciones al artículo 21, para que el Consejo, o en su defecto el Poder Ejecutivo, entre las disposiciones que debe adoptar en un plazo de 30 días, considere esta situación a fin de que perciban sus remuneraciones de inmediato, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, los miembros del personal del servicio doméstico.

Sr. Presidente (Del Pero). -- Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. -- Renuncio a hacer uso de la palabra, porque suscribo totalmente lo expresado por mi colega, el señor diputado Cornejo Linares.

Sr. Presidente (Del Pero). -- Tiene la palabra el señor diputado Rouzaut.

Sr. Rouzaut. -- Me voy a referir exclusivamente al inciso b) del artículo 16, sosteniendo que la ley nacional no puede, en manera alguna, resolver el problema de los salarios de los agentes de las administraciones provinciales y municipales.

Es evidente que el Estado federal, creado por la Constitución de la República, ha provocado la descentralización política y, en consecuencia, la administrativa. Así, los artículos 5º y 106 de nuestra Ley Fundamental mandan que cada provincia dicte su propia Constitución y se rija por ella, en tanto que el 105 dispone que las provincias elijan sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios, sin intervención del gobierno federal.

En sus exposiciones los constituyentes del 60 —principalmente las de Sarmiento y Mitre— pretendieron que el gobierno federal en modo alguno interviniera en la redacción y aplicación de las constituciones provinciales; y fueron ellos los que suprimieron del artículo 5º de la Constitución, tal como venía de 1853, la parte que obligaba a las provincias a mandar sus constituciones al Congreso Nacional para su revisión. De tal manera se provocó la descentralización política y como consecuencia la descentralización administrativa. Por ello es que cada provincia hace su cálculo de recursos y resuelve la inversión de sus rentas propias; celebra con sus agentes el contrato administrativo de función pública y establece el estatuto de los funcionarios y empleados provinciales, determinando en esas leyes de provincia cuáles han de ser los derechos y obligaciones de los agentes provinciales, y fijando también en esos estatutos de la función pública los beneficios de esos servidores, con lo cual también se integra el concepto remuneratorio.

Por tales circunstancias, cada provincia en su presupuesto puede determinar cuáles son las remuneraciones a que tienen derecho los empleados y funcionarios provinciales...

Sr. Ocampo. -- ¿Qué dice el artículo 67, inciso 8 de la Constitución?

Sr. Rouzaut. -- ...y la ley nacional no puede hacer otra cosa, señor presidente, que establecer lo que determina la segunda parte del inciso b): «El Poder Ejecutivo nacional gestionará ante los gobiernos provinciales la sanción de normas concordantes con las de la presente ley, en beneficio del personal mencionado.»

Sr. Presidente (Del Pero). -- Tiene la palabra el señor diputado Lejarraga.

Sr. Ocampo. -- ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

El artículo 67, inciso 8 de la Constitución...

Sr. Presidente (Del Pero). -- El señor diputado Ocampo no está en el uso de la palabra, ni está anotado para hablar.

Sr. Ocampo. -- He pedido una interrupción al señor diputado Rouzaut.

Sr. Presidente (Del Pero). -- El señor diputado Rouzaut ya ha terminado su exposición.

Está en el uso de la palabra el señor diputado Lejarraga.

Sr. Lejarraga. -- Voy a pronunciar unas pocas palabras, porque me parece que la insistencia es oportuna y quizás conveniente.

Creo que el señor diputado Muñiz ha planteado concreta y cabalmente los términos de esta cuestión. Y que en su contra, no se han expuesto razones, sino prejuicios, y en el mejor de los casos motivos de orden circunstancial.

Con respecto al inciso b) del artículo 16, acerca de la aplicación del salario mínimo, vital y móvil a los agentes de las administraciones provinciales y municipales, he escuchado con mucha atención al señor diputado Pérez Gallart,

porque hablaba como federalista, y también al señor diputado Rouzaut, como profesor de derecho constitucional; dos títulos que provocan mi reverencia y que me fuerzan a esta máxima atención. Confieso que a pesar de mi cordial disposición, han estado muy lejos de convencerse ni de conmover siquiera la convicción que tengo en esta materia.

Yo también soy federalista, y en cierto modo soy también un diputado provinciano —aunque no tan entrado, como el señor diputado Pérez Gallart, en la Patagonia—; pero no es este federalismo de tipo formal el que profeso y propugno. El federalismo que definiendo se encuentra, por supuesto, sustentado en la Constitución Nacional, pero es de raíz económica y de impulso social, de auténtica y orgánica descentralización, para redimir el interior argentino, empezando por redimir al hombre del interior argentino.

Con respecto a esta ley de salario mínimo, vital y móvil, si en una cosa es preciso que nos pongamos de acuerdo, es en la conclusión precisa de que lo que esta ley desea es contemplar el valor humano, el valor de los hombres y mujeres que trabajan, como el supremo bien de la República, como el capital primero que debemos custodiar en toda la amplitud del territorio nacional. Y en el caso, de eso se trata. Tan trabajador es quien desempeña funciones en la administración nacional como el que trabaja en la administración provincial o comunal o en la actividad privada, y lo que aquí, para oponerse, se quiere hacer valer no son precisamente razones, sino motivaciones como he dicho, de carácter contingente o circunstancial.

¿Qué valor tiene desde el punto de vista expuesto, decir que la sanción de esta ley va a crear a las provincias y municipios problemas de orden financiero? Es posible que, en hipótesis, los puede crear, pero, ¿acaso la sanción de esta ley no puede crear de momento, también a la actividad privada, problemas económicos y financieros?

Serán dificultades circunstanciales. Ese tipo de legislación suele crear algunas perturbaciones y desequilibrios que, andando los días, encuentran sus oportunos y previsores reajustes.

Cuando a fines del año 1945 se estableció el sueldo anual complementario o aguinaldo, el mundo de la empresa, clamaba por los desequilibrios económicos y financieros que iba a provocar. Pero la medida tenía un fondo de innegable justicia, y aunque pudo en algunos casos haber creado dificultades, no tardó mucho tiempo para que ellas se fueran solucionando y hoy nadie haría ese tipo de argumentación.

Por otra parte, el sentido nacional de la legislación del trabajo se da en esta ley de salario mínimo, vital y móvil. Cuando hace años se dictó la ley de la jornada de ocho horas, lo fue para todos los trabajadores de la República, aun para los empleados y obreros de las provincias y municipalidades. En este caso, también podría haberse levantado la voz de un federalista formal

y decir que se estaba invadiendo las jurisdicciones provinciales y municipales. No hay tal cosa.

Esta ley de salario mínimo tiene en lo esencial, el mismo fondo que el de la ley de la jornada de ocho horas; no son más que capítulos de ese proceso reivindicador y ascendente de la legislación del trabajo.

Paso a referirme al servicio doméstico. Servidumbre; ésa es la palabra.

Sr. Peña y Lillo. — Así la ejercitará el señor diputado en su casa.

Sr. Lejarraga. — Yo no la ejercito así en mi casa y creo que el señor diputado tampoco lo hará así en la suya. Estoy recogiendo una expresión corriente, usual, que ayuda a caracterizar el problema. Se habla del servicio doméstico como de una servidumbre y el propio Código Civil emplea una expresión muy particular cuando dice «conchabo».

Justamente, podría decirse que éste es el último eslabón de una servidumbre que debemos aniquilar, que debemos tener el ánimo suficiente para romper.

El señor miembro informante hablaba al respecto, contestando al diputado Muñiz, en términos imprecisos y dubitativos, diciendo, si mal no escuché, que no se habían animado a incluir el servicio doméstico en los beneficios de esta ley, pero que esto tiene un sentido provisional y que esperan que estudios posteriores del Poder Ejecutivo permitan su inclusión. Esta Cámara, a nuestro juicio, desde ya debe incluir al servicio doméstico en los beneficios de la ley que estamos sancionando.

Cierro mi exposición diciendo que se invoca al Código Civil, monumento de legislación, sin duda, que yo reverencio, pero que en esta materia, debemos convenir, está algo atrasado. La antigüedad del código en este caso no es título de orgullo ni de intangibilidad. Justamente de lo que se trata es de reformar en la materia laboral el Código Civil. Esto me trae el recuerdo de la anécdota del doctor Palacios en su discurso de días pasados, evocando el debate hace ya muchos años como diputado, cuando fundó la inversión de la prueba en el régimen de accidentes del trabajo. En una antesala, un prestigioso profesor de derecho civil, diputado en aquel entonces, se acercó al doctor Palacios para decirle: es muy noble su iniciativa, es muy generosa y es muy justa, pero hay una barrera infranqueable para su sanción: el concepto de culpa del Código Civil que usted quiere modificar, que usted quiere invertir. Y el doctor Palacios replicó que justamente de eso se trataba, de invertir la prueba en la nueva materia del proyecto de indemnizaciones por accidentes del trabajo.

Aquí estamos, precisamente, en la política laboral que va rompiendo viejos moldes del Código Civil. Estamos en el nuevo derecho de los trabajadores; estamos en la legislación social, que empezó defendiendo a la mujer y al niño, como a los sectores más débiles, del trabajo y

de la sociedad, cuya atención requería el mayor esfuerzo de justicia y humanidad. Queremos que la legislación protectora del trabajo alcance ahora al sector olvidado del servicio doméstico, para que no pese sobre el mismo ni la sombra de servidumbre a que me refería al principio de mi exposición.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz. Como es una segunda intervención, dispone para ello de cinco minutos.

Sr. Muñiz. — Señor presidente: con leyes como la que estamos considerando se conforma el cuadro del derecho laboral que apunta a un nuevo orden de convivencia fundado sobre la libertad y la igualdad, es decir, sobre la libertad y la justicia social. Son expresiones del proceso de la revolución pacífica y creadora que recordara el señor presidente de la República en su mensaje al Honorable Congreso el 1º de mayo del corriente año.

La Constitución Nacional ha sido traída y llevada cuando se habló de los salarios zonales. Pero ahora se olvida que el artículo 14 bis no establece distinción alguna entre personal doméstico y personal no doméstico. No hay, pues, ningún impedimento de tipo constitucional para terminar con la desigualdad que he señalado.

Escuché con pena el recuerdo del artículo 1.624 del Código Civil, disposición anacrónica. Tan ley como el Código Civil es la que vamos a sancionar. Ambas reconocen un origen constitucional. No había precepto del Código Civil más fuerte e intocable que el artículo 1.197, que consagraba la libre contratación; y contra ese artículo, precisamente, se levantó con éxito la legislación laboral, porque el precepto «de que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma» permitió la expropiación del débil por el fuerte, mientras que el nuevo derecho se inspira en el superior propósito de colocar en paridad de condiciones al débil y al fuerte para que no haya más mujeres y hombres explotados por otros, sino mujeres y hombres en las mismas condiciones de libertad e igualdad.

Me apenó que se haya recordado el artículo 1.624 del Código Civil, citado por el señor diputado Maldonado, porque es un texto legal al que desearía derogar esta misma noche. Tuvo su explicación en el siglo pasado, cuando se sancionó el Código Civil, pero hoy es una rémora. Expresa, en efecto, que «el servicio de las personas de uno y otro sexo que se conchabaren (la servidumbre a que se refirió el señor diputado Lejarraga) —la colonia, la explotación del indígena y del negro, la explotación de mujeres y hombres que vivían en los miserables tugurios de aquella época— para el servicio doméstico, será juzgado por las ordenanzas municipales o policiales de cada pueblo».

Si no introducimos hoy mismo la modificación que propongo, las relaciones entre los empleados domésticos y sus patronos seguirá siendo materia de la jurisdicción policial. Eso es inconcebible en nuestra época para hombres como nosotros, que tenemos una filiación política y social perfectamente conocida, y creo que también para quienes dicen inspirarse en las encíclicas de los Papas.

Con toda seguridad que en la encíclica *Mater et magistra* no se hacen discriminaciones contra el personal doméstico, contra los trabajadores a los que el Código Civil llama conchabados y cuyas relaciones con el patrono están bajo la acción de la policía. Realmente eso es algo que subleva el espíritu. No puede ser. Los empleados y trabajadores domésticos deben ser considerados en la misma situación de todos los demás trabajadores de la República, y cualquier discriminación contra aquéllos, como la señalada, importa una subestimación de esos hombres y mujeres que son compatriotas nuestros.

La causa de semejante menosprecio radica, como lo ha dicho el señor diputado Peña y Lillo, en que forman un sector de la sociedad que, según lo expuso el nombrado señor diputado, no produce económicamente. Ahí está confesado el criterio de inferioridad en que se tiene a este sector de trabajadores; grave error, porque es un sector que trabaja en una labor socialmente útil y produce económicamente aunque el señor diputado no lo crea. No solamente producen esos trabajadores, sino también las mujeres, las que se ocupan de atender el hogar, por lo que tengo para ellos, para esos hombres y mujeres, el mismo respeto y la misma consideración que para todos los trabajadores argentinos. (Aplausos.)

Sr. Peña y Lillo. — Pido la palabra para una aclaración, porque he sido aludido.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Peña y Lillo, para una aclaración personal.

Sr. Peña y Lillo. — Quiero aclarar que cuando hice uso de la palabra empleé los términos: «beneficio económico directo», y no se me ha escapado que podría...

Sr. Muñiz. — La aclaración corre por su cuenta.

Sr. Peña y Lillo. — Quiero también señalar que el señor diputado Muñiz no ha advertido que cuando muchos legisladores hemos invocado el Código Civil no hemos ignorado que es una ley como cualquier otra, pero tampoco hemos ignorado que durante su larga vigencia, casi centenaria, el Código Civil ha conformado una costumbre, por lo cual debe legislarse con medida. Incluso cuando se dictó el Estatuto del Peón, en las consideraciones que lo fundamentaron se hizo mérito de las particularidades de cómo se desarrollaba hasta entonces la relación patronal con el obrero del campo, para procurar no salirse de ellas.

Seguir la costumbre no quiere decir cometer un delito ni permanecer insensible. Quiere decir algo más. Yo no me levantaré de hombros, como lo han hecho algunos señores diputados, y decir: «Qué me importa que suba el salario del obrero doméstico; que se queden sin obreros domésticos.» Eso es ignorar la realidad de la República, porque si el servicio doméstico subsiste es principalmente a causa de que no hay otras fuentes de trabajo para esas personas. Cuando se les dé en toda la República, no sólo en esta ciudad de Buenos Aires, fuentes de trabajo suficientes, quizá podamos levantarnos de hombros y decir «qué nos importa». Hacerlo en otras circunstancias ese «qué nos importa» equivale a decir «que se mueran de hambre».

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Maldonado.

Sr. Maldonado. — Al parecer, señor presidente, habría cometido una «imprudencia», si no una franca irreverencia, al haber recordado expresas disposiciones de nuestro gran Código Civil. Sin embargo, con el fin de aportar un punto de vista y un criterio tenido en cuenta por la mayoría de la comisión redactora del dictamen que estamos discutiendo, me pareció imprescindible hacer esa recordación. Y es lamentable para mí el tono un tanto admonitorio con que se ha dirigido a mi persona el señor diputado Muñiz, por quien tanto respeto siento.

Ya que estamos un tanto desviados del tema y hemos entrado a referirnos al ordenamiento jurídico de la República, voy a recordar lo que establece el artículo 1º de nuestra Constitución, cuando dice: «La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal...» Adoptar este sistema significa que las provincias tienen absoluta autonomía. En otros Estados federales, como en Norteamérica, en el Brasil y en la Confederación Suiza, más que autonomía tienen realmente soberanía, a punto tal que en los Estados Unidos y en Suiza el Congreso Federal no sanciona leyes de fondo para todos los Estados, sino que lo hace cada uno para sí conforme lo estime conveniente u oportuno.

Por otro lado, el artículo 5º de nuestra Constitución, revisado por la Convención de 1860, ya que originariamente el texto del 53 establecía que las Constituciones provinciales antes de entrar en vigencia debían ser sometidas a la aprobación del gobierno federal, lo que era una restricción manifiesta del sistema federal, determina lo siguiente: «Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, la educación primaria. Bajo estas condiciones el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.»

Se vulneraría el régimen municipal si una ley del Congreso invadiera la jurisdicción de los

municipios, y no es esto lo que la Carta Magna quiere ni lo que nosotros queremos, aunque se nos haga aparecer como que somos enemigos de cualquier hombre o mujer que trabaja por cuenta ajena. No es éste el concepto que tenemos, y tanto no lo tenemos, que hace un momento he recordado que siendo concejal del municipio de Córdoba presenté un proyecto de ordenanza, relativo al personal de servicio doméstico, mucho más avanzado que lo que ahora se proyecta. Es cierto que hace veinte años no se hablaba de salario vital móvil en la República, pero con mis compañeros de bancada en aquella época sosteníamos ya el concepto de la dignidad del trabajador doméstico. De manera que no se pretenda hacernos aparecer como enemigos de un sector de trabajadores, cualesquiera que ellos sean, produzcan un beneficio o no a su empleador.

Lo que defendemos ahora es un concepto institucional, porque la Unión Cívica Radical es esencialmente federalista, y defendemos el federalismo y el régimen municipal a costa de cualquier crítica que se nos quiera hacer. Dejo así establecidas las razones por las cuales en el proyecto que se está considerando no sólo se excluye al servicio doméstico sino también a los agentes provinciales. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Cantoni.

Sr. Cantoni. — Para fijar la posición de la Confederación de Partidos Provinciales en cuanto al inciso b) del artículo que estamos tratando, y la mía personal en cuanto al inciso a).

Estoy en un todo de acuerdo con la posición asumida por el sector del socialismo argentino en cuanto al inciso a). Por tal motivo, y a título personal, voy a votar la supresión de este inciso.

En cuanto al inciso b), es indudable, y aquí se señaló acertadamente, lo delicado que podría ser para el Poder Ejecutivo nacional la aplicación de esta ley. Y si es delicado para el Poder Ejecutivo nacional, mucho más lo es para los ejecutivos provinciales. Aquí se ha hablado, señor presidente, de que tenemos una Constitución que establece el régimen republicano, representativo y federal. Pero esto es en los papeles, porque es indudable que el país no ha vivido nunca dentro de un régimen republicano federal, y si ha vivido en él en alguna oportunidad, por lo menos desde hace muchos años permanece al margen del sistema. En estos momentos estamos intentando una rectificación en este aspecto, y yo me felicito haber escuchado a los señores diputados de todos los sectores de esta Cámara palabras de defensa del régimen federal.

Desde hace muchos años la República tiene su economía centralizada en la Capital Federal. El sistema económico vigente ha hecho que el resto de la República estuviera en buena parte subvencionando a la Capital, y ello ha ocurrido a través de la ley de coparticipación, que posibilitaba que ésta recibiera el 70 por ciento de los impuestos recaudados en todo el país.

No es que creamos que esta ley de salario mínimo vital y móvil no sea humana; no es que pensemos que los empleados de las provincias o de las municipalidades no deben cobrar exactamente igual que los demás empleados del resto del país.

El país ha tenido hombres de gobierno de gran sensibilidad popular y quisiera aquí rendir el homenaje que merecen los diputados constituyentes de la provincia de San Juan pertenecientes al bloquismo que en 1927, sentando un verdadero antecedente en la legislación de la República, incluyeron en el artículo 31 de la Constitución provincial el salario mínimo vital y móvil.

Por la importancia de este antecedente, solicito que la Cámara me permita leer este artículo 31 de la Constitución vigente en la provincia de San Juan. Dice así: «Queda reconocido a todos los habitantes de la provincia el derecho de un mínimo de seguridad económica. A este efecto se establecerá por ley la jornada de trabajo con relación a las exigencias de la vida higiénica y el estado de desarrollo industrial y agrícola ganadero; el salario mínimo con relación al costo de la vida; un régimen de seguros contra la enfermedad, la vejez y la invalidez y de amparo a la maternidad, la viudez y la niñez desvalida, en el cual podrán fijarse contribuciones obligatorias; el fomento de la construcción de viviendas higiénicas con el aporte del Estado, sea en forma de desembolsos directos, de otorgamientos de créditos en condiciones liberales o de liberación de gravámenes; la reglamentación de los sindicatos y el encauzamiento normal de las relaciones entre el capital y el trabajo mediante normas legales que atribuyan a la autoridad las facultades necesarias para hacer efectivas las garantías que consagra este artículo.»

Los problemas contemplados por este artículo 31 de la Constitución de San Juan de 1927 son, en gran parte, los problemas que hoy estamos viviendo en la Capital y en este recinto. Pero ¿qué es lo que ha hecho imposible que este artículo 31 tenga vigencia en la provincia de San Juan? El desconocimiento, en la actualidad, de que además de una realidad política hay una realidad económica en la República, el desconocimiento de que hemos estado subvencionando en gran parte cosas que no son nuestras, cosas que son anacionales.

Es por todo ello que la Confederación de Partidos Provinciales va a votar el inciso b) del artículo 79 tal como figura en el dictamen de la mayoría. Quiero dar un ejemplo y decir algo, que hasta este momento no se ha dicho, abonando este artículo.

La provincia de San Juan, que es pequeña y no tiene el desarrollo económico que poseen las cinco provincias hermanas mayores, tiene sancionado su presupuesto desde hace un mes, en el que se establece un aumento de, más o menos, 20 por ciento en los sueldos de los emplea-

dos provinciales y municipales. Eso ha significado que el presupuesto de la provincia tenga un desequilibrio de alrededor de 500 millones de pesos.

¿Qué le ocurrirá a la provincia de San Juan al acordársele a todos los empleados públicos de la República el salario mínimo, vital y móvil? Es una provincia dedicada al monocultivo, que vive exclusivamente del trabajo que realizan durante todo el año 12.000 ó 14.000 pequeños viñateros a quienes recién se les ha solucionado su problema, porque hace poco tiempo se ha sancionado una ley por la que se ha dado solución económica a esos viñateros sin bodega que antes estaban al arbitrio de los bodegueros, que les pagaban cualquier precio por la uva, muchas veces en cuenta corriente.

La provincia de San Juan que, como dije, tiene un monocultivo, no puede seguir aumentando más los impuestos a los viñateros, que son los que verdaderamente la sostienen; y si hoy ya tiene déficit es de imaginarse lo que ahora pasará. Por eso, cuando esta Cámara trate el artículo nuevo número 26 propuesto por la disidencia de la minoría voy a volver a plantear el problema; con ese mismo concepto con que voy a votar la inclusión del artículo nuevo propuesto, en este momento mi bloque va a votar la aprobación del inciso b) del dictamen de la mayoría de la comisión.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — No me voy a referir al inciso a), que el señor diputado Muñiz, con esa vehemencia tan simpática y atrayente que caracteriza su actuación parlamentaria, ha atacado violentamente, porque creo que el único argumento real de todos los que se han dado para mantener la vigencia de ese inciso es el de orden económico, que utilizó recién mi compañero de bancada el señor diputado Peña y Lillo.

Pero si quiero referirme al inciso b), en cuanto excluye de esta ley a los empleados de las administraciones provinciales y municipales del país.

Los argumentos de orden constitucional los ha dado el señor diputado Rouzaut con gran justeza y brillo.

Yo quiero ir a los otros. Aquí se ha dicho recién que esta ley que estamos tratando conforma la legislación laboral del país. Comparto ese criterio; creo que conforma la legislación laboral del país y que se va a aplicar en todo el ámbito nacional; pero donde no puede entrar una ley de la Nación es a modificar presupuestos de las provincias o los municipios del país. Esto es evidente desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista práctico, que es lo que más importa en este momento. Podemos hacer discursos muy interesantes, llenos de lirismo teórico; pero estamos legislando para el país tal cual es hoy, y para ello debemos sancionar leyes viables, que nos saquen hacia adelante en lugar de sumirnos en el caos.

A fin de agregar algún argumento más de orden económico a los que han dado el señor diputado Cantoni y otros señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra, me voy a referir a un asunto que conozco de cerca: la situación económica de la provincia de San Luis, una de las provincias más chicas del país y quizá de las más pobres. Sirva esto de ejemplo.

El gobierno de San Luis ha recibido la provincia en el caos financiero y económico; y se encontró este año, al sancionar su presupuesto, con sueldos que en algunos casos alcanzaban apenas a 3.750 pesos. Haciendo un gran esfuerzo los elevó en dos mil pesos, pero de todos modos estará con ello por debajo de los topes que resulten de esta ley. Dicha provincia tiene que afrontar un presupuesto de 2 100 millones de pesos, con un déficit de 774 millones, con deudas consolidadas y no consolidadas superiores a los 900 millones, y con compromisos financieros adquiridos por gobiernos anteriores superiores a los 1.000 millones de pesos. Esta es una de las provincias más chicas, y el caso es que si la provincia no fuera un Estado, sino una empresa, esta situación la habría llevado a la quiebra hace mucho tiempo. La situación, además, se repite más o menos igual en todos los Estados provinciales argentinos.

Se ha dicho recién que el artículo 67, inciso 8º, de la Constitución obliga al Tesoro Nacional a acudir en subsidio de las provincias cuyos presupuestos no alcancen para cubrir sus necesidades. El argumento es indestructible, pero es casi infantil. Cuando cada una de las provincias argentinas, que tienen este cuadro que he pintado muy rápidamente con relación a la mía, vengan a la Nación para que ésta les ayude a aplicar la ley tal cual se pretende, ¿cómo va a hacer la Nación? Se ha dicho que la Nación tiene recursos. Sí, señor presidente; tiene recursos y dolores de cabeza, diría yo. El presupuesto de este año —lo dije en una interrupción que me concedió el señor diputado Carreira—, con 195 mil millones de pesos, acusa un déficit de 93 mil millones, y hay cuadros demostrativos de cómo se descompone ese presupuesto que señalan hechos que son tremendos y que debemos tener presentes cuando legislamos, porque hacen al futuro del país.

El presupuesto nacional insume un 68 por ciento en gastos improductivos; absorbe un 22,2 por ciento para enjugar el déficit ferroviario, y solamente destina el 1,6 por ciento a la salud pública y el 12,8 por ciento a la educación. Si por la vía de ese lirismo teórico, que es muy lindo para una tribuna callejera, pero no cuando estamos legislando para el país tal cual es hoy, queremos agregar a ese presupuesto los déficit provinciales y municipales que resulten de la aplicación de esta ley, veremos que este propósito choca contra una realidad tremenda.

Yo sostengo que esta ley, que será de gran utilidad en el país, si bien traerá algunos ajustes en algunos presupuestos, el país la necesita.

La votamos con profundo convencimiento, porque en Santa Fe también sancionamos la inclusión de la cláusula pertinente en la Constitución Nacional.

Esta ley tiene que ser sancionada mirando la realidad del país. Por encima de cualquier argumento de tipo teórico que se quisiera esgrimir, está la realidad a que me he referido y, que, desde luego, no es extraña a ningún diputado que se sienta en estas bancas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Llaver.

Sr. Llaver. — Me voy a referir al inciso b) del artículo en consideración, refirmando los conceptos vertidos por el señor diputado Rouzaut, demostrativos de la razón que existe para sostener este artículo del dictamen.

Evidentemente, no existen razones que justifiquen las apreciaciones que se han hecho en contra de esta tesis, cuando se pretende que haya falta de sensibilidad o diferenciaciones odiosas al excluir a los agentes del servicio provincial y municipal, porque precisamente, la misma disposición establece la preocupación que el Poder Ejecutivo debe tener para gestionar ante los gobiernos de provincia la sanción de normas concordantes con las de este proyecto, es decir, que se tiene preferentemente en cuenta la necesidad de que las provincias y los municipios también sancionen disposiciones semejantes.

Lo que se quiere es que esta legislación pueda ser aplicable sin riesgo de ser impugnada de inconstitucionalidad, lo que manifiestamente ocurriría si en el despacho se establecieran normas imperativas obligatorias para las provincias y municipalidades a través de esta ley.

Se ha incurrido en un manifiesto error, que nace del hecho de equiparar el contrato privado de trabajo con el contrato administrativo de función pública. Para que esto se pueda entender correctamente debe explicarse en función de las disposiciones de la Constitución Nacional que prevén el régimen de contratación privada en relación a la institución de la forma federal de gobierno. Vale decir que se deben interpretar concordantemente las normas de los artículos 19, 5º, 67, inciso 11, y 105 de la Constitución Nacional.

Cuando el artículo 67, inciso 11, atribuye al Congreso la facultad de dictar, entre otros, el Código Civil, le está acordando la facultad de legislar y reglar todo lo que se refiere al contrato privado de trabajo, que naturalmente comprende todo el régimen laboral por disposición de la reforma sancionada en la última Convención de Santa Fe.

Pero no se puede argüir que esta misma facultad de legislación nacional pueda corresponder al régimen del contrato administrativo de función pública, o sea, el contrato público de trabajo. Aquí entran a funcionar las normas que aseguran el régimen federativo y las autonomías provinciales, cuando a través del artículo 59 se atribuye a las provincias la facultad de dictar su propia Constitución, y en el 105 se establece que se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas; eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios —destaco esta última referencia—, sin intervención del gobierno federal.

Si las provincias tienen facultades para designar a sus funcionarios, en esta atribución va ínsita la de fijarles la retribución que corresponda, ya que ésta constituye uno de los elementos integrantes del contrato administrativo de función pública.

Quiere decir, entonces, que si en el afán de procurar comprender en las disposiciones del proyecto a los funcionarios o servidores de los Estados provinciales y de los municipios, incluyésemos en el articulado de esta ley una norma en tal sentido, estaríamos incorporando a sabiendas una disposición que no tendría en definitiva vigencia, porque sería manifiestamente inconstitucional.

Además, quiero señalar que fuera de las razones de orden económico que se han puntualizado con suficiente claridad, habría también otras de carácter práctico. Yo pregunto, por ejemplo, cómo elaboraría sus presupuestos las provincias y las municipalidades, si un organismo extraño a ellas, como es el Consejo Nacional de Salarios que crea el artículo 79 de este proyecto, estuviera alterando periódicamente, en plazos que pueden ser de un año o aun más reducidos, los presupuestos anuales de aquellas provincias o municipios. ¿Cómo se solucionaría este verdadero desquicio institucional que se sembraría en las provincias y municipalidades, cuando un órgano extraño estaría alterando el funcionamiento regular de esas instituciones públicas, ya que tendrían que ir variando periódicamente sus presupuestos, al margen de las normas orgánicas dictadas por los Estados locales en uso de sus propias atribuciones?

Y todavía hay más, señor presidente. ¿Es que un organismo nacional, en el que no tienen representantes las provincias ni los municipios, de acuerdo con lo que dispone el artículo 79 ya aprobado, podría obligar a las provincias y comunas a aceptar remuneraciones mínimas y las variaciones que el mismo organismo fijase, sin que aquéllas hubiesen tenido la posibilidad de participar en la fijación de esas retribuciones y variaciones?

Todas estas razones, así como la preocupación revelada en el dictamen al establecer que el Poder Ejecutivo nacional gestionará ante los organismos provinciales y municipales la im-

plantación de normas concordantes con las de esta ley, son demostrativas de la inquietud, de la sensibilidad y de la preocupación que ha tenido la comisión en su dictamen de mayoría para comprender en los beneficios de la ley a todos esos servidores, pero dentro del marco constitucional y legal para impedir la frustración de sus derechos. (¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Molinas.

Sr. Molinas. — Por las razones que se dieron en el seno de la comisión, y concordante con la firma de nuestro representante puesta en el mencionado dictamen, el bloque demócrata progresista votará el artículo 18 tal como está redactado en el dictamen de la comisión.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

Sr. Gómez Machado. — Con respecto al inciso a), nuestro sector votará por su modificación, entendiendo que, si bien es cierto que ésta es una costumbre y que en los distintos proyectos de legislación laboral de los últimos cincuenta años siempre se ha hecho esa exclusión, no existen razones jurídicas ni económicas para efectuarla.

No hay argumento jurídico que pueda excluir al servicio doméstico del régimen laboral. Los problemas económicos que permiten todavía que en una sociedad como la nuestra exista un servicio de esta naturaleza, son imputables acaso a nuestra falta de capacidad de acción de los dirigentes para terminar con ese proceso a través de la plena ocupación. Pero, repito, jurídicamente no existe argumento valedero, ni es el anterior uno que pueda esgrimirse para excluir al servicio doméstico del régimen laboral. Por eso, votaremos por la modificación del inciso.

Con respecto al inciso b), advierto que se confunden las razones. Es cierto que el régimen federal está establecido en la Constitución. Los argumentos expuestos por el señor diputado Belgrano Rawson valen para las provincias y para la Nación. Fueron argumentos de tipo económico, referidos a la posibilidad de la incidencia de esta ley en un proceso masivo de desocupación, argumentos que rigen tanto para las provincias como para la Nación, de donde nada tienen que ver con el régimen federal.

Las razones dadas por el señor diputado preopinante, señor Llaver, haciendo la diferencia entre el régimen de contratación del Código Civil, el régimen laboral de la actividad privada, y el régimen del contrato administrativo de empleo público, también son válidas tanto para las provincias como para la Nación. De donde, si es exacta la afirmación del señor diputado, pregunto un poco alarmado si también estamos excluyendo de este régimen del salario mínimo, vital y móvil, al personal de la Nación. Porque la naturaleza jurídica del contrato de trabajo es diferente a la del contrato de administración pública, y eso vale tanto para la Nación como para las provincias.

Sr. Llaver. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Gómez Machado. — Tengo pocos minutos para desarrollar mi exposición, señor diputado.

Sr. Llaver. — El señor diputado ha formulado una pregunta.

Sr. Gómez Machado. — Le concedo la interrupción al señor diputado.

Sr. Llaver. — La razón surge de lo siguiente. La Constitución atribuye a la Nación la facultad de legislar sobre el régimen de contratación privada, a través del artículo 67, inciso 11. Cuando la Nación debe legislar con respecto a los empleados públicos, o sea referente al contrato de trabajo administrativo, lo hace en uso de sus propias facultades para lo nacional.

Pero esas facultades no las tiene para legislar en la misma materia con respecto a las provincias, porque eso importaría vulnerar las disposiciones que he citado de la Constitución Nacional, es decir, los artículos 10, 50 y 105.

Sr. Caro. — ¿Y el artículo 14 bis, señor diputado?

Sr. Gómez Machado. — Es decir, la diferente naturaleza jurídica del contrato de trabajo y del contrato administrativo referido a la función pública vale tanto para la Nación como para las provincias, repito, de donde nada tiene que ver que la Nación tenga facultades para dictar el Código Civil con la naturaleza intrínseca del contrato de empleo o del contrato administrativo.

Advierto, así mismo, que se utilizan los argumentos constitucionales a efectos de dejar a salvo la estructura federal de nuestra Constitución y la elemental facultad de la autonomía provincial para dictar sus presupuestos. Pero advierto también que no hay colisión, de ninguna manera, entre el establecimiento por una ley nacional de un régimen de salario mínimo y esa facultad.

Si nosotros estamos, a esta altura del proceso argentino, sosteniendo el federalismo para defender la pobreza y la falta de recursos de nuestras provincias, estamos negando el federalismo. Tenemos que decir que el Congreso tiene facultades constitucionales para dictar, en todo el ámbito de la República, el régimen del salario vital mínimo y móvil. Y ese régimen es válido para la Nación, para las provincias, para las municipalidades y para la actividad privada. Las municipalidades y las provincias tendrán que modificar sus regímenes y sus presupuestos de acuerdo con la ley que dicte la Nación. Eso es lo que jurídicamente corresponde.

Los otros argumentos expresados son válidos económicamente y no se refieren en manera alguna a un respaldo jurídico para establecer o no la norma. Tienen valor en la medida de la posibilidad material de aplicar el mínimo que estableceremos nosotros, posibilidad que vale tanto para la Nación, para las provincias, para las municipalidades, como para la actividad privada.

Jurídicamente no hay ningún impedimento, y no incursionamos de ningún modo dentro del ámbito de la autonomía provincial al establecer un mínimo que tiene que ser respetado por todo el país. Tenemos facultades constitucionales para ello, y las provincias y las municipalidades tendrán que modificar sus presupuestos; y acaso concurrir la Nación, en la emergencia que corresponda, con su ayuda económica.

Los argumentos económicos valen para estar en contra o para estar a favor de la ley que estamos votando, pero de ninguna manera para referirse concretamente al inciso a) o al inciso b), por cuya exclusión de la ley votaremos.

Nada más.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Las derivaciones de tipo teórico que ha tenido el debate obligan a fijar algunos puntos de vista.

Coincido con la argumentación formulada en ese plano por el señor diputado Gómez Machado. Entiendo que es innegable la facultad del Congreso de legislar en esta materia. Los argumentos que se han traído, acaso referidos a la interpretación tradicional de nuestro federalismo, no cuentan, porque en esta materia deben ser referidos al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Todo lo que sea compensación del trabajo ajeno está reglado por el artículo 14 bis de la Constitución, que impone que la retribución tenga un mínimo vital uniforme para todo el país. Eso debe quedar bien aclarado, porque los argumentos pueden traerse nuevamente a colación cuando se trataren en el futuro casos de esta naturaleza.

Como provinciano, soy celoso del federalismo, pero creo que en el caso no está involucrada, bajo ningún concepto, la organización federal, porque no se vulneran con una sanción de esta naturaleza las autonomías provinciales por imperio, repito, del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

No voy a entrar en otras consideraciones para rebatir los argumentos de quienes se oponen a la redacción de este artículo. Los argumentos más valederos, expresados en el curso del debate, son los de tipo utilitario u oportunista, como los esgrimidos por el señor diputado Belgrano Rawson, como ser el de la imposibilidad material para las administraciones provinciales y comunales de atender las erogaciones que demandare la atención de la presente ley. Me pregunto si no sería del caso hacer omisión total de estas consideraciones y procurar aplicar lisa y llanamente el inciso 8º del artículo 67 de la Constitución Nacional, que ordena al gobierno federal acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias cuyas rentas no alcancen para cubrir sus gastos ordinarios.

Sr. Belgrano Rawson. — ¿De dónde se obtiene el dinero?

Sr. Caro. — Lo tendrá que arbitrar el Congreso. Eso es de alta política y toca resolverlo al partido que está en el gobierno... (Risas), ... con la colaboración y responsabilidad de todos; pero repito que la conducción del país recae principalmente sobre ese sonriente sector oficialista. La contención de los gastos públicos, las reformas estructurales de que tanto estamos hablando, la promoción del desarrollo integral de las fuentes de riqueza del país, son los medios de los que va a salir el dinero para subvenir a los gastos de las administraciones provinciales cuando sus recursos no alcanzan. Esto lo digo no en tono de admonición y mucho menos de agorería. Simplemente he querido centrar la cuestión en el ámbito constitucional, y omito la opinión sobre otros argumentos que podrían darse.

Sr. Presidente (Del Pero). — La Presidencia consulta al señor diputado Muñiz acerca de si insiste en su moción de que este artículo vuelva a comisión.

Sr. Muñiz. — Insisto, señor presidente, con una pequeña variante: para no perturbar la labor de la Cámara, que la votación se haga al final y mientras tanto se sigan considerando los otros artículos.

Sr. Presidente (Del Pero). — La Presidencia manifiesta que en la consideración de este artículo han hablado 21 señores diputados.

Sr. Elena. — Que se vote, señor presidente.

Sr. Presidente (Del Pero). — Se va a votar la moción del señor diputado Muñiz de que se postergue la consideración del artículo 16.

Sr. Pizarro. — ¿Hay número en el recinto?

Sr. Presidente (Del Pero). — Sí, señor diputado, hay quórum estricto.

Se va a votar.

—Resultado negativo.

Sr. Presidente (Del Pero). — Se va a votar el artículo 16 tal cual figura en el dictamen de la comisión.

Sr. Pérez Gallart. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Del Pero). — Se está votando el artículo 16, señor diputado.

—Resultado afirmativo.

Sr. Pérez Gallart. — Quería solicitar que se votara el artículo 16 por partes, pero el señor presidente no me dio el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Del Pero). — El artículo 16 ha sido votado y aprobado, y así lo ha proclamado la Presidencia.

En consideración el artículo 17. Se va a votar.

—Resultado afirmativo.

Sr. Presidente (Del Pero). — En consideración al artículo 17 bis.

Sr. Monte. — Solicito del señor presidente quiera anotarme para hacer uso de la palabra, a

fin de que no se repita lo ocurrido con respecto a los dos artículos anteriores.

Sr. Presidente (Del Pero). — La Presidencia solicita al señor diputado quiera informar qué es lo que ha ocurrido.

Sr. Monte. — Lo que ha ocurrido es que se nos negó el uso de la palabra para defender nuestra posición.

Sr. Presidente (Del Pero). — El señor diputado no solicitó oportunamente el uso de la palabra.

En consideración el artículo 17 bis.

Sr. Luco. — Pido la palabra para solicitar la reconsideración del artículo.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — Había solicitado la palabra, señor presidente, para pedir la reconsideración de la votación del artículo 17, porque quizá la Presidencia no advirtió en su oportunidad que había pedido la palabra para proponer un agregado que creo ha de contribuir a aclarar posibles situaciones jurídicas posteriores.

Sr. Pena. — ¿Cuál es el agregado que desea proponer, señor diputado?

Sr. Luco. — En el segundo párrafo del artículo, que dice: «Serán autoridades de aplicación de la presente ley los organismos nacionales o provinciales que tengan competencia en materia de policía del trabajo en sus respectivas jurisdicciones», propongo agregar después de una coma, «sin perjuicio de la acción judicial que el trabajador pudiera ejercer», o «sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran corresponder al trabajador».

Aunque el artículo está claro, ésta es una ley solamente referida al salario mínimo vital y móvil, y como las autoridades para esto son las direcciones de trabajo provinciales y el Ministerio de Trabajo de la Nación, deseo evitar toda posibilidad de una interpretación dual, pues si no se introduce este agregado se podría creer que hay una especie de instancia administrativa previa, prejudicial, cuando algún trabajador tenga que reclamar por diferencias de salarios. Aunque el agregado es un poco abundante, creo que va a aclarar el sentido de la ley.

Sr. Presidente (Del Pero). — Se va a votar si se reconsidera el artículo 17.

—Resultado afirmativo.

Sr. Presidente (Del Pero). — ¿La comisión acepta la modificación propuesta por el señor diputado Luco?

Sr. Pena. — La comisión acepta, señor presidente.

Sr. Luco. — Que tome nota la Secretaría de que el agregado sería, como dije, a continuación de lo que dice el párrafo segundo, después de una coma. Allí se agregaría: «sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran corresponderle al trabajador».

Sr. Secretario (Oliver). — El agregado iría a continuación de la parte que dice: «... en sus respectivas jurisdicciones».

Sr. Luco. — Así es.

Sr. Presidente (Del Pero). — Se va a votar el artículo 17 con el agregado aceptado por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Del Pero). — En consideración el artículo 17 bis.

Por Secretaría se va a leer.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo dice así: «La presente ley no afectará los mejores derechos que tuvieren los trabajadores por la aplicación de otras normas legales o convencionales. A los fines de la presente ley, entiéndese por jornada de trabajo la que normalmente desempeñe el trabajador o fije la convención colectiva.»

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La comisión entiende que la incorporación de este artículo es innecesaria, por cuanto es un principio fundamental del derecho del trabajo que los mayores beneficios no pueden ser de ninguna manera anulados por una ley posterior no referida a los mismos, y menos por una ley como ésta que establece un salario vital y mínimo y que no pretende regir sobre los contratos individuales o colectivos de trabajo. No obstante esto, como la aclaración no perjudicaría en manera alguna toda la estructura de la ley, la comisión acepta el artículo, pero requiere de los autores de la iniciativa que reparen si no sería prudente suprimir el párrafo segundo de este artículo nuevo, que dice: «A los fines de la presente ley, entiéndese por jornada de trabajo la que normalmente desempeñe el trabajador o fije la convención colectiva.» Esto ya está implícito en el primer párrafo.

Sr. Muñiz. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Pena. — Sí, señor diputado.

Sr. Muñiz. — En el artículo se hace referencia a la jornada de trabajo que normalmente desempeña el trabajador. ¿Qué se quiere decir? ¿Una jornada de catorce horas es normal? En el país hay una ley de jornada de trabajo; entonces, no podemos hablar de jornada normal, sino que hay que establecer que se trata de la jornada legal sin otras excepciones que la de los casos en que corresponde menor cantidad de horas.

Es necesario que quede claro que se deben cumplir estrictamente las normas sobre jornada legal.

Sr. Pena. — Esa disposición no ha sido redactada por la comisión.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — El segundo párrafo del artículo 17 bis, que está contemplado en las disidencias parciales presentadas por varios bloques, tiene el siguiente sentido.

La jornada legal está definida en el artículo 9º cuando se habla de reducciones por jornada inferior a la legal. Con esta disposición se quiere evitar que en el caso de existir una jornada legal de 8 horas y por modalidades del trabajo interno de un establecimiento se fijara un horario de 7 horas, corrigiéndose ese faltante de una hora el sábado, por ejemplo, se interprete que por no tratarse de la jornada legal no corresponde el salario mínimo vital. Este es el sentido por el que se establece el agregado. Se entiende que la jornada normal que desempeña el trabajador no se afecta y debe estar bajo el tope de la jornada legal que está contemplada por otra ley. Es decir que se procura que una modalidad local o regional o costumbre interna de un establecimiento no pueda ser usada para deteriorar el salario mínimo vital y móvil. Esta es la razón que fundamenta el agregado. Es posible que la redacción no sea feliz, pero el sentido es ése.

Quizá la redacción quedaría más clara sustituyendo «normalmente» por «habitualmente».

Sr. Presidente (Del Pero). — ¿Acepta la comisión el artículo 17 bis propuesto, con la sustitución de la palabra «normalmente» por «habitualmente»?

Sr. Pena. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Del Pero). — Por Secretaría se va a leer el artículo 17 bis aceptado por la comisión.

Sr. Secretario (Oliver). — Dice así: «La presente ley no afectará los mejores derechos que tuvieren los trabajadores por aplicación de otras normas legales o convencionales. A los fines de la presente ley, entiéndese por jornada de trabajo la que habitualmente desempeña el trabajador o fija la convención colectiva.»

Sr. Presidente (Del Pero). — Se va a votar el artículo propuesto como 17 bis, que pasaría a ser el artículo 18 del dictamen.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Del Pero). — En consideración el artículo 18 del dictamen, ahora 19.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Luco. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — Correspondería entrar a considerar el capítulo que contiene las disposiciones transitorias. En razón de que varios de los artículos originan posiciones diferentes entre los bloques, lo que hace indispensable un detenido examen, y teniendo en cuenta las conversaciones efectuadas con algunos señores diputados, formulo moción de pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 15 para la consideración detenida y exhaustiva de estos problemas, pues

de otra manera se va a prolongar el debate esta noche sin posibilidad de que concluya.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Pugliese.

Sr. Pugliese. — Entiendo que faltando tan pocos artículos, con respecto a los cuales presumiblemente hay dos disidencias fundamentales, deberíamos continuar sesionando. Todavía ni siquiera son las 24 y podríamos adelantar el trabajo.

Creo que haciendo un esfuerzo, y aun sin alcanzar a sancionar totalmente la ley, podríamos avanzar bastante en su consideración. En consecuencia, haría indicación de que se continuara sesionando.

Sr. Serú García. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Del Pero). — Se ha formulado una moción de orden que debe votarse.

Sr. Belgrano Rawson. — Pido la palabra para referirme brevemente a la moción.

Sr. Presidente (Del Pero). — Las mociones de orden no se discuten.

Sr. Belgrano Rawson. — Es para expresar un argumento justo.

Comparto el criterio del señor diputado Luco y también lo comparto mi bloque. Mañana puede terminarse la discusión de esta ley, probablemente en poco tiempo si nos reducimos en nuestros argumentos; pero también quiero destacar que mañana las comisiones comienzan a trabajar a las 8 y 30 y si prolongamos esta sesión hasta la 1 ó 2 de la madrugada —porque no va a ser menos—, no veo de qué manera mañana van a reunirse las comisiones. Le ruego al señor diputado Pugliese que recoja este argumento porque es real.

Sr. Presidente (Del Pero). — Se va a votar la moción del señor diputado Luco.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Del Pero). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 15.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 22 y 50.

6

APENDICE

INSERCIONES

1

SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SOLANA

(Del diario «El Mundo» del 3 de junio de 1964)

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina*A la opinión pública en general y a los trabajadores en particular*

Enfrenta la Confederación General del Trabajo, durante la aplicación de la segunda etapa del plan de lucha, a intereses, privilegios, sectores y grupos reaccionarios y a la campaña de confusión desesperada que el Poder Ejecutivo ha instrumentado a través de una cadena radial y de alguna prensa que mansamente sirve sus intereses.

Si bien la central obrera no acostumbra a polemizar con los que no dialogan y viven de espaldas a la realidad y a su pueblo, por el profundo respeto que le merece la opinión pública se ve precisada a formular algunas aclaraciones para poner las cosas en su lugar.

Primero: El plan de lucha de la CGT, sus objetivos y sus métodos de aplicación son conocidos por todo el pueblo argentino, y su ejecución fue preavisada con mucho tiempo para cada una de las acciones que se han llevado a cabo, habiéndose agotado todas las instancias.

Segundo: El secretario general, el secretariado y el consejo directivo están aplicando con decisión y con fe cada una de las etapas, debatidas y aprobadas democráticamente por sus cuerpos jerárquicos; es decir, el comité central confederal y el congreso.

Tercero: Algunos funcionarios, sin razón, sin fundamentos y en lo que podría calificarse como un verdadero acto de desesperación y debilidad, pretenden argüir que la acción de los trabajadores puede estar relacionada con los problemas e intereses petroleros.

A) La CGT, en el punto 8º de su plan de lucha, aprobó el siguiente texto: «La anulación de los contratos petroleros por inconstitucionales y atentatorios a la economía y soberanía de la Nación.»

B) En su oportunidad aplaudimos sin reserva el primer acto llevado a cabo por el Poder Ejecutivo en materia de petróleo; lamentamos no poder aplaudir el segundo, o sea la ocupación de las áreas, simplemente porque aún no se ha producido...

Cuarto: La CGT, a través de la acción disciplinada de los trabajadores en la ejecución del plan de lucha, ha demostrado dominio en la conducción, decisión en la aplicación, responsabilidad, vocación y fe para hallar el camino de justicia y de paz que el país necesita. Ni un solo incidente se ha producido en las acciones realizadas a lo largo y ancho de la patria. Ni un atentado, ni un despojo, ni un sabotaje, ni una agresión, sino que, por el contrario, los trabajadores han demostrado de que son capaces y decididos cuando el país lo exige y el pueblo lo reclama.

Quinto: Por lo expuesto precedentemente, sólo nos resta agregar que los atentados a locales de entidades o las provocaciones y amenazas de funcionarios y gobernantes, son signos de debilidad y de desconcierto, y la CGT no interviene en ellos ni desciende al nivel de la agresión anónima, ni a la calumnia ni a la infamia, escudada en los resortes del poder. Nuestra acción es modesta pero limpia, y sobre todo argentina.

Sexto: De los ocho puntos planteados por la CGT, al Poder Ejecutivo y al Parlamento, solamente se abordó la solución parcial de las jubilaciones y ahora parecería que el Parlamento se dispone a considerar otro de mayor importancia: salario vital, mínimo y móvil.

Septimo: Sobre este particular y ante la campaña orquestada y la política menuda que hacen algunos legisladores y algunos gobernantes y antes de que llegue al pueblo la frustración, queremos alertarlo aclarando: la CGT con estudios y fundamentos fijó en diciembre, como salario inicial de sacrificio, mínimo y móvil, para el trabajador de ambos sexos, sin cargas de familia, \$ 13.500 (su equivalente actual sería \$ 14.000). Pero se ha consumado en principio y pretende dar forma de ley a las siguientes mutilaciones y retrocesos:

A) Fijar un salario que no es vital, ni mínimo, y aún así sin fundamentos ni estudios, es decir, caprichosamente.

Por lo tanto menos aún podría ser considerado como salario familiar.

B) Ese supuesto salario sería distinto para cada zona; es decir, no existiría un salario sino varios, provocando distorsiones que originarán nuevos éxodos, explotaciones inicuas y competencias de zona a zona y el estancamiento de las que no se han desarrollado suficientemente.

C) Se legalizan por primera vez los descuentos zonales.

D) Se transforma el simple sueldo o salario en remuneración total, haciendo perder las conquistas obtenidas en años de lucha por los trabajadores y por sus organizaciones. Se conforma artificiosamente así un sueldo con ingresos que ya habían conquistado los trabajadores y se impide que los sectores con mayores posibilidades económicas y financieras concurren a una mayor remuneración.

E) La CGT no petició la fijación del salario para la familia tipo, que en base a estadísticas oficiales ascendía en abril del año actual a la suma de \$ 18.300, y no \$ 14.000, como se pretende postular con igual fin, señalando que ese salario se compone, además de los rubros conocidos, por los aportes que por el concurso de leyes de previsión soportan los traba-

jadores como carga social. Pero tal salario familiar debe estar ajustado a las necesidades reales del núcleo familiar y ser motivo de negociación a través de los convenios colectivos de trabajo.

Octavo: No podrá ninguna prensa, ni ningún funcionario o sector instrumentado por la explotación y el privilegio, tergiversar tan claros conceptos ni la posición eminentemente gremial y argentina de la CGT. Y lo que hoy enunciamos en esta solicitada lo venimos sosteniendo desde que nos hicimos cargo de la central obrera.

Noveno: No está actuando la CGT exclusivamente con la única mira de lograr un aumento de sueldo, sino que brega por obtener soluciones de tipo integral, costo de la vida, desocupación, cesantes representados, leyes represivas, amnistía, el funcionamiento

pleno de nuestra industria, restitución del mercado de consumo y la recuperación del bienestar para nuestro pueblo.

La CGT lucha además con y por nuestro pueblo, por nuestros hijos y por nuestro futuro, y no bajaremos la guardia, ni abandonaremos nuestra lucha en tanto no impere en el país la justicia social, la igualdad para los argentinos y la dignidad y soberanía nacionales.

Dijimos un día y lo repetimos: El plan de lucha continuará hasta el logro total de sus objetivos y en él no cabe la negociación, ni la claudicación.

Para la CGT el lema del momento es: o se está con el pueblo o se está contra el pueblo.

Confederación General del Trabajo.

2

SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CORNEJO LINARES

(Del diario «La Nación», del 19 de mayo de 1964)

Réplica a un diputado

El general (RE) Francisco Reynolds ha enviado una carta al diputado nacional Juan Carlos Cornejo Linares con motivo de una manifestación que el mencionado legislador formuló en el transcurso de un debate parlamentario.

«He leído en los diarios —comienza— algunas palabras que pronunció al intervenir en el asunto promovido al embajador McClintock. Dijo usted: «Nosotros somos acusadores de los matadores de Kennedy, que tenían las manos sucias de petróleo, al igual que los que derrocaron a Yrigoyen en 1930.» Esas pocas palabras encierran muchas falsedades, muy explicables porque se las utiliza para poder intercalar la falsedad más grave y monstruosa que, a la vez, constituye una intolerable ofensa para todos los que actuamos en ese movimiento, especialmente para los soldados que afrontados todas sus consecuencias.»

Luego de señalar que nadie que haya conocido a Yrigoyen podrá negar la justicia de los honores que hoy se le tributan, el general Reynolds expresa que «la única causa que motivó la intervención del Co-

legio Militar y que evitó el total fracaso de la revolución la constituyó el mal estado de salud del señor Yrigoyen, que lo impulsaba casi diariamente a no nacer ni dejar hacer nada». Narra inmediatamente la situación provocada por la mencionada actitud y expresa «que este tremendo caos fue el que evitó el Ejército con su intervención, el 6 de septiembre». En otro párrafo de su carta, el general Reynolds expresa: «Invito a usted y a todos los que deseen revisar los archivos periodísticos de la época, y tengo la absoluta seguridad de que en ninguno de ellos, ni aun en los más adictos al señor Yrigoyen, anteriores al 6 de septiembre, encontrarán la menor referencia a asuntos petroleros.» Afirma más adelante que no podía dar el ejemplo de tener «las manos sucias con petróleo», con el solo objeto de perjudicar al ex presidente, cuando mucho tiempo antes sufrió dos postergaciones con graves perjuicios para su carrera por su militancia radical. Finalmente expresa: «Hoy venimos a defender algo más sagrado que la vida, el honor de aquellos soldados argentinos que usted ha tenido la audacia inaudita de comparar con miserables mercaderes capaces de vender hasta la patria.»